

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

"ANÁLISIS DE LOS ABUSOS AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN
Y SUS IMPLICACIONES JURÍDICAS"

TESIS DE GRADO

CAMILO RODAS AZURDIA
CARNET 15030-10

QUETZALTENANGO, MAYO DE 2018
CAMPUS DE QUETZALTENANGO

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

**"ANÁLISIS DE LOS ABUSOS AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN
Y SUS IMPLICACIONES JURÍDICAS"**
TESIS DE GRADO

**TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES**

POR
CAMILO RODAS AZURDIA

PREVIO A CONFERÍRSELE
**LOS TÍTULOS DE ABOGADO Y NOTARIO Y EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO EN CIENCIAS
JURÍDICAS Y SOCIALES**

QUETZALTENANGO, MAYO DE 2018
CAMPUS DE QUETZALTENANGO

AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

RECTOR: P. MARCO TULIO MARTINEZ SALAZAR, S. J.

VICERRECTORA ACADÉMICA: DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO

VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN: ING. JOSÉ JUVENTINO GÁLVEZ RUANO

VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA: P. JULIO ENRIQUE MOREIRA CHAVARRÍA, S. J.

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS

SECRETARIA GENERAL: LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA

AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

DECANO: DR. ROLANDO ESCOBAR MENALDO

VICEDECANA: MGTR. HELENA CAROLINA MACHADO CARBALLO

SECRETARIO: LIC. CHRISTIAN ROBERTO VILLATORO MARTÍNEZ

NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
MGTR. KARIN VANESSA SÁENZ DÍAZ DE EHLERT

TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN
MGTR. ALLAN AMILKAR ESTRADA MORALES



AUTORIDADES DEL CAMPUS DE QUETZALTENANGO

DIRECTOR DE CAMPUS:	P. MYNOR RODOLFO PINTO SOLIS, S.J.
SUBDIRECTORA ACADÉMICA:	MGTR. NIVIA DEL ROSARIO CALDERÓN
SUBDIRECTORA DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA:	MGTR. MAGALY MARIA SAENZ GUTIERREZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO:	MGTR. ALBERTO AXT RODRÍGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN GENERAL:	MGTR. CÉSAR RICARDO BARRERA LÓPEZ

Karin Vanessa Sáenz Díaz de Ehlert
Abogada y Notaria
Magíster en Derecho Constitucional

Quetzaltenango, 29 de noviembre de 2017

Mgtr. Nelly Betzabé De León Reyes
Coordinadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Rafael Landívar
Campus Quetzaltenango

Estimada Mgtr. De León:

Cordialmente me dirijo a usted para informarle como corresponde, sobre el trabajo de tesis denominado "ANÁLISIS DE LOS ABUSOS AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN Y SUS IMPLICACIONES JURÍDICAS" del alumno CAMILO RODAS AZURDIA quien se identifica con carné número 1503010 el cual tuve a bien asesorar.

Al respecto, informo que el estudiante realizó la investigación con apego a las normas establecidas por la Universidad. Además de eso, el estudiante se mostró muy diligente al cumplir con el cronograma establecido, atendiendo cada una de las recomendaciones dadas por mi persona.

El tema abordado por el estudiante es de interés actual y su aporte de vio enriquecido con las entrevistas realizadas a personas vinculadas directamente con el tema y a un miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, quien amplió y justificó el por qué de la regulación constitucional del derecho de reunión.

No me queda más, que indicarle que la tesis de CAMILO RODAS AZURDIA, cumple con los estándares de esta casa de estudios y que ha sido terminado y aprobado satisfactoriamente.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Mgtr. Karin Vanessa Sáenz Díaz de Ehlert

12 Avenida 0-64 zona 1
Quetzaltenango
Telefax: 77615935
Correo electrónico karinsaenz78@gmail.com



Universidad
Rafael Landívar
Tradición Jesuita en Guatemala

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
No. 071728-2018

Orden de Impresión

De acuerdo a la aprobación de la Evaluación del Trabajo de Graduación en la variante Tesis de Grado del estudiante CAMILO RODAS AZURDIA, Carnet 15030-10 en la carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, del Campus de Quetzaltenango, que consta en el Acta No. 0796-2018 de fecha 28 de febrero de 2018, se autoriza la impresión digital del trabajo titulado:

**"ANÁLISIS DE LOS ABUSOS AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE REUNIÓN Y
MANIFESTACIÓN Y SUS IMPLICACIONES JURÍDICAS"**

Previo a conferírsele los títulos de ABOGADO Y NOTARIO y el grado académico de LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Dado en la ciudad de Guatemala de la Asunción, a los 28 días del mes de mayo del año 2018.



**LIC. CHRISTIAN ROBERTO VILLATORO MARTÍNEZ, SECRETARIO
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Universidad Rafael Landívar**

Agradecimiento

A Dios:

Por ser el ser supremo, creador y de quien emana el conocimiento y la sabiduría, le dedico el presente trabajo de investigación, así como todos los logros y reconocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera universitaria, pues sin su infinita gracia, misericordia y mano puesta sobre mi hombro, nada sería posible.

A mis Padres:

Por haber sido el pilar fundamental en la persecución de mis sueños y a quienes dedico con gran cariño este trabajo de investigación pues es por su apoyo, dedicación, enseñanzas y consejo que he logrado alcanzar todas las metas y objetivos que he trazado a lo largo de mi carrera universitaria y en mi vida.

A mis Abuelos:

Por su apoyo incondicional y por ser fuente de inspiración y fortaleza en momentos difíciles para la persecución de mis sueños, metas y propósitos.

A la Universidad

Rafael Landívar:

Por el apoyo, amor y enseñanzas invaluable que me han formado como profesional y como persona humana a través de su personal, altamente calificado para tal propósito.

A mi País:

A Guatemala, porque sin lugar a dudas es el lugar en el cual tengo deseo de desenvolverme, crecer como profesional y como persona para ayudar y contribuir positivamente a la sociedad.

Índice

	Pág.
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULO I.....	3
DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS.....	3
1.1 Derechos fundamentales y libertades en materia Constitucional.....	9
1.2. Antecedentes en materia de Derechos Humanos.....	12
1.3 Derechos fundamentales y libertades en materia de derechos humanos.....	21
1.4. Características de los derechos humanos.....	27
1.4.1 Universalidad.....	27
1.4.2 Interdependencia.....	29
1.4.3 Individualidad.....	31
1.4.4 Imprescriptibilidad.....	32
1.4.5 Inalienabilidad.....	35
1.4.6 Irrenunciabilidad.....	36
1.4.7 Iguales y no discriminatorios.....	38
1.4.8 Derechos y obligaciones.....	39
CAPÍTULO II.....	41
DERECHO DE REUNIÓN.....	41
2.1 Concepto y definición.....	41
2.2 ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES DEL DERECHO DE REUNIÓN EN GUATEMALA.....	45
2.3 LIMITACIONES AL DERECHO DE REUNIÓN.....	49
2.3.1 ESTADO DE PREVENCIÓN.....	60
2.3.2 Estado de alarma.....	62
2.3.3 Estado de calamidad pública.....	63
2.3.4 Estado de sitio.....	63

CAPITULO III.....	65
DERECHO DE MANIFESTACIÓN.....	65
3.1 Concepto y definición.....	65
3.2 ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES DEL DERECHO DE MANIFESTACIÓN EN GUATEMALA.....	70
3.3 Características del derecho de reunión y manifestación.....	72
3.3.1 Conjunto de personas que lo llevan a cabo (elemento subjetivo).....	72
3.3.2 Temporalidad (elemento temporal).....	73
3.3.3 Licitud de su causa.....	73
3.3.4 Lugar de celebración.....	74
3.4 Clasificación del derecho de reunión y manifestación.....	75
3.5 Medios de abuso al derecho de manifestación.....	78
3.5.1 Bloqueos.....	79
3.5.2 Intimidación Pública.....	80
3.5.3 Sedición.....	81
3.5.4 Usurpación.....	82
3.5.5 Linchamiento.....	83
3.6 Limitaciones al derecho de manifestación.....	83
 CAPÍTULO IV.....	 86
ANÁLISIS DE LOS ABUSOS AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN Y SUS IMPLICACIONES JURÍDICAS.....	86
4.1 Abusos al Derecho Constitucional de reunión y manifestación.....	91
4.2 Causas que originan los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación.....	97
4.3 Implicaciones jurídicas que se derivan del abuso al derecho Constitucional de reunión y manifestación.....	101
4.4 Alternativas se viables para erradicar los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación.....	112
4.5 Necesidad de la regulación específica del derecho Constitucional de reunión y manifestación.....	115

CONCLUSIONES.....	123
REFERENCIAS CONSULTADAS.....	125
ANEXOS.....	127

Resumen

La presente investigación tiene por finalidad evidenciar al lector un fenómeno y problemática que persiste en Guatemala, relacionado con el ejercicio del derecho de reunión y manifestación representa una vulneración y transgresión a otros derechos y garantías no sólo en materia Constitucional sino también en materia de Derechos Humanos.

Al tratarse de derechos constitucionales, se abordará la problemática a partir del marco de derecho Constitucional en Guatemala, expresando su definición e historia ampliamente, así como en materia de Derechos Humanos fundamentales y se establecerán los mecanismos y medios de abuso al ejercitar los referidos derechos, la colisión que en algún momento llegan a tener con otros derechos constitucionalmente reconocidos, y las diferentes implicaciones jurídicas que se derivan de los abusos.

La modalidad de la investigación es una monografía jurídico-descriptiva, apoyándose en la entrevista como instrumento de investigación.

INTRODUCCIÓN.

A lo largo de la historia Constitucional de Guatemala y, como es común con la mayoría de los países del mundo, ha sufrido diferentes cambios en su estructura política, económica y social, lo cual se ha visto reflejado en el reconocimiento de diferentes derechos y libertades vertidos en su estructura Constitucional, algunos motivados por situaciones y acontecimientos internos del país, y otros adoptados e inspirados por países vecinos que comparten características u ordenamientos jurídicos similares.

El objetivo general del presente trabajo es el de, analizar los abusos al Derecho Constitucional de reunión y manifestación y sus implicaciones jurídicas, entendiendo como abuso a determinado derecho la definición que brinda el diccionario de la Real Academia Española la cual refiere que es el “Ejercicio de un derecho en sentido contrario a su finalidad propia y con perjuicio ajeno”. A partir del entendimiento del concepto de abuso, se logrará alcanzar el objetivo primordial de la realización de la investigación.

En virtud de lo anterior, es importante plantear interrogantes como ¿cuáles son los abusos al Derecho Constitucional de reunión y manifestación?, ¿cuáles son las causas que originan los abusos al Derecho Constitucional de reunión y manifestación?, ¿cómo afectan los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación a diferentes sectores de Guatemala?, ¿qué alternativas se consideran viables para erradicar los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación? y si es necesaria o no la regulación específica en la materia.

Para poder responder a las interrogantes, en la presente investigación se analizará y definirá ampliamente el Derecho Constitucional de reunión y manifestación, lo cual implica también analizar la historia, evolución y características de los derechos humanos, para poder identificar y establecer la contravención que el uso excesivo del derecho de reunión y manifestación tiene respecto a los derechos inherentes a la

persona humana y otros derechos consagrados dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, todo ello a través del uso de la modalidad de trabajo de tesis jurídico descriptiva.

Dentro de los alcances del presente trabajo de investigación se pretende identificar los límites del derecho Constitucional de reunión y manifestación, así como el establecimiento de los abusos al referido derecho y la contravención que éste tiene hacia los derechos humanos, en tal virtud se analizará cómo en estructuras Constitucionales anteriores al actual ordenamiento jurídico Constitucional, se contemplaban limitantes que estaban íntimamente relacionadas con algunas libertades como las de culto y religión respecto al ejercicio del derecho de reunión y asociación, lo cual difiere de lo expuesto por el artículo Constitucional actual, que refiere que el derecho de reunión, al ser un derecho inherente a la persona humana no puede incluir limitaciones o restricciones que afecten su libre ejercicio, así mismo no pueden ser limitados, coartados o restringidos de ninguna forma.

Posteriormente, en cumplimiento de objetivos específicos como los de exponer las diferentes implicaciones jurídicas que se derivan del abuso al derecho Constitucional de reunión y manifestación y el reconocimiento de la confusión que existe en la población respecto de hacer valer el derecho Constitucional de reunión y manifestación y la realización de bloqueos, a través del empleo del instrumento de investigación el cual fue la entrevista, se tuvo como sujetos de análisis, aquellos que constituían fuentes fidedignas, idóneas y representativas de una opinión generalizada de sectores específicos del país, como lo son el sector económico representado por el comercio, la industria, el sector público y el sector de la población en general, esto a fin de proporcionar la información requerida con el objeto de establecer las causas que originan los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación, y las implicaciones jurídicas que se derivan de dicho abuso.

CAPÍTULO I.

DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS.

El derecho constitucional según Guillermo Cabanellas es la “rama del derecho político que comprende las leyes fundamentales del Estado que establecen la forma de gobierno, los derechos y deberes de los individuos y la organización de los poderes públicos”¹. Guatemala cuenta con una amplia historia en el tema constitucional, desde el periodo constitucional pre-independiente, en el cual se pueden identificar constituciones como la de Bayona y de Cádiz en donde solo se trataba de temas como la religión, la sucesión de la Corona pues en ese momento el país se encontraba bajo un régimen monárquico dependiente de la corona española, la composición del senado, los diferentes ministerios y cortes de justicia que conformarían el Estado, así como las divisiones de las tierras de acuerdo con la ideología española. En ese periodo no se veía claramente los derechos que hoy por hoy se consideran fundamentales para las personas.

Para algunos autores como Eduardo Rozo Acuña “la historia constitucional guatemalteca se considera como declaración de independencia absoluta la del Acta de 1823, que confirmó la independencia de España de 1821 y fue ratificada por todas y cada una de las provincias proclamando la independencia no solo de España sino también de México y de cualquier otra potencia o nación. De gran importancia resulta recordar que con el Acta de independencia de 1823 se implanta en Guatemala un sistema político republicano conforme a los principios del constitucionalismo moderno y del progreso, que no sólo excluye las ideas monárquicas, sino que adopta las instituciones populares, representativas y federales”²

¹ Derecho Constitucional. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva Edición Actualizada Corregida y Aumentada. Editorial Heliasta S.R.L. Undécima Edición, 1993. Página 98.

² Pereira Orozco Alberto y E. Richter Marcelo Pablo. *Derecho Constitucional*. Guatemala, 2012. Séptima Edición. Ediciones de Pereira. Página iv.

Este momento histórico puede complementarse con lo que expone el autor Jorge Mario García Laguardia quien claramente escribe que “el 15 de septiembre de 1821, una junta de notables a la usanza de época, se reunió en la capital y declaró la independencia de España. El panorama que se presentaba era semejante al de otros lugares: una autoridad errática que había perdido sus vínculos con la metrópoli; el alto clero y funcionarios españoles, fieles hasta el final a la Corona; y la presión popular por la independencia expresada a través de improvisados tribunos emergentes de la clase media”³

Dentro de los decretos de independencia de la Asamblea Nacional Constituyente, del primero de julio de 1823 que se tomó en consideración y el cual vale la pena mencionar pues abre la puerta a las exigencias constitucionales modernas es el contenido en uno de los párrafos del primer considerando, el cual reza “que la arbitrariedad con que fue gobernada por la Nación Española, y la conducta que ésta observó constantemente, desde la conquista, excitaron en los pueblos el más ardiente deseo de recobrar sus derechos usurpados”⁴. Es en éste momento de la historia en donde se comienza a observar el resurgimiento de los derechos de todos los guatemaltecos, los cuales, como proceso natural, fueron evolucionando a medida que avanzaba el tiempo.

“Entre los derechos consagrados, que corresponden a todos aquellos que identifican al Estado liberal, sobresalen los de la igualdad y libertad, que esencialmente ponen fin a la esclavitud, lo que en el contexto americano mundial es ciertamente no solo una originalidad sino una prueba del progreso del constitucionalismo”⁵. De la idea anterior, es que a partir de 1821 y específicamente en 1823 se empieza a gestar el verdadero periodo constitucional de Guatemala, reconociendo derechos y libertades a la población e iniciando una nueva organización del Estado, ya que posteriormente,

³ García Laguardia Jorge Mario. Política y Constitución en Guatemala. La Constitución de 1985. Segunda Edición. Guatemala. Institución del Procurador de los Derechos Humanos. 1994. Página 15.

⁴ García Bauer Jose. Digesto Constitucional. Guatemala. Asamblea Nacional Constituyente. 1984. Página 126.

⁵ Pereira Orozco Alberto y E. Richter Marcelo Pablo. *Op. Cit.*, Página v.

en el siguiente cambio constitucional el cual se da en 1879 “con la Ley Constitutiva de la República de Guatemala emanada por la Asamblea Nacional Constituyente del 11 de diciembre de 1879. De esta nueva Constitución sobresale, a diferencia de la precedente, su carácter laico y de separación Iglesia/Estado; igualmente su liberalismo en lo político y económico”⁶.

Este cambio es muy importante, pues hay que resaltar la separación de la Iglesia y el Estado, así como el liberalismo político y económico, recordando que Guatemala, anteriormente perteneciente a un régimen monárquico impuesto por España, estaba suprimida bajo la administración de la Hacienda española, la cual imponía que el sistema de contribuciones sería el mismo para todas las regiones que conformaban su reino.

Otro de los puntos importantes en el estudio constitucional de ese periodo es “la completa separación y autonomía de las tres ramas del poder; la elección popular directa de los diputados de la Asamblea Nacional y del Presidente de la República, y el más amplio y completo catálogo de derechos, libertades y garantías. Entre estas últimas se destaca la adopción del derecho, acción y juicio de amparo; la limitación de la jornada de trabajo a ocho horas diarias y por cada seis días de trabajo uno de descanso; la protección especial del trabajo femenino y de los menores de catorce años; la responsabilidad de los patronos por los accidentes de trabajo”⁷. A simple vista, la referencia histórica anterior parece no tener mayor relevancia en el punto central de la investigación, sin embargo es en éste momento constitucional en donde para fines del estudio de los abusos al derecho constitucional de reunión y manifestación y sus implicaciones jurídicas, todos estos puntos cobran importancia, ya que las implicaciones jurídicas pueden versar sobre cualquiera de los derechos que emanan de la Constitución Política de la República de Guatemala, tomando una postura de contravención a derechos como el de trabajo, el cual como se puede observar en la referencia histórica que antecede, fue desarrollándose a medida que

⁶ *Loc. Cit.*

⁷ *Ibid.*, Página vi.

se avanzó en los procesos de creación de las diferentes constituciones que ha tenido el país. Dicho esto, se puede continuar con el desarrollo de la mención de las constituciones que sucedieron a la de 1879, la cual estuvo vigente hasta 1944.

La Constitución de 1879 “fue sustituida por la Carta promulgada por la Asamblea Constituyente el 11 de marzo de 1945, resultado de una “revolución” o alzamiento militar contra el presidente-dictador de turno, general Jorge Ubico, en el poder desde 1931. Lo esencial de la Carta se puede resumir en la limitación de los poderes del Presidente, por ejemplo, prohibiendo su reelección antes de haber transcurrido doce años; la alternancia en el ejercicio del poder ejecutivo reconociendo el derecho de rebelión popular contra su violación; la apoliticidad de las fuerzas armadas; la elección popular de las autoridades municipales y la mayor autonomía administrativa local; más separación y autonomía del poder judicial; constitucionalización de los partidos políticos y de los derechos de representación de las minorías; extensión de los derechos electorales pasivos y activos a todos los guatemaltecos varones mayores de 18 años”⁸.

Del proceso constitucional de 1945 se puede destacar el derecho de rebelión popular contra la violación a la prohibición del derecho de reelección como reconocimientos previos del derecho de reunión y manifestación, ya que éste supone la libertad con la que contaba el pueblo de Guatemala para oponerse de forma conjunta y rebelarse ante la violación de un precepto constitucional. “Esta constitución estuvo vigente hasta la promulgación de la Carta de 1956 resultado de la “contrarrevolución” del coronel Castillo Armas y del derrocamiento de Jacobo Arbenz”⁹. Se pueden describir varios aspectos de la constitución de 1956, sin embargo, para los efectos de la investigación se describirán los puntos más importantes que se derivan de la misma como lo es que en la constitución de 1956 “se garantiza el ejercicio de todas las religiones o creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, sin otro límite que la paz y el orden públicos. De gran interés por su contenido

⁸ *Loc. Cit.*

⁹ *Loc. Cit.*

moderno y avanzado, resultan también los capítulos dedicados a la familia, la cultura, el trabajo, el empleo público y la propiedad”¹⁰.

En esta constitución se puede observar nuevamente, con el derecho de practicar cualquier religión o creencia, individual o colectivamente la libertad que poseen los guatemaltecos de reunirse para un fin determinado. Este punto constituye un gran avance en las libertades que se le reconocían a los guatemaltecos, ya que, a diferencia del periodo constitucional, específicamente en la Constitución de Bayona, el tema de la religión tal y como lo establece dicho texto constitucional en su artículo uno acerca de la religión “la Religión Católica, Apostólica, Romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey y no se permitirá ninguna otra.”¹¹. No obstante, de lo anterior, vale la pena resaltar el hecho de que la única limitación a éste derecho es la paz y el orden públicos. Al orden público se le dio un trato y consideración especial ya que en esta constitución se desarrolló entre las leyes constitucionales complementarias, la relativa al orden público, la cual para sus fines requiere, en determinado momento, la restricción de algunas garantías y derechos para preservar el orden institucional y su estabilidad a través de las autoridades competentes.

La Constitución de 1956 fue quizás, una de las que estuvo en vigencia por el menor tiempo en Guatemala, ya que posteriormente en 1963 “fue reemplazada por una ley Fundamental de Gobierno que entregó el ejercicio del poder público a las fuerzas armadas” ¹². Del poder que ejercieron las fuerzas armadas en su momentos se pueden obtener algunos datos positivos fruto de los esfuerzos que el gobierno militar realizó, tal como la “realización y promulgación de algunas leyes que sirvieron para lograr la transición hacia el Estado de Derecho, como fueron las leyes del Tribunal Supremo Electoral, de Registro de los Ciudadanos, la ley Electoral y de Partidos

¹⁰ *Ibid.*, Página vii.

¹¹ García Bauer Jose. *Op. Cit.*, Página 19.

¹² Pereira Orozco Alberto y E. Richter Marcelo Pablo. *Op. Cit.*, Página viii.

Políticos, la Ley de Garantías Constitucionales, particularmente de Amparo, Exhibición Personal-Hábeas Corpus y Control de Constitucionalidad”¹³

Otro suceso importante y el cual es necesario destacar de la Ley Fundamental de Gobierno de 1963 es el hecho de que fue en ese momento histórico que se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, con la cual, el 31 de mayo de 1985, se logró la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala tal y como se conoce hoy día, la cual tiene reformas que datan del año de 1993, fruto del Acuerdo Legislativo de ese momento.

Para continuar el desarrollo y el entendimiento del punto central de la investigación, es indispensable conocer la división que posee la Constitución Política de la República de Guatemala actual, esto con la finalidad de comprender de qué parte se desprende específicamente el Derecho de Reunión y Manifestación y en qué momento el ejercicio de éste, deriva en implicaciones jurídicas consagradas en la misma Constitución Política y en leyes específicas ya sea de naturaleza de derecho interno, como en materia de derechos humanos y tratados internacionales aceptados y ratificados por Guatemala.

Se podría decir entonces que la Constitución Política de la República de Guatemala está dividida en tres partes fundamentales, la primera de ellas “comprende un preámbulo y ocho títulos. El preámbulo y los dos primeros títulos, dedicados a la persona humana, a los fines y deberes del Estado y a los derechos humanos, representan la parte dogmática de la Constitución. La parte orgánica se encuentra en los títulos 3, 4 y 5 sobre el Estado, el Poder Público y la Estructura y Organización del Estado. Los títulos 6 y 7 están dedicados a las fundamentales y concretas materias de la defensa de los derechos fundamentales, de la supremacía de la Constitución y de su enmienda o reforma. El título 8, por último, a las Disposiciones

¹³ *Loc. Cit.*

transitorias y finales. Como se puede observar, su redacción sigue la ya tradicional técnica constitucional de toda América Latina y del constitucionalismo occidental”¹⁴.

En la parte dogmática de la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 46, se habla de la Preeminencia del Derecho Internacional, dicho artículo reza que “Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno. De lo anterior se concluye que al realizar un análisis de los abusos al Derecho Constitucional de reunión y manifestación y sus implicaciones jurídicas, se debe estudiar también la materia de derechos humanos, ya que estos pueden formar parte del grupo de derechos que se pueden violentar y menoscabar al momento de que se presentan éste tipo de abusos.

Para adentrarse en la rama de los derechos humanos, se debe conocer qué son y para qué sirven, por lo tanto se dice que “son prerrogativas y libertades fundamentales de que goza una persona y que se derivan de su dignidad, por lo que no pueden ser vulnerados y por ello los Estados y las leyes que los rigen tienen la obligación de reconocerlos, difundirlos, protegerlos y garantizarlos. Todas las personas, sin importar su edad, religión, sexo o condición social, gozan de estos derechos, los cuales son indispensables para el desarrollo integral del individuo”¹⁵. Es importante resaltar que es el Estado quien está obligado a promover y garantizar los derechos humanos, y por tanto es el único capaz de violentarlos.

1.1 Derechos fundamentales y libertades en materia Constitucional.

Tal y como se expuso anteriormente, los derechos fundamentales en materia de Derechos Humanos y las libertades en el tema constitucional se encuentran regulados en la parte dogmática de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo cual significa que los primeros ciento seis artículos de la Constitución Guatemalteca de todas las leyes regulan lo relativo a los derechos fundamentales y

¹⁴ *Loc. Cit.*

¹⁵ Procurador de los Derechos Humanos. ¿Qué son los Derechos Humanos?. <http://www.pdh.org.gt/articulo/derechos-humanos/que-son.html>. 23 de agosto de 2017.

libertades que poseen todos los guatemaltecos y cómo el Estado es el encargado de garantizar dichos derechos y libertades.

Para expresar de una mejor manera los derechos considerados fundamentales y las libertades en materia constitucional es necesario observar lo que Jorge Mario Gacía Laguardia describe que se plasmó desde el preámbulo de la Constitución Política de la República de Guatemala en donde “se expresan los valores superiores que informan el ordenamiento jurídico constitucional: la dignidad de la persona humana, la libertad, la igualdad, la seguridad, la justicia, el bien común y la paz. Que se desarrollan en el título I, denominado “La persona humana, fines y deberes del Estado”, que en sus dos breves artículos indica que Guatemala “se organiza para proteger a la persona y a la familia”; y que su “fin supremo es la realización del bien común” (artículo 1º), y que “es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona” (artículo 2º). Que se subrayan en el título II, denominado “Derechos humanos”, donde se afirma que en Guatemala “todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos”, y que “ninguna persona puede ser sometida a la servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad” (artículo 4º). Y que se coronan en la sección décima del capítulo II sobre “Derechos sociales del mismo título II, donde se establece que “el régimen económico y social de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social””¹⁶

Sin lugar a dudas la Asamblea Nacional Constituyente encargada de la elaboración de la Constitución Política de la República actual, se esmeró en reconocerle a todos los guatemaltecos las libertades y prerrogativas de los que ellos gozaban, y es interesante observar un denominador común que se plasma en varias partes del texto constitucional, la libertad, que definida de forma simple es la “facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos”¹⁷

¹⁶ García Laguardia Jorge Mario. *Op. Cit.*, Página 50.

¹⁷ Real Academia Española. Real Academia Española. Libertad. España, 2017. <http://dle.rae.es/?id=NEeAr5C>. 23 de agosto de 2017

Por otro lado, si se define desde un punto de vista propiamente jurídico “Justiniano la definía como “la facultad natural de hacer cada uno lo que quiere, salvo impedírselo la fuerza o el Derecho”¹⁸. La libertad es uno de los derechos más importantes que poseen los ciudadanos dentro de cualquier Estado a nivel mundial, y su importancia radica en que “la libertad es un ideal humanista que aparece expresamente reconocido, ya que todo el régimen se asienta sobre el reconocimiento de la primacía de la persona humana. Se considera a la libertad como la condición indispensable para el desarrollo integral de la persona humana, por lo que deben garantizársele todas las posibilidades de realización. Se liga íntimamente con la dignidad, significando un respeto a la naturaleza moral de la persona, que necesita un margen de intimidad y espacio para su proyección social con respeto a los semejantes. Por eso la libertad no implica sólo un margen de independencia frente al poder público, sino también participación en las decisiones de la comunidad y margen de opción en la vida política. Una libertad individual, una libertad social y una libertad política.”¹⁹

De lo anterior se puede colegir que los guatemaltecos se encuentran en la disposición de hacer lo que les parezca correcto o no a criterio de cada uno siempre y cuando estas acciones no contraríen la misma ley, de eso se trata el ejercicio pleno de la libertad, y ésta, va íntimamente ligada al derecho de todos los guatemaltecos de reunirse y manifestar de acuerdo a lo que ellos estimen correcto o incorrecto, justo e injusto siempre que se mantengan los principios de bien común y no menoscabando la libertad que posee el resto de la población.

Hablando específicamente de la libertad y su relación con el derecho de reunión y manifestación y las vulneraciones que pueden llegar a darse por un mal ejercicio de éste, podría decirse que las clases de libertades relacionadas son la libertad individual y la libertad social, esto debido a que es en el seno de un mal liderazgo y de una sociedad que desconoce su rumbo, sus deberes, derechos y obligaciones, que se gestan las manifestaciones y movimientos con fines erróneos, ya que lejos de

¹⁸ Libertad. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva Edición Actualizada Corregida y Aumentada. Editorial Heliasta S.R.L. Undécima Edición, 1993. Página 189.

¹⁹ García Laguardia Jorge Mario. *Op. Cit.*, Página 51.

afectar a los sectores que realmente deberían sentirse presionados para ceder a las demandas de quienes manifiestan, es la población en general e incluso los sectores más pobres de la sociedad guatemalteca los que terminan por ser afectados, lo cual genera, además de una contravención a los derechos fundamentales y libertades en materia constitucional otras implicaciones jurídicas las cuales son el punto central de la investigación.

1.2. Antecedentes en materia de Derechos Humanos.

Es necesario conocer el contexto en el cual se fueron creando los derechos humanos, qué fue lo que los motivó, lo que protegen y de forma más concreta el ámbito de aplicación en el cual se desarrollan, es por ello que se debe estudiar de forma breve, la historia de los mismos.

Se dice que uno de los antecedentes más significativos en materia política en cuanto a derechos humanos se refiere, es la Magna Carta Libertatum, o Carta Magna. La cual fue redactada por barones rebeldes que emigraron a Francia, desde Inglaterra, a principios del siglo XIII, pues estos se rebelaron contra los excesos de la monarquía. Si se tiene presente que en la actualidad, solamente el Estado a través de sus instituciones es el único que puede violentar los derechos humanos, éste antecedente es congruente, tomando en consideración que en ese tiempo el equivalente al Estado era la monarquía, sin embargo, estos hacían su voluntad sin contar con limitación alguna.

De acuerdo con la tesista Andrea de los Angeles Guacamaya Betancourt “La Carta Magna fue sancionada en junio de 1215, por Juan sin Tierra, en la cual se da la primera limitación al poder real que se impuso por la nobleza, haciendo valer derechos para su clase por el acoso a graves problemas sociales que surgían, denominándose a la Carta el fundamento de las libertades inglesas, en el cual no se impedía que el rey fuera a gobernar mal; pero determinaba las costumbres que el rey y sus consejeros se encontraban en el deber de observar, sometiendo a la ley las decisiones y no a simples caprichos. Este largo texto de 63 artículos, redactados en

latín, se consideró como el primer documento constitucional de Inglaterra y fue el fundamento de sus libertades, por estipular medidas concretas de protección de libertades individuales. En esta Carta se enumeran privilegios otorgados, así como garantías precisas concerniendo la libertad individual a las personas según el texto que dice: Ningún hombre será detenido o encarcelado como no sea en virtud de un juicio legal de sus pares o de la ley del país.”²⁰

Posteriormente se fue perfeccionando el sistema adoptado a través del impulso que dio la creación de esa carta, ya que “En 1627 Carlos I de Inglaterra, en la lucha contra Francia y España, se vio obligado a pedir fondos al Parlamento, pero antes de someter esta demanda a votación, los miembros del Parlamento en pleno le impusieron *The Petition of Rights*. “Este texto contenía 11 artículos que garantizaban principios de libertad política, respecto de derechos del Parlamento, como de libertad individual sobre seguridad del pueblo. Se puede mencionar entre estos: la imposibilidad de recaudar impuestos sin el acuerdo del Parlamento, de efectuar detenciones arbitrarias y de establecer tribunales de excepción, el derecho del acusado a un proceso legal y el respeto de las libertades y derechos reconocidos por las leyes y los estatutos del reino. Carlos I de Inglaterra aceptó *The Petition of Rights*, que se aplicó dos años, luego reinó como soberano absoluto hasta su muerte, en 1649.”²¹

Lo anterior puede ser fácilmente relacionado con lo que hoy por hoy, dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala -CPRG- se conoce como Exhibición Personal, la cual está contemplada en la parte práctica de la Constitución específicamente en su artículo 276, y la cual refiere a la ley específica en la materia, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que tiene como objeto “Desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la

²⁰ Guacamaya Betancourt Andrea de los Angeles. El Cumplimiento de las Sentencias Emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Responsabilidad Adquirida del Estado de Guatemala. Tesis de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de San Carlos de Guatemala. Páginas 1 y 2.

²¹ *Loc. Cit.*

República de Guatemala, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala”. Pero más que nada, esto, al tratarse del cese de las detenciones ilegales practicadas por la monarquía inglesa, puede traducirse a los derechos Constitucionales que posee el detenido en determinado momento, pues hay que recordar el derecho de defensa, consagrado en el artículo 12 de la CPRG y el cual reza que “la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente”.

Por tanto, se puede considerar la Carta Libertatum o Carta Magna, como la premisa de lo que en la actualidad es una garantía no sólo en materia Constitucional, sino en materia de derechos humanos fundamentales e inherentes.

Al continuar con la reseña histórica de los derechos humanos, vale la pena destacar que “En 1679, aparece el *Habeas Corpus Act*, instituido por Inglaterra, redactado por los miembros del Parlamento, en el reinado de Carlos II, para protegerse de prácticas en ese entonces corrientes. Se concebía como una forma de evitar agravios e injusticias, protegiendo la libertad individual contra arrestos y detenciones arbitrarias; el derecho a la integridad persona; a no ser objeto de daños a su persona, siendo estas lesiones, tortura o en el caso más grave, la muerte. El objeto principal es reponer las cosas para que regresen al estado inicial, es decir, anterior a la privación, amenaza o perturbación de estos derechos, considerándose con carácter sumario y eventual, tratando de evitar que la violación que torne irreparable, exponiendo normas precisas sobre los derechos de los acusados y de los prisioneros”²²

Más adelante se puede observar que aparece el *Hábeas Corpus* como tal, el cual “Permitía al juez ordenar que le fuera presentado el acusado, en persona, en el plazo de tres días, a fin de determinar si la detención se consideraba legal o no. El

²² *Ibid.*, Pág. 3.

procedimiento buscaba proteger al detenido, evitar traslados arbitrarios, garantizar el resarcimiento de daños y perjuicios en caso de transgresiones y responsabilizar a los ejecutantes, estableciendo multas y sanciones a los funcionarios negligentes.²³ Más adelante en la historia, aparece otra figura jurídica fundamental en el reconocimiento de los derechos humanos, pues éste reconocía que anteriormente se habían cometido violaciones a la libertad individual de las personas.

En este momento de la historia se empieza a establecer una ley que estaría por encima del Rey y que no simplemente sería para regular las actuaciones de la monarquía. *El Bill of Rights*, el cual enumera derechos reconocidos para el pueblo desde 1215 en la Carta Magna y cuyos “artículos contienen postulados como: el derecho de petición al rey, la libertad de expresión, la libertad para elegir a los miembros del parlamento, la ilegalidad de las leyes emitidas sin el consentimiento del parlamento, garantías judiciales y la protección de libertades individuales, tiempo después se otorgó la libertad de culto de los protestantes.”²⁴ Para los fines de la investigación, este momento histórico en el reconocimiento de derechos humanos es fundamental, ya que incluye derechos íntimamente ligados al derecho de reunión y manifestación como lo son la libertad de expresión y la libertad de culto de los protestantes.

Más adelante “En Inglaterra, su liberalismo no tuvo efectos sobre su política colonial. Derivado de ello en 1775, se rebelaron trece colonias inglesas de América del Norte. Francia apoyó a las colonias a partir de 1778, en la Guerra de Independencia, que duró hasta 1783. Pero en 1776, las antiguas colonias, convertidas en Estados Unidos de América, lograron promulgar declaraciones para poder reclamar sus derechos, que se convirtieron en principios fundamentales de la federación de Estados que se reunieron con la finalidad de proclamar su independencia frente a la colonia de Inglaterra.”²⁵

²³ *Loc. Cit.*

²⁴ *Ibid.* Pág. 4.

²⁵ *Ibid.*, Págs. 4 y 5.

“La primera declaración que se redactó, para acompañar la Constitución del Estado de Virginia fue la Declaración de Derechos de Virginia, que fue aprobada el 11 de junio de 1776, siendo utilizada por Jefferson para redactar la primera parte de la Declaración de Independencia, sirviendo de base de las primeras diez enmiendas de la Constitución. En los artículos de la Declaración, se enumeran derechos próximos a la noción moderna de derechos humanos, en los cuales se enumeran los siguientes: separación de poderes legislativo y ejecutivo los cuales deben ser distintos al poder judicial, la igualdad de todos los hombres la primacía del pueblo y de sus representantes, la libertad de prensa, el derecho a un gobierno uniforme, la subordinación del poder militar al poder civil, el derecho de que se haga justicia y la libertad de culto”²⁶.

“El 4 de julio de 1776, se aprobó la Declaración de Independencia redactada por Thomas Jefferson, considerando como verdades evidentes, que los hombres nacen iguales, que su creador les ha dado algunos derechos inalienables, entre los cuales están la libertad, la vida y la búsqueda de la felicidad; y, que los gobiernos se instituyen para garantizar esos derechos. La Declaración logra instituir un régimen democrático, fijando derechos y deberes de gobernantes y gobernados en una ley fundamental, siendo un texto innovador y trascendental de la historia en el que se reconocen los derechos humanos más fundamentales”²⁷. Esto puede considerarse un pequeño pero a la vez gran paso en el reconocimiento de derechos y garantías en materia de derechos humanos, pues esta declaración tuvo una gran influencia en que varias colonias antiguas, luego de revisar sus constituciones, incluyeron en ellas declaraciones de derechos, tomando en consideración el derecho a la libertad individual, establecido en Inglaterra con la proclamación de la Carta Magna.

Lo anteriormente descrito puede traducirse a lo que en la actualidad se puede encontrar en la CPRG en su artículo cuarto en donde se establece que “En Guatemala todos los humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El

²⁶ *Loc. Cit.*

²⁷ *Ibid.*, Pág. 6.

hombre y la mujer, cualquiera sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí”.

Por otro lado, en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en su capítulo segundo, en donde se encuentran reconocidos los derechos civiles y políticos, se contemplan los mismos conceptos y derechos como por ejemplo el derecho a la vida, la integridad personal, prohibición de la esclavitud y servidumbre, libertad personal, garantías judiciales hasta llegar a los derechos que son de vital importancia para la investigación como lo son el derechos de reunión y por supuesto el de manifestación.

Posteriormente, “La revolución francesa, fue el hecho político culminante para la historia de los derechos humanos, en el que se citan dos legados de importancia: la abolición de todos los privilegios que puso término al régimen feudal en Francia y la proclamación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, siendo un texto fundamental en el que se basaron movimientos de ideas en materia de derechos humanos surgidos posteriormente. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, fue uno de los textos votados por la Asamblea Nacional Constituyente que se formó por la unión de Estados Generales durante la Revolución Francesa”²⁸.

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, puede ser fácilmente considerada como una evolución a las luchas que se tenían por lograr el reconocimiento de derechos humanos ya que la misma “se consagra como la primera en aceptar la universalidad de la soberanía individual definiendo derechos naturales e imprescriptibles y estableciendo principios de libertad e igualdad como fundamentos de la naturaleza humana. Luego de ser producto de intensos debates se logran establecer 17 principios de derechos fundamentales de un sujeto como persona y como ciudadano, su punto de partida fue la consagración de la libertad y la

²⁸ *Loc. Cit.*

igualdad ante la ley promulgada en los términos siguientes: todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común. Sucesivamente regula: “la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro; la ley solo tiene derecho a contribuir a la elaboración de la ley; la libre comunicación de pensamientos y opiniones; nadie puede ser privado de la propiedad por ser un derecho inviolable y sagrado; la igualdad ante la justicia y el debido proceso”²⁹.

Todo lo que se logró dentro de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano puede ser tomado como fundamento para lo que establece en la actualidad la CPRG en derechos como el de libertad de acción, el cual faculta a todos los guatemaltecos a hacer todo lo que la ley no prohíbe. También la detención legal, el derecho de defensa pues ninguna persona puede ser juzgada sin antes haber sido citada, oída y vencida por autoridad y proceso legal ante un juez o tribunal competente y preestablecido. La protección a la propiedad privada y por supuesto la libertad de emisión del pensamiento dentro de lo cual podemos encontrar la manifestación como una de las formas que posee la población de emitir su desacuerdo con decisiones, acciones u omisiones de las autoridades del Estado de Guatemala, todo ello también reconoce dentro de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos casi en la misma vía.

Vale la pena mencionar que dicha declaración, luego de destronar al rey, “se anula la Constitución de 1791, y, en junio de 1793, se votó por una nueva Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que encabezaba la nueva Constitución. La declaración reproducía principios de la Declaración de 1789, en los cuales sobresale: la igualdad, como primer derecho natural e imprescriptible. Enuncia derechos nuevos como: derecho a la asistencia, derecho al trabajo, derecho a la instrucción, la libertad pública e individual, a la garantía social, consistente en asegurar el disfrute y conservación de los derechos; y, establece la primera disposición contra la esclavitud al regular que todo hombre puede comprometer sus servicios, su tiempo, pero él no

²⁹ *Ibid.*, Pág. 7.

puede venderse ni ser vendido”³⁰. Es en éste momento histórico en el cual se puede identificar que claramente el ser humano se convertía en sujeto de derechos y obligaciones, reconociéndosele el derecho de trabajo, a la educación y por supuesto la abolición de cualquier tipo de esclavitud, lo cual daría forma a derechos que se mencionaran con posterioridad.

Como bien se sabe, el ciudadano guatemalteco tiene derecho a elegir a través del voto, a sus autoridades estatales, así mismo la CPRG contempla el derecho de trabajo y específicamente el código de trabajo y algunos convenios internacionales en materia laboral regulan lo relativo a la relación entre patrono y trabajador, pero sobre todo las jornadas a las cuales pueden ser sometidos los trabajadores con motivo de un contrato o relación laboral. En el mismo ámbito, uno de los principios Constitucionales en materia laboral es la libertad que el guatemalteco posee de elegir en qué trabajará. Por otro lado, ya se ha hablado del derecho a la educación y más importante aún, por el tema del cual versa la presente investigación, el derecho de reunión y manifestación contemplado dentro de la Constitución, así como dentro de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Todo ello pudo haber tenido su surgimiento “Tras la revolución ocurrida en 1848, el gobierno que se encontraba provisionalmente, redacta una nueva constitución, que establecía el sufragio universal, reducía horas de trabajo, abolía la pena de muerte por motivos políticos, garantizaba la libertad de enseñanza y la libertad de trabajo, reconocía el derecho de asociación y de petición y en el territorio francés lograba abolir la esclavitud, incluyendo las colonias”³¹.

Se puede considerar que se estaban consiguiendo grandes avances en materia de derechos humanos, sin embargo, no todo era perfecto para la causa, ya que “uno de los instrumentos más valiosos es el tratado de Versalles, celebrado el 29 de junio de 1919, que da inicio al proceso de positivización de los Derechos Humanos, comprometiéndose a no discriminar a los miembros de las minorías y conceder

³⁰ *Ibid.*, Pág. 8.

³¹ *Loc. Cit.*

derechos necesarios para preservar la integridad étnica y religiosa, derecho a mantener escuelas y practicar la religión. Se crea la Sociedad de las Naciones con la finalidad de establecer un orden internacional, buscando cooperación entre países para evitar guerras y promover la seguridad internacional. Al iniciar la segunda guerra mundial, que duró de 1939 a 1945 los propósitos no se llevaron a cabo, produciéndose violaciones al derecho a la vida, por los genocidios realizados”³².

Tras los acontecimientos anteriormente descritos, la lucha por avanzar en el reconocimiento pero también la protección de los derechos humanos no se detuvo, por lo cual “en 1942, para promover la paz, 26 Estados se unieron para luchar contra las potencias mundiales, por medio de la Declaración de las Naciones Unidas, prometieron permanecer unidos y fundar una organización, aprobando el 26 de junio de 1945 en la ciudad de San Francisco la Carta de las Naciones Unidas, sellando la creación de la Organización de las Naciones Unidas y ratificando internacionalmente la defensa de los derechos humanos, la consolidación de la paz y el respeto a la dignidad de la persona”³³.

“El primer proyecto de la Declaración se propuso en septiembre de 1948, y más de 50 Estados Miembros participaron en la redacción final. El 10 de diciembre de 1948, en París, la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, siendo el primer paso para establecer las condiciones viables para el desarrollo de los derechos humanos”³⁴. Estos acontecimientos fueron los que abrieron el camino para la lucha y reconocimiento de los derechos humanos en la actualidad, culminando en otro acontecimiento de suma importancia, “la novena Conferencia Internacional Americana, que se realizó con la presencia de diversos Estados en Bogotá, Colombia, en 1948, se adoptó la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La Declaración, adoptada antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, resaltó el compromiso de la protección internacional de los derechos

³² *Ibid.*, Pág 9.

³³ *Loc. Cit.*

³⁴ *Ibid.*, Pág. 10.

humanos, sentando las bases de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que fue aprobada en 1969 y entró en vigencia en 1978”³⁵

1.3 Derechos fundamentales y libertades en materia de derechos humanos.

Antes de entrar en materia, es fundamental conocer la definición de derecho humano y las diferentes características que le dan tal calidad, para el efecto hay que decir que “Antonio Truyol y Serra, citado por Sagastume Gemmell, señala que: “decir que hay derechos humanos o derechos del hombre en el contexto histórico-espiritual – que es el nuestro-, equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por esta consagrados y garantizados”³⁶.

Si se toma en consideración la definición anterior, se podría decir que un derecho humano, es una prerrogativa que poseen todos los seres creados por Dios en calidad de humanos. Lo anterior, es congruente con la invocación al nombre de Dios que se hace dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala -CPRG- como preámbulo a la promulgación de la Constitución y el reconocimiento de la protección a la persona y más aún el reconocimiento de derechos humanos dentro de la parte dogmática del texto constitucional.

Por otro lado, en otras definiciones de derechos humanos, “Gregorio Peces Barba, citado por Sagastume Gemmell, señala que los derechos humanos son la “facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación política o social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los hombres, de los grupos sociales y del Estado, y con la posibilidad de poner en marcha el aparato coactivo del Estado en

³⁵ *Loc. Cit.*

³⁶ Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. *Monografías de derechos humanos, Tomo I.* Guatemala. Editorial Cara Parens de la Universidad Rafael Landívar. Año 2013. Pág 3.

caso de infracción”³⁷. Esta definición, no contempla la creación de Dios de los seres humanos como sujetos de derecho, sin embargo, contempla al ser humano como un individuo reconocido por la ley como tal, tutelada por el Estado, encargado de velar por el libre ejercicio de los derechos reconocidos en textos que se refieren a la materia.

En otra de las definiciones que vale la pena mencionar al respecto, es la que realiza Antonio E. Pérez Luño, quien “hace referencia a la percepción hecha por Fernández Galiano, quien manifiesta que al hablar de “derechos naturales, derechos humanos y derechos fundamentales, se está refiriendo preferentemente a los derechos humanos...”. Sin embargo, estos conceptos no son sinónimos, en virtud de que al hacer referencia a derechos naturales se está tomando como fundamento la postura iusnaturalista, la que niega que la existencia de estas potestades supremas e individuales de cada ser estén supeditadas al reconocimiento de los estados por medio de la positivización de las mismas; y por el contrario, derechos fundamentales es el término usado por la corriente positivista, la que los define como los derechos reconocidos por los estados al ser plasmados en normas jurídicas, cuerpos legales o constitucionales, es por ello que Fernández Galiano señala que aun si se usa un término que se refiera a la postura filosófica de la que se derivan debe siempre considerarse que son derechos humanos”³⁸. Indistintamente de la postura que se tome al definir los derechos humanos, iusnaturalista o el brindado por la corriente positivista, se puede decir que los derechos humanos son las prerrogativas que poseen todos los sujetos por el simple hecho de ser seres humanos, por lo tanto, estén reconocidas o no en legislación interior de los estados o en norma constitucional, es obligación de los estados salvaguardar estos derechos.

La conclusión anterior, la cual tiene más un carácter de definición puede estar fácilmente relacionada con lo que dice “Eusebio Fernández, citado por Germán Bidart Campos, expresa que “los derechos humanos son algo (ideales, exigencias,

³⁷ *Ibid.*, Pág 4.

³⁸ *Loc. Cit.*

derechos) que consideramos deseable, importante y bueno para el desarrollo de la vida humana”, esta noción es ampliada al manifestar que: “Toda persona posee unos derechos morales por el hecho de serlo y estos deben ser reconocidos y garantizados por la sociedad, el derecho y el poder político, sin ningún tipo de discriminación social, económica, jurídica, política, ideológica, cultural o sexual. Estos derechos fundamentales, es decir se hallan estrechamente conectados con la idea de dignidad humana y son al mismo tiempo las condiciones del desarrollo de esa idea de dignidad”³⁹. La idea anterior, como se dijo anteriormente puede estar relacionada con la conclusión y definición brindada, hace mucho énfasis en que los derechos fundamentales tienen su fundamento en la calidad de seres humanos de los individuos, sin estos verse afectados o disminuidos por los diferentes ámbitos en los cuales estos pueden llegar a desenvolverse, como los son el ámbito político, social, económico, cultural, etc. Y por supuesto, al respaldarse en la calidad humana del individuo, estos no están supeditados al reconocimiento de los estados a través de su legislación sino más bien a su protección por parte de los mismos.

En una definición más amplia del concepto de derechos humanos “Pérez Luño ha señalado sobre los conceptos de derechos humanos, cuya afirmación se considera un importante aporte: “En los usos lingüísticos jurídicos, políticos e incluso comunes de nuestro tiempo, el término “derechos humanos” aparece como un concepto de contornos más amplios e imprecisos que la noción de los “derechos fundamentales”.

Los derechos humanos suelen venir entendidos como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. En tanto que la noción de los derechos fundamentales se tiende a aludir a aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una tutela

³⁹ *Loc. Cit.*

reforzada”⁴⁰. De lo anteriormente expuesto se puede colegir que los derechos humanos tienden al principio evolutivo, visto desde la perspectiva jurídica, lo cual supone una lógica muy acertada en cuanto a que estos evolucionan y se adaptan al qué hacer humano y relacionándose con el contexto histórico que se esté viviendo, por tanto, se podrán modificar, ampliar, pero nunca reducir a medida que los tiempos y los acontecimientos avancen.

A lo que se expuso en el párrafo anterior se le puede complementar con la idea brindada por “Gloria María Pérez Fuentes, al analizar el concepto dado por Pérez Luño indica que el mismo “... permite interrelacionar todas esas generaciones de derechos humanos, cuestionadas por algunos en cuanto a una posible distinción entre la calidad de derechos del hombre, esto implica en definitiva, la íntima conexión, la estrecha complementariedad y la necesaria interdependencia entre los derechos a la vida o a la salud, y los derechos a la paz y a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado; entre los derechos a la libertad o a la autodeterminación, y los derechos al desarrollo a ser diferentes; entre los derechos a la libre emisión del pensamiento o a la instrucción, y los derechos a la comunicación y a recibir los beneficios del patrimonio común de la humanidad”⁴¹. Esta idea es clara en cuanto a que, a medida que el tiempo transcurre, los conceptos de derechos humanos y fundamentales y lo que estos contemplan ha variado y se ha extendido a otras materias, una de ellas bien puede ser el derecho ambiental, ya que cuando se habla de que los seres humanos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, lo cual obliga a los estados a nivel mundial a adoptar medidas para evitar o disminuir el impacto que tienen algunas actividades a nivel del medio ambiente, se refiere a una situación que probablemente en la antigüedad no se contemplaba como un derecho humano pues la situación ecológica no tenía mayor relevancia y el deterioro ambiental no estaba tan avanzado. Por otro lado, hablando propiamente del tema que se desarrolla en la presente investigación, se puede decir que a medida que la democracia se ha ido fortaleciendo en los

⁴⁰ *Ibid.*, Pág. 5.

⁴¹ *Loc.Cit.*

estados alrededor del mundo, la libertad de emisión del pensamiento ha tomado un papel muy importante dentro del desarrollo de los derechos humanos, dentro de los cuales se puede relacionar fácilmente el derecho de reunión y más aún el derecho de manifestación como una de las variantes de dicha libertad.

El concepto de derechos humanos se ha desarrollado de forma amplia en los párrafos anteriores, y puede englobarse, para los objetivos que persigue ésta investigación, dentro de lo que aconteció “En noviembre de 1969 cuando se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978”⁴². El Estado de Guatemala es una de las 25 naciones Americanas que han ratificado o se han adherido a la Convención con lo cual se ha comprometido a respetar los derechos considerados esenciales para el hombre, tomando en cuenta para ello que establece el preámbulo de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José refiriéndose a que “los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos”.

Es menester hacer énfasis en que es el Estado el encargado de preservar, promover y garantizar los derechos humanos en el territorio guatemalteco y por tanto éste es el único capaz de vulnerarlos, ya que de acuerdo con lo que reza el artículo primero de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,

⁴² Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte IDH. Historia de la Corte IDH. <http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/acerca-de/historia-de-la-corteidh>. 24 de agosto de 2017.

sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” Sin embargo, la idea es debatible en cierta forma, ya que es la misma población la que vulnera los derechos humanos y derechos considerados como fundamentales dentro del texto constitucional y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, al momento de hacer valer la libertad y el derecho que poseen de reunirse y manifestar de forma equivoca, errónea e incorrecta, lo cual deriva en implicaciones jurídicas de diferente naturaleza lo cual es tema de vital importancia para la investigación.

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), reconoce derechos y libertades también consagrados en el texto constitucional guatemalteco tales como: la vida, personalidad jurídica, prohibición de la Esclavitud y Servidumbre que traducido y adaptado a la Constitución Política de la República de Guatemala se refiere a la libertad e igualdad que gozan todos los guatemaltecos. Así mismo reconoce garantías judiciales, libertad de religión, pensamiento y de expresión, derecho de reunión y libertad de asociación lo cual es tema de discusión de la presente investigación y está reconocido también constitucionalmente como el Derecho de Reunión y Manifestación.

El derecho de reunión y manifestación fue bien reconocido constitucionalmente, así como en materia sobre Derechos Humanos, ya que éste constituye una herramienta muy útil en circunstancias específicas y con lo cual la sociedad guatemalteca puede lograr cosas positivas en materia no sólo política, sino que también social y cultural. Es por ello que es indispensable que todos los ciudadanos guatemaltecos conozcan a profundidad ésta prerrogativa, con el fin de ejercerlo con responsabilidad, pero sobre todo también reconozcan que los abusos a éste derecho representan contravenciones a otros derechos fundamentales consagrados en la misma Constitución Política de la República de Guatemala así como en materia de Derechos Humanos, por lo cual se podría decir que en situaciones concretas el principio de que solamente el Estado puede violar Derechos Humanos es errado, ya que en ocasiones, es la sociedad la que supone una amenaza a los derechos

fundamentales y Derechos Humanos que posee toda persona en su calidad como ser humano.

1.4. Características de los derechos humanos.

Previo a entrar a analizar el derecho de reunión y manifestación, es fundamental que al haber hablado de que los derechos humanos son las diferentes prerrogativas de las cuales gozan los individuos por su calidad de seres humanos, que son reconocidos desde la creación misma atribuida a un ser supremo, Dios, y cuya calidad no debe estar supeditada al reconocimiento de los estados dentro de la legislación interna, más sí regulada por la misma al igual que en el ámbito internacional sin hacer distinción de religión, sexo, estrato económico, ideologías políticas entre algún otro elemento relacionado, y finalmente debe ser garantizada y salvaguardada por los diferentes estados alrededor del mundo con el fin de tratar de preservar a la humanidad se debe observar las cualidades y características con las cuales debe contar un derecho para ser considerado humano.

1.4.1 Universalidad.

Al hablar de algo que es universal, se refiere a que su aplicación es en el universo, y para los fines jurídicos, la aplicación universal de algún elemento o en este caso de un derecho, hace alusión propiamente al planeta tierra. “Mayer-Bisch citado por Carlos Villán Durán y López Contreras concuerdan en que la universalidad es importante para esta materia, sobre todo porque sirve para lograr una correcta aplicación de los derechos humanos en cualquier latitud del mundo. Morales Alvarado y Lopez Contreras sostienen que este principio hace referencia a la titularidad de estos corresponde a toda persona sin que exista ninguna condición física, social, económica u otra a la que esté sujeta.

La organización de las Naciones Unidas -ONU-, A TRAVÉS DE LA Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH-, ha manifestado que: “El principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Este principio, tal como

se destacara inicialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones internacionales de derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, por ejemplo, se dispuso que todos los estados tenían el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales”⁴³. Lo anterior se refiere a que al tratarse que los derechos humanos no necesariamente deben estar incluidos en normas de carácter constitucional o leyes internas de los diferentes estados a nivel mundial, por su carácter, estos (los estados) tienen la obligación de promoverlos y protegerlos por el simple hecho de la existencia de los seres humanos, vistos como individuos o sujetos que gozan de ciertas prerrogativas fundamentales por su sola creación.

“Del Principio de Universalidad se desprende el Principio de No Discriminación, puesto que el conjunto de los derechos humanos los poseen todas las personas sin distinción alguna por razones de género, edad, condición económica, nacionalidad, estado civil, condición física o social, ni cualquier otra circunstancia que pueda ser limitación, por lo que nadie está excluido de la protección y amparo de los derechos humanos”⁴⁴. Esta idea es bastante lógica si se considera el carácter universal de los derechos humanos, puesto que éste al no estar supeditado a ningún reconocimiento estatal, tampoco debe su aplicación a la observancia de elementos o características de la persona como tal, sino más bien a su cualidad humana como se ha dicho en repetidas ocasiones a lo largo de este capítulo.

Para complementar un poco más esta idea es necesario puntualizar en que “La inherencia es uno de los aspectos que configura a los derechos humanos como derechos sui generis, debido a que la misma es la pertenencia de aquellos a la persona por razón de su naturaleza humana, así la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile indica que son “innatos para el ser humano”, por lo que se interpreta que

⁴³ Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. *Op.cit.*, Pág. 7.

⁴⁴ *Loc. Cit.*

estos son consecuencia natural de cada individuo, son parte de su esencia, algo de lo que no pueden ser despojados ya que están unidos a su ser”⁴⁵.

“Pérez Fuentes menciona que: “En la medida en que los derechos humanos son inherentes a la dignidad de la persona humana, ellos no dependen de la nacionalidad ni del territorio en que la persona se encuentra. Ellos limitan la soberanía o potestad estatal, y no se pueden invocar esta última para justificar su vulneración o para impedir su protección internacional para asegurar la protección y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de toda persona y de todas las personas que forman parte de la humanidad”⁴⁶. Esto está íntimamente ligado al hecho de que las personas no gozan de los derechos humanos por éstos encontrarse regulados y reconocidos en ciertas normas constitucionales o leyes internas de los diferentes estados, sino que más bien, cada persona es portadora de dichos derechos a dónde quiera que vaya por su calidad de ser humano, a esto es a lo que esencialmente hace referencia la característica de universalidad de la cual gozan los derechos humanos.

1.4.2 Interdependencia.

“Característica fundamental para el correcto entendimiento de la materia de los derechos humanos, por lo general existe la creencia que dichos derechos, por estar clasificados en “generaciones”, tienen un orden jerárquico entre ellos, sin embargo, esta clasificación ha sido exclusivamente para analizar y precisar el momento histórico en el que fueron reconocidos por los estados”⁴⁷. Esta característica de los derechos humanos puede ser confusa en cuanto al principio evolutivo de los mismos, ya que como pudo observar a lo largo del desarrollo del capítulo, estos derechos fueron evolucionando en su reconocimiento y ejercicio a medida que también lo hicieron los diferentes momentos históricos de la humanidad, sin embargo, no hay que perder de vista que como bien se cita, esto se refiere propiamente a la

⁴⁵ *Ibid.*, Pág. 8.

⁴⁶ *Loc.cit.*

⁴⁷ *Ibid.*, Pág. 9.

preexistencia de un derecho humano y su adopción o reconocimiento por parte de los diferentes estados.

Al hablar de la inexistencia de una jerarquía entre los derechos humanos “los autores López Contreras y Morales Alvarado, afirman que es bajo esta característica que los derechos humanos se relacionan estrechamente entre sí, pero no pueden afirmarse que exista una jerarquía entre ellos; lo que existe es una conexión entre todos ellos, se complementan y forman un conjunto armónico, cada uno otorga la facultad de exigir una obligación distinta.

La OACNUDH manifiesta que: “todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho afecta negativamente a los demás”⁴⁸. Si se analiza la cita anterior, podemos concluir que, si se toma en cuenta que el derecho de reunión y manifestación puede ser considerado un derecho humano y fundamental, al vulnerar el mismo a través de los diferentes abusos que pueden existir, esto genera una reacción en cadena que afecta a muchos otros derechos humanos fundamentales, lo cual resulta negativo para el ejercicio de los mismos.

Es por ello por lo que “Debe existir plena armonía entre todos y cada uno de los derechos humanos puesto que, en conjunto, es como se logra la correcta y apropiada protección que brindan los mismos, porque es tan vital la protección del derecho a la vida como garantizar la libertad, debido a que sería inservible que un Estado garantice la seguridad de las personas sin que exista plena protección al

⁴⁸ *Ibid.*, Pág. 10.

derecho a la vida”⁴⁹. Si se atiende a la idea anterior, se puede decir que el derecho de reunión y manifestación están íntimamente ligados a la vida, la libertad, la educación y muchos otros derechos que permiten la existencia de los mismos, y que si de alguna manera no existiera armonía entre ellos, no sería posible su ejercicio pleno ni su completa protección.

La idea de interdependencia de los derechos humanos puede complementarse con lo expresado por el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos - Corte IDH-, Antonio Augusto Cancado Tridade, quien en la Primera Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos “estableció con firmeza la interdependencia o indivisibilidad de todos los derechos humanos, a lo cual también agrego el referido autor que: “el hecho de que todos los derechos humanos son interdependientes llegó a ser una realidad claramente establecida. Por ejemplo, ¿Qué significa la libertad de expresión sin el derecho a la educación? ¿O el derecho a la libertad de circulación sin el derecho a la vivienda? ¿O los derechos a votar y participar en los asuntos públicos sin el derecho al trabajo? Los ejemplos de este tipo abundan.”⁵⁰.

1.4.3 Individualidad.

Al referirse al término individualidad, aplicado al ámbito de los derechos humanos, se debe recordar la característica de universalidad, la cual se refiere a que los derechos humanos no son aplicables solamente en ciertas áreas geográficas ni mucho menos para cierto grupo social, sino todo lo contrario, los derechos humanos son aplicables a todas las personas por su calidad de seres humanos, es por ello que la característica de individualidad “Es el resultado de que los derechos humanos sean inherentes a cada persona; así lo expresa Bidart Campos al advertir que se encuentra la individualidad en el hecho de pertenecer a cada uno de los individuos de la raza humana. En ese orden de ideas, se puede aseverar que todo el conjunto de estos derechos pertenece íntegramente a cada individuo, es así como lo expresa Villán Durán al expresar que “el ser humano los necesita todos”. Se puede indicar

⁴⁹ *Loc. Cit.*

⁵⁰ *Loc. Cit.*

que “el hombre es el sujeto de esos derechos en razón o por causa de ser un individuo de la especie humana, y que por ello mismo todo hombre y cada hombre los titulariza”⁵¹

Todo esto quiere decir que los derechos humanos, indistintamente de que estos son un conjunto de prerrogativas aplicables a la raza humana, son al mismo tiempo aplicables a la persona tomada como individuo y no como grupo social. A esto se le puede añadir que “La individualidad es fácilmente entendible, puesto que hace referencia a que cada persona es titular de derechos humanos por ser individuo. Debe comprenderse que los derechos humanos no son para una nación específica, ni para una familia en su conjunto, ni para una sociedad o comunidad determinada, sino para cada una de las personas que conforman esa nación, esa familia o esa sociedad o comunidad; cada una posee de forma inherente sus derechos”⁵². Eso sí, algunos derechos como lo son el de reunión y manifestación, pueden ser tomados como individuales en el sentido de que todas las personas tienen el derecho individual de reunirse con determinado fin, así como para manifestar, sin embargo, el ejercicio pleno de estos derechos es de forma grupal, pues no habría reunión sin en algún momento solo se presentara una persona, dado que la definición de éste es la agrupación de dos o más personas y también se refiere a una congregación, por lo cual existe individualidad en su reconocimiento, sin embargo, para su ejercicio existe la aplicación de ciertos parámetros que lo tomarían como grupo.

1.4.4 Imprescriptibilidad.

Quienes se encuentren familiarizados con el ámbito jurídico, han escuchado en su momento la expresión: prescribe el derecho y caduca la acción. Lo anterior se refiere a que se puede perder un derecho con el curso del tiempo, y de la misma forma se pierde la facultad con que cuentan las personas de acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a solicitar que se reestablezca o se haga valer un derecho que ellos consideran les asiste. No obstante con los derechos humanos esta

⁵¹ *Ibid.*, Pág. 11.

⁵² *Loc. Cit.*

expresión o principio, no aplica ya que “Los derechos humanos no pueden estar sujetos a condición alguna, por lo tanto no son susceptibles de prescripción, ya que de otro modo se pondría en riesgo a la persona; por ello Aguilar Guerra, López Contreras y Morales Alvarado han declarado que los derechos humanos bajo ninguna circunstancia se pierden, se limitan, por el hecho de su no ejercicio o cualquier otra situación similar.”⁵³

En cuanto a limitar los derechos humanos se refiere, pues está claro, de acuerdo con lo que expresa la cita anterior, que los derechos humanos no pueden ser limitados, coartados o disminuidos por ninguna circunstancia, sin embargo, esta idea es debatible ya que en los capítulos siguientes cuando se desarrollen las diferentes características y limitaciones de los derechos de reunión y manifestación, se expondrá en qué momentos sí se podrían ver limitados estos derechos que son a la vez considerados humanos, eso sí, se hace no con motivo de limitarlos propiamente dicho, sino con el afán de preservar otros derechos humanos igual de importantes como lo son la vida y la integridad física de la persona los cuales están interrelacionados.

Pero retomando la idea central de esta característica de los derechos humanos, “Se puede afirmar que no se pierden los derechos humanos por el transcurso del tiempo o por el no ejercicio de ellos, sin embargo, la vida cotidiana lleva consigo el ejercicio de un sin número de derechos, por lo que es probable que la expresión correcta sea que dichos derechos no se pierden por la no exigibilidad de ellos, puesto que estos constantemente se ejercitan aun sin estar consciente de ello. La no reivindicación acarrearía consigo el hecho de que alguno o varios derechos sean violentados, pero el no exigir su respeto, garantía y libre ejercicio no tiene como consecuencia la pérdida de los mismos.”⁵⁴

⁵³ *Loc. Cit.*

⁵⁴ *Ibid.*, Pág. 12.

La pregunta a la característica de la imprescriptibilidad es ¿si los derechos humanos son imprescriptibles, su exigibilidad también lo es? La respuesta se encuentra en que “De la mano con la imprescriptibilidad algunos autores, como Marlene Román, estiman que podría incluso considerarse la posibilidad de la imprescriptibilidad de las violaciones a los derechos humanos, debido a que sería lógico que si los derechos son imprescriptibles también las violaciones lo sean y, por ende, la deducción de las responsabilidades existentes no tengan una prescripción extintiva. Toda vez que “las violaciones a los derechos humanos, por su parte, no tienen la característica de sistematicidad ni generalidad, pero atentan en igual modo contra la dignidad del ser humano y generan el rechazo de la comunidad nacional e internacional””⁵⁵

Básicamente a lo que se refiere el párrafo anterior es que en cualquier momento en el cual se haya cometido una violación a los derechos humanos, indistintamente del tiempo que haya transcurrido, se puede solicitar su restitución ya que estos derechos no pierden vigencia con el paso del tiempo. Sin embargo, a esta idea se oponen algunos doctrinarios como Pedraza o Ziffer quienes “consideran que la imprescriptibilidad está limitada a los crímenes de lesa humanidad, por existir disposiciones internacionales explícitas y específicas en la materia -como lo es la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad-, por lo que no ha de hacerse extensible a otras figuras más que las especificadas en dicha convención. Sin embargo, pareciera ser que la CortelDH es de un criterio más abierto y amplio, el cual responde a la necesidad de la tutela y restitución de los derechos humanos, ya que en el año 2003 dicha corte consideró imprescriptible una violación a los derechos humanos que no constituía crimen de lesa humanidad.”⁵⁶

Lo anterior expresa una postura un poco más congruente con la característica de imprescriptibilidad de los derechos humanos, ya que de nada serviría que los mismos estuvieran vigentes indistintamente del tiempo transcurrido, si los medios de defensa

⁵⁵ *Loc. Cit.*

⁵⁶ *Loc. Cit.*

o acciones correspondientes caducaran en el caso de la existencia de una violación en contra de los derechos humanos lo cual traería como consecuencia la no restitución de los mismos.

1.4.5 Inalienabilidad.

“El vocablo inalienable hace referencia a la imposibilidad tanto jurídica como material del hecho que un individuo pueda transmitir sus derechos a otra persona. Resultaría ilógico y absurdo querer realizar dicho traslado, puesto que, en virtud del principio de individualidad, todas y cada una de las personas son titulares de derechos humanos, es decir, todo ser humano posee derechos propios y realizar una transmisión de estos no serviría de nada ya que nadie puede tener dos derechos a la vida, dos derechos a su integridad personal, dos derechos a la libertad etc. En este sentido Aguilar Guerra, Morales Alvarado y López Contreras expresan que no pueden transferirse, trasladarse, enajenarse y no pueden apartarse o desligarse de la persona por ser inherentes a la dignidad humana.”⁵⁷ Lo anterior es totalmente lógico y aceptable ya que se ha estudiado que los derechos humanos al no ser exclusivos de un sector social, económico, religioso, racial etc. Por lo cual todos los individuos a nivel mundial, en su calidad de seres humanos los poseen y pueden ejercitarlos en el momento que lo deseen, algunos de forma involuntaria, como lo es el derecho a la vida, en tal virtud, resultaría inútil tratar de delegarlos o trasladarlos, pues ninguna persona puede pedirle a otra que practique o ejercite su derecho a la vida o a la libertad, ya que éste le es propio, por citar un ejemplo.

“Esta característica tiene sustento en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su primer considerando establece: “...la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

Se puede comprender que: “desde una concepción de derechos humanos, lejos de significar un sacrificio de derechos, afirmaos como un principio que todos los

⁵⁷ *Ibid.*, Pág. 13.

derechos son inalienables y no pueden ser negociados o prostituido. El Estado no puede pedirnos que sacrifiquemos nuestros derechos básicos en pos en un futuro mejor o cualquier otro propósito. Este considerando rechaza no solo el nazismo, que prometía un paraíso terrenal cuando llegara a dominar el mundo, sino a cualquier ismo (comunismo, doctrina de seguridad nacional, neoliberalismo, etc.) que exige a las personas a sacrificar sus derechos fundamentales por algún fin político, social o económico.”⁵⁸ Esto se puede relacionar con lo que establece el artículo Constitucional que se refiere al derecho de reunión y manifestación, expresando que éste derecho no puede ser restringido, disminuido o coartado, sin embargo, la ley lo regulará con el único objeto de garantizar el orden público.

El solo hecho de que un derecho no pueda ser restringido, disminuido o coartado puede ser fundamentado con lo que expresa el autor Carlos Villan Durán, quien “señala que: “se deduce que la dignidad inherente a toda persona humana desde su nacimiento, así como sus derechos y libertades, son inalienables e imprescriptibles, anteriores a todos los poderes, incluidos los del Estado, quien puede reglamentarlos pero no derogarlos”, por lo que se comprende que resulta aparejada la protección de los derechos humanos a la propia dignidad del ser humano, lo que significa que necesariamente deben ser inalienables puesto que son consecuencia de la dignidad de la persona, y jamás se pierde la dignidad, se conserva en todo momento de la vida”⁵⁹

1.4.6 Irrenunciabilidad.

Ya se ha hablado del porqué un derecho no puede ser transmitido, delegado o trasladado, puesto que éste se adquiere por el mismo hecho de que el individuo es un ser humano, por lo que a continuación se desarrollará otra de las características que se relaciona con la anterior y esa es la irrenunciabilidad. “Existen diversas posturas acerca de la posibilidad de renuncia de los derechos humanos; algunos autores como López Contreras y Morales Alvarado afirman que bajo ninguna

⁵⁸ *Ibid.*, Pág. 14.

⁵⁹ *Loc. Cit.*

circunstancia una persona puede renunciar a ellos. Aguilar Guerra señala que a pesar de estar de acuerdo con dichas aseveraciones, existen situaciones muy específicas en las que algún derecho, como el del honor y la imagen, puedan ser renunciables para determinados actos.”⁶⁰

“Distinto a la renuncia por parte de la persona titular de los mismos, se encuentran algunas situaciones en donde se limita la protección de algunos derechos por parte del Estado; así, “El Derecho de los derechos humanos, tanto en el plano doméstico como en el internacional, autoriza limitaciones a los derechos protegidos en dos tipos de circunstancias distintas. En condiciones normales, cada derecho puede ser objeto de ciertas restricciones fundadas sobre distintos conceptos que pueden resumirse en la noción general de orden público. Por otra parte, en casos de emergencia, los gobiernos están autorizados para suspender las garantías.””⁶¹ Esto sucede claramente con los derechos de reunión y manifestación, pues dentro del artículo Constitucional que habla de ellos se contempla y se expresa que la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Por otro lado, en cuanto a las limitaciones que se pueden establecer al respecto, la Ley de Orden Público y Estados de Excepción será la encargada de exponer por qué motivos se pueden suspender los derechos Constitucionales, algunos también contemplados como derechos humanos lo cual se desarrollará con detalles más adelante en la investigación.

“A pesar de que no son renunciaciones a los derechos por parte de una persona específica, si no limitaciones impuestas por el Estado pero justificadas en una causa de emergencia que afecta a toda la sociedad o a un sector específico, por lo que se busca que el Estado pueda controlar la situación y buscar el bien común, mientras se restablece el orden; ya que se hace necesario, por ejemplo, limitar el derecho a la libertad de locomoción durante un estado de calamidad para no poner en riesgo la vida de los habitantes de la República.”⁶². En ese orden de ideas, se puede

⁶⁰ *Loc. Cit.*

⁶¹ *Loc. Cit.*

⁶² *Ibid.*, Pág. 15.

considerar a las limitaciones o la suspensión de los derechos humanos que imponen los Estados, como una vía indispensable para salvaguardar los derechos que dan origen a otros, pues qué sentido tiene contar con el derecho a la educación, a la libre locomoción o la libertad misma, si no se tiene la raíz de todos ellos como el derecho a la vida.

1.4.7 Iguales y no discriminatorios.

Nuevamente se hace alusión a la característica de universalidad de los derechos humanos, la cual supone que estos derechos son aplicables a los individuos pertenecientes a la raza humana, por lo tanto, no son exclusivos de ciertos sectores de la sociedad. De esta idea se presume que deriva la característica de que los derechos humanos deben ser iguales y no discriminatorios.

“Para la ONU “la no discriminación es un principio transversal en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.””⁶³

Se puede observar que a nivel internacional se ha enfatizado sobre el hecho de proteger los derechos humanos y hacerlos accesibles para todos los sectores de la sociedad indistintamente de su raza, color, sexo, religión y todos los demás elementos que podrían constituir cierto tipo de exclusión o discriminación, pues esto

⁶³ *Ibid.*, Pág. 15.

no debe suceder toda vez que las personas poseen la calidad humana única y suficiente para ejercer todos los derechos humanos a los cuales se hacen acreedores desde la concepción misma y hasta la muerte.

“Se puede apreciar claramente que las características de igualdad y no discriminación, hacen referencia a que los derechos humanos son inherentes a toda persona sin ninguna condición; todas las personas son iguales y no pueden ni deben ser discriminadas. En características como estas se evidencia, incluso más, cómo las mismas se complementan con otras y que no pueden existir una sin la otra, así es como funcionan también los derechos humanos, puesto que, si uno se ve afectado, se afectarían los demás. Como ya se indicó, son un conjunto que se complementan y funcionan en un orden horizontal, todos con la misma importancia y sin un orden jerárquico”⁶⁴. Esta es quizás una de las características destacables para la presente investigación, ya que al abusar del derecho de reunión y manifestación consagrados Constitucionalmente y considerados como derechos humanos se estaría vulnerando una serie de derechos en forma directa o indirecta generando implicaciones jurídicas de diversa naturaleza.

1.4.8 Derechos y obligaciones.

La última de las características es bastante lógica, ya que cada derecho trae aparejada una obligación, puesto que en la vida y en el día a día no se puede reconocer prerrogativas sin que estas estén sujetas a una serie de condiciones que se deben cumplir para que exista un equilibrio entre lo que se puede y lo que se debe hacer. Sin embargo, los derechos humanos, como ya se ha estudiado con anterioridad, no pueden estar sujetos a obligaciones específicas.

Más bien, la idea de las obligaciones en materia de derechos humanos está ligada a los estados, ya que “La ONU declara que: “los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del Derecho Internacional, de respetar, proteger y realizar los derechos

⁶⁴ *Ibid.*, Pág. 16.

humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás”⁶⁵.

De esta característica es que se deriva la idea de que solamente el Estado es quien puede vulnerar o violentar los derechos humanos de las personas, ya que dentro de sus deberes está proteger, promover y adoptar las medidas que sean necesarias para que los mismos no puedan ser coartados de ninguna manera. Pero esto no significa que los derechos humanos puedan ser ejercidos sin regulación alguna, ya que en algún momento el Estado tiene la potestad de crear las medidas que considere necesarias, no para limitar, sino para salvaguardar todos los derechos humanos tal y como sucede con los estados de excepción, que buscan primordialmente salvaguardar el derecho humano que da origen al resto de derechos, la vida.

⁶⁵ *Loc. Cit.*

CAPÍTULO II.

DERECHO DE REUNIÓN

2.1 Concepto y definición.

El derecho de reunión se encuentra regulado junto al derecho de manifestación, en el artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece que: “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente”.

Se debe tomar en cuenta que el derecho de reunión se ubica en la parte dogmática de la Constitución Política de la República de Guatemala, es decir donde se encuentran regulados los derechos fundamentales, derechos humanos y garantías individuales de todos los guatemaltecos. Por lo tanto, es importante conocer qué es un derecho y garantía en materia constitucional. Para ello el Diccionario Jurídico Elemental brinda la siguiente definición: “En Derecho Constitucional, el conjunto de declaraciones solemnes por lo general, aunque atenuadas por su entrega a leyes especiales donde a veces se desnaturalizan, que en el código fundamental tienden a asegurar los beneficios de la libertad, a garantizar la seguridad y a fomentar la tranquilidad ciudadana frente a la acción arbitraria de la autoridad. Integran límites a la acción de ésta y defensa para los súbditos particulares.”⁶⁶

Al partir de esa idea, se debe reconocer que el derecho de reunión es un concepto compuesto por dos términos, derecho y reunión, por lo tanto cabe decir que por un lado, derecho, de acuerdo con los intereses del estudio, se refiere a la “Facultad

⁶⁶ Derechos y Garantías. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva Edición Actualizada Corregida y Aumentada. Editorial Heliasta S.R.L. Undécima Edición, 1993. Pág. 102.

natural de obrar de acuerdo con nuestra voluntad, salvo los límites del derecho ajeno, de la violencia de otro, de la imposibilidad física o de la prohibición legal”⁶⁷ y por el otro lado reunión, que según el diccionario de la Real Academia Española es “Conjunto de personas reunidas”⁶⁸, y por reunidas debe entenderse reunir, lo cual significa “Juntar, congregar, amontonar”⁶⁹.

De lo anterior se puede colegir que Derecho de Reunión es la facultad que poseen los hombres de juntarse o unirse, dicho coloquialmente, con determinado fin, sin afectar el derecho ajeno y al mismo tiempo sin que medie violencia o prohibición legal.

Por otro lado “La reunión, entendida como una agrupación de personas que acuden y se encuentran en un lugar determinado para un propósito específico, alcanzado el cual, aquella se disuelve, no es más que una actividad que responde a la necesidad del hombre – como sujeto predominantemente social- de tener un acercamiento con otros seres humanos, construir relaciones y elaborar acuerdos para la consecución de sus fines, sean éstos individuales o colectivos, de índole familiar, laboral, comercial, académico, cultural, deportivo, social, cívico, político, de ocio o recreación. Caracterizan a la reunión el intercambio de ideas u opiniones de sus participantes, así como la realización de actividades que puedan ser tan diversas como los objetivos que motivan su celebración. Por ello, la posibilidad que los ciudadanos tienen de reunirse para la obtención de sus fines particulares ha sido reconocida y garantizada como un derecho fundamental que, siendo de naturaleza individual, su ejercicio se lleva a cabo de manera colectiva.”⁷⁰

⁶⁷ Derechos. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva Edición Actualizada Corregida y Aumentada. Editorial Heliasta S.R.L. Undécima Edición, 1993. Pág. 97.

⁶⁸ Real Academia Española. Real Academia Española. Reunión. <http://dle.rae.es/?id=WMCqAoh>. 5 de septiembre de 2017.

⁶⁹ Real Academia Española. Real Academia Española. Reunir. <http://dle.rae.es/?id=WMDTmt2>. 5 de septiembre de 2017.

⁷⁰ Instituto de Justicia Constitucional. Comentarios a la Constitución Política de la República de Guatemala, Tomo I. Guatemala, 2013. Instituto de Justicia Constitucional – Corte de Constitucionalidad. Páginas 434 y 435.

Es interesante el hecho de que el derecho de reunión no es un derecho aislado, ya que el mismo, al ejercerlo y tomando en consideración la definición anterior, está relacionado con otras ramas del derecho, tal es el caso del derecho de trabajo, derecho mercantil y derecho civil por mencionar algunos, esto sin dejar de lado los derechos y garantías constitucionales que pueden estar involucrados así como derechos humanos que se ejercen al momento de realizar alguna actividad que implique reunir cierto grupo de personas para determinado fin. Un ejemplo claro en materia laboral del derecho que poseen las personas de reunirse para determinado fin, son las coaliciones o sindicatos de trabajadores, las cuales suponen que un grupo de trabajadores o incluso de patronos, según sea el caso, se reúnan para negociar cuestiones de carácter económico social de los trabajadores o puntos relativos a las condiciones de trabajo, lo cual constituye que la reunión se realiza con la intención de perseguir un fin en común.

Otra de las definiciones que vale la pena mencionar es la que se refiere a que “se entiende por reunión en términos generales “un grupo momentáneo de personas en un determinado lugar, formado para compartir una actividad específica que le interesa individualmente a cada uno de los participantes. Existe, sin embargo, otro concepto más estrecho de reunión y es el que lo configura como un encuentro temporal y voluntario de varias personas en un lugar determinado, conforme a un acuerdo previo y con un fin preestablecido. Es decir, en esta segunda concepción tiene radicar importancia el acuerdo previo que determina la finalidad de la reunión”⁷¹. Esto quiere decir que el derecho de reunión se ejerce partiendo de la autonomía de la voluntad de cada una de las personas, pues deciden participar de la reunión, al compartir intereses en común con el resto de personas que deciden reunirse y por lo tanto lo hacen a sabiendas del motivo y la finalidad que persigue dicho acto.

⁷¹ Mendoza G. Lissette Beatriz y Orantes Mendoza Ricardo. Constitución Explicada. Guatemala, 2010. Tercera Edición. Editorial Jurídica Salvadoreña. Páginas 66 y 67.

El derecho de reunión posee varios ámbitos en los cuales puede ser aplicado es por ello que en otra definición del derecho de reunión éste “Es considerado un derecho civil y político, siendo definido como la facultad de toda persona de congregarse junto a otras, en un lugar determinado, temporal y pacíficamente, y sin necesidad de autorización previa, con el propósito compartido de exponer y/o intercambiar libremente ideas u opiniones, defender sus intereses o acordar acciones comunes. Constituye por ello una clara manifestación de la vocación asociativa del ser humano y, a la vez, un reflejo directo de los procesos de interacción humana. La intención y el propósito que convoca a quienes se reúnen constituyen, además, los elementos primordiales que distinguen a la reunión de una coincidencia accidental de personas”⁷²

“Como derecho subjetivo representa la facultad que tiene su titular para coincidir, con una o más personas, en un determinado lugar y tratar temas de interés común; es decir, el reconocimiento de la posibilidad que se tiene para congregarse, sin más condiciones o limitaciones que las que la ley establezca. Desde su aceptación objetiva, en cambio, se presenta como elemento fundamental del orden jurídico, ya que sirve de cause para el ejercicio de otras libertades tales como la acción y la de expresión, así como de los derechos de asociación, locomoción y manifestación, derechos políticos o sindicales. La oportunidad de ejercer estos otros derechos no sólo permite a los ciudadanos reunidos la realización de sus intereses particulares, sino que también viabiliza la comunicación legítima entre estos y otros grupos sociales y las propias autoridades; sobre todo, en los Estados organizados democráticamente, en los cuales, su importancia es vital, pues constituye una forma de concretizar la participación ciudadana”⁷³

Se puede concluir, al observar las definiciones dadas, que el derecho de reunión fue y es reconocido, pues es un acto inherente de la persona humana en su característica de un ser que no puede vivir aislado de las demás personas y por ello

⁷² Convención Americana sobre Derechos Humanos Comentada. Página 358.

⁷³ Instituto de Justicia Constitucional. *Op. Cit.*, Página 435.

siente la necesidad de compartir ideales, movimientos y objetivos concretos dentro de una sociedad determinada, sin embargo, esto no significa que al hacerlo, el acto en sí mismo no represente una amenaza o contravención a derechos y garantías en el ámbito interno como en materia de derechos humanos fundamentales pese a contar con características como la de pacífica y sin armas. “Al respecto, el autor guatemalteco Enrique Peña Hernández considera que la libertad de reunión, al igual que libertad de opinión, tienen como fundamento el principio de “libre comunicación humana”, pero estima que la primera supone un grado superior de integración social porque protege el derecho de congregación de los hombres para la intercomunicación de sus pensamientos y el intercambio de sus opiniones”⁷⁴.

2.2 ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES DEL DERECHO DE REUNIÓN EN GUATEMALA.

Los antecedentes constitucionales en materia del derecho de reunión en Guatemala se remontan al 11 de diciembre del año 1879, fecha en la cual la Asamblea Nacional Constituyente de ese tiempo decretó la Ley Constitutiva de la República de Guatemala. “A cada Constitución le han precedido diversos cambios políticos, económicos y sociales. Así, la Constitución de 1879 tuvo como marco la denominada Revolución o Reforma Liberal de 1871. Este movimiento era encabezado por Miguel García Granados y por Justo Rufino Barrio. El primero fungió como presidente provisorio luego del derrocamiento del gobierno de Vicente Cerna. El segundo gobernó de 1873 a 1885, año en que muere en batalla. El 15 de marzo de 1879 quedó instalada la Asamblea Constituyente, “dominada por los liberales, pero con representación de la minoría conservadora, lográndose que el 11 de diciembre se promulgara la Constitución con 104 artículos y cinco disposiciones transitorias”⁷⁵

Dentro de las regulaciones que destacaron de dicha Constitución se pueden mencionar, en similitud con la Constitución actual, el sistema de gobierno y división de poderes, ya que en el artículo tercero de la Ley Constitutiva de la República de

⁷⁴ *Loc. Cit.*

⁷⁵ Pereira Orozco Alberto y E. Richter Marcelo Pablo. *Op. Cit.*, Páginas 76 y 77.

Guatemala de 1879 se establecía que “El poder supremo de la Nación es republicano, democrático, y representativo, y se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y habrá en sus funciones entera independencia”⁷⁶. Por lo mencionado se puede observar que empezaba a existir el sistema de frenos y contrapesos del Estado, esto debido a la independencia de los diferentes poderes con los cuales se cuenta.

Algo similar se encuentra hoy día en la Constitución Política de la República que emana de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985, la cual entró en vigencia a partir del 14 de enero de 1986, y en la cual, en su parte orgánica, en donde vale la pena recordar, se encuentran regulados el poder público y la estructura y organización del Estado, específicamente en su artículo 140 reza que: “Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno es republicano, democrático y representativo”.

Posteriormente en el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala, se regula lo relativo a la soberanía, lo cual equivale a la división de poderes que se puede encontrar en la Ley Constitutiva de la República de Guatemala de diciembre de 1879. La Constitución actual establece que: “La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida”. El texto Constitucional actual menciona el término subordinación en vez de independencia entre los diferentes poderes que conforman el Estado y adiciona el hecho de que la soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos que conforman el Estado.

Al retomar el tema central, la Ley Constitutiva de la República de Guatemala del año 1879 además de regular lo relativo al Estado, su forma de gobierno, y establecer las atribuciones de cada uno de los poderes que lo conforman, reconoció algunas

⁷⁶ *Loc. Cit.*

garantías, entre las cuales cabe destacar: la libertad, igualdad y seguridad de la persona, el derecho a la educación, libertad de locomoción, libertad de industria, derecho de propiedad y propiedad privada, derecho de petición, libertad de religión y llegó a regular el derecho que es de interés en éste capítulo en concreto, el derecho de asociación y reunión.

En el artículo 25 de la Ley Constitutiva de la República de Guatemala del 11 de diciembre de 1879 se estableció lo relativo al derecho de asociación y reunión, diciendo que: “Se garantiza el derecho de asociación y de reunirse pacíficamente y sin armas; pero se prohíbe el establecimiento de congregaciones conventuales y de toda especie de instituciones o asociaciones monásticas”⁷⁷. La primera diferencia significativa que puede observarse en la Constitución Política de la República de Guatemala actual, respecto de la Ley Constitutiva de ese tiempo, es que hoy por hoy el artículo 33 Constitucional, el cual se refiere al derecho de reunión, se encuentra junto con el derecho de manifestación y por lo tanto regula en forma independiente, en el artículo 34, el derecho de asociación.

Por otro lado, en la Constitución actual, el derecho de reunión no puede ser restringido, disminuido o coartado, mientras que en la Ley Constitutiva de la República de Guatemala del año 1879 sí lo hacían al colocar la prohibición respecto al establecimiento de congregaciones conventuales y de toda especie de instituciones o asociaciones monásticas, lo cual en determinado momento puede contrariar un poco la definición de reunirse, en donde se contempla la palabra congregar, término que en esencia significa reunir personas, sin embargo, se cree que en ese momento se relacionó más con una prohibición de carácter religioso pese a que en esa misma Ley Constitutiva se contempló, en su artículo 24, la libertad de religión.

“Posteriormente, en la Constitución Política de la República de Centroamérica decretada el 9 de septiembre de 1921, fueron garantizados los mismos derechos de

⁷⁷ *Ibid.*, Página 79.

la siguiente manera: “Artículo 38. Se garantiza la libertad de reunión pacífica, sin armas y la de asociación para cualquier objeto lícito, ya sea este religioso, moral, científico o de cualquier naturaleza. Se prohíbe el establecimiento de congregaciones conventuales en toda especie de instituciones o asociaciones monásticas. También se prohíben los convenios en que el hombre pacte o acepte su proscripción o destierro, o el irrevocable sacrificio de su libertad o dignidad”⁷⁸. Con diferencia respecto a la Ley Constitutiva de la República de Guatemala del año 1879, dentro de la Constitución Política de Centroamérica se desarrolla con mayor profundidad el derecho de reunión, adicionando más prohibiciones como el hecho de convenios en que el hombre pacte o acepte su proscripción o destierro, o el irrevocable sacrificio de su libertad o dignidad. Lo anterior no puede considerarse como una restricción o disminución del derecho ya que la finalidad de dicha prohibición era preservar la libertad de la persona individual.

El siguiente momento histórico Constitucional en el cual se contempló e incluyó el derecho de reunión fue en la Constitución Política de la República de Guatemala decretada en fecha 11 de julio de 1935. Dentro de esta Constitución se mantuvo en vigencia el artículo mencionado anteriormente, sin embargo, “A este precepto se agregó la prohibición de: “toda asociación que conocidamente atente contra la moral pública o procure el cambio de las instituciones por medios violentos o ilegales”⁷⁹. En dicha Constitución se puede observar que a través de la mencionada prohibición se intentaba preservar el orden dentro de las instituciones estatales, indicios de lo que más adelante podría denominarse orden público y con lo cual, el Estado, a través de algunas acciones específicas podría restringir el derecho de reunión con motivo de mantener el orden institucional.

“Con la Constitución de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Constituyente el 11 de marzo de 1945 se introdujeron dos importantes cambios en el reconocimiento del derecho de reunión: la primera consistió en encomendar a leyes

⁷⁸ Instituto de Justicia Constitucional. *Op. Cit.*, Pág. 433.

⁷⁹ *Loc. Cit.*

específicas la regulación de situaciones particulares para su ejercicio y en suprimir la prohibición de establecer congregaciones conventuales e instituciones monásticas; la otra, en que se reconoció, por primera vez, el derecho de manifestación”⁸⁰. Posteriormente el derecho de reunión y manifestación fue contemplado en forma similar en la Constitución de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Constituyente el 2 de febrero de 1956.

“De forma más garantista se redactó el reconocimiento de los referidos derechos en la Constitución de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Constituyente el 15 de septiembre de 1965, anterior a la Constitución vigente, ya que preceptuó: “Artículo 63. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no podrán ser restringidos, disminuidos o coartados y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley”⁸¹. Cabe destacar que dentro del texto constitucional actual, al artículo que se refiere al derecho de reunión y manifestación se le adiciona, a diferencia del antecedente mencionado, el párrafo que se refiere a que para ejercer los derechos de reunión y manifestación bastará con notificación previa de los organizadores ante la autoridad competente.

2.3 LIMITACIONES AL DERECHO DE REUNIÓN.

Al interpretar el texto constitucional, sobre las limitaciones que pudiera llegar a tener el Derecho de Reunión, es necesario detenerse y mencionar que la Constitución Política de la República de Guatemala en el párrafo primero de su artículo treinta y tres menciona el reconocimiento que se le da al derecho de reunión, sin embargo éste continúa diciendo que ésta debe ser pacífica y sin armas, lo cual es congruente con la definición de derecho brindada con anterioridad, en donde se menciona que derecho es la facultad natural que posee el hombre de obrar sin alterar el derecho ajeno, utilizando violencia o contraviniendo prohibiciones legales establecidas.

⁸⁰ *Ibid.*, Pág. 434.

⁸¹ *Loc. Cit.*

Más adelante en el mismo artículo treinta y tres de la Constitución, se establece que los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Es muy importante recordar que la misma Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo segundo establece que: “Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Es por ello que el derecho de reunión pese a no poder ser restringido, disminuido o coartado, la ley lo regula para preservar sobre todas las cosas el orden público, esto quiere decir que el Estado a través del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, el cual pertenece a las leyes constitucionales del año 1965, preserva la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona a través de la Ley de Orden Público.

Es necesario conocer el contexto histórico en el cual se encontraba Guatemala al momento de que se decretó la Ley de Orden Público, de esa forma se entenderá de mejor manera el por qué en determinadas situaciones se puede restringir no sólo el derecho de reunión, sino algunas otras garantías consagradas dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, contrario al precepto de que los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, a excepción por supuesto de situaciones en pro de garantizar el orden público.

Por ello, es indispensable reconocer que en el año 1965 se hizo evidente la inestabilidad política del Estado guatemalteco, “Así, “como consecuencia del golpe de Estado protagonizado por el Ejército el 31 de marzo de 1963, el coronel Enrique Peralta Azurdia pasó a ser Jefe de Estado, centralizando los poderes en su persona; declaró ilegales los partidos políticos y suspendió la vigencia de la Constitución por el tiempo que fuera necesario. El 26 de diciembre de 1963 se dictaron medidas para la convocatoria a una Asamblea Constituyente. La Asamblea se instaló el 6 de julio de

1964 y el 15 de septiembre del año siguiente se promulga una Constitución desarrollada con 271 artículos en su texto y once disposiciones transitorias finales”⁸² Ocurrieron varios cambios dentro de la Constitución de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Constituyente el 15 de septiembre de 1965, sin embargo, el punto central al cual se quiere hacer referencia y el cual es primordial para el estudio de las limitaciones al derecho de reunión, es que “Es necesario hacer notar que: “la Asamblea Constituyente emitió leyes de rango constitucional, que necesitan para su reforma de una mayoría especial de votos de los diputados al Congreso. Tales leyes son las de: Orden Público; Amparo, Hábeas Corpus y Constitucionalidad; y de Emisión del Pensamiento.” La primera y la última de éstas aún se encuentran vigentes; la segunda fue derogada por el Decreto 1-86 Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad”⁸³

El Decreto Número 7, Ley de Orden Público en su primer considerando reza que: “Es obligación de las autoridades mantener la seguridad, el orden público y la estabilidad de las instituciones del Estado, lo cual requiere en determinadas circunstancias, la restricción de garantías que la Constitución establece”. Tal es el caso de la garantía y el derecho que poseen todos los guatemaltecos de reunirse en forma pacífica y sin armas, ya que ésta podría ser una de las excepciones en las cuales el Estado de Guatemala podría limitar el ejercicio de mencionado derecho.

Posteriormente, la Ley de Orden Público en su considerando segundo menciona “Que en el caso de restricción de garantías constitucionales, debe asegurarse a los habitantes del país, que la aplicación de las medidas legales correspondientes se hará en lo estrictamente necesario”, para ello se decretó dicha ley, y es por ello que su existencia constituye la excepción a la regla de que los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados. Sin embargo, es de suma importancia el conocimiento de las pequeñas excepciones y limitaciones aplicables.

⁸² Pereira Orozco Alberto y E. Richter Marcelo Pablo. *Op. Cit.*, Pág. 91.

⁸³ *Ibid.*, Pág.94.

En ese orden de ideas y en atención a lo anteriormente expuesto es que a pesar de que “En Guatemala, los derechos de reunión y de manifestación no han tenido desarrollo legislativo, es decir, no se ha emitido una ley específica que regule su ejercicio. Sin embargo, la Ley de Orden Público prevé que, cuando exista amenaza cierta de alteración de dicho orden como consecuencia de los fenómenos o actos que obligan a decretar un estado de excepción, la celebración de reuniones públicas o la práctica de manifestaciones pueden ser limitadas o, incluso prohibidas”⁸⁴

El ámbito de aplicación del decreto 7, Ley de Orden Público, se encuentra regulado en su artículo primero en donde establece que: “Esta ley se aplicará en los casos de invasión del territorio nacional de perturbación grave de la paz, de calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado”. Lo anterior está íntimamente relacionado con el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece lo relativo a la Limitación a los derechos constitucionales diciendo que: “Es obligación del Estado y de las autoridades, mantener a los habitantes de la Nación, en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, en caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad el Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5to, 6to, 9, 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116.”

Dentro del marco Constitucional, la Ley de Orden Público y Estados de Excepción se encuentran regulados dentro del artículo 139 de la Constitución Política de la República en donde se establece que “Todo lo relativo a esta materia, se regula en la Ley Constitucional de Orden Público. La Ley de Orden Público, no afectará el funcionamiento de los organismos del Estado y sus miembros gozarán siempre de las inmunidades y prerrogativas que les reconoce la ley; tampoco afectará el funcionamiento de los partidos políticos. La Ley de Orden Público, establecerá las medidas y facultades que procedan, de acuerdo con la siguiente gradación:

⁸⁴ Instituto de Justicia Constitucional. *Op. Cit.*, Pág. 440.

- A) Estado de prevención;
- B) Estado de alarma;
- C) Estado de calamidad pública;
- D) Estado de sitio; y
- E) Estado de guerra.”

Se puede observar que son varias las medidas que el Estado puede tomar con el fin preservar la seguridad, el orden público y la estabilidad en sus instituciones, no obstante, para los efectos de la presente investigación solamente se desarrollarán las medidas que de alguna manera afecten o más bien limiten el derecho de reunión en Guatemala.

Previo ingresar en materia de los estados que establecen las medidas y facultades que se pueden tomar y las cuales de alguna forma podrían limitar o restringir el derecho de reunión, vale la pena “Considerar que los derechos de reunión y manifestación, al igual que otros derechos fundamentales, no son absolutos y, por tanto, su ejercicio está sujeto a determinadas limitaciones”⁸⁵. Esto debido a que “Estas guardan relación recíproca con las condiciones cuya observancia es indispensable para que gocen de la protección constitucional, pues el objetivo de ambas es permitir la celebración de reuniones o manifestaciones públicas asegurando, con el establecimiento de tales restricciones, que durante su desarrollo no se restrinja ni vulnere el derecho de otros, dada la probabilidad de que esto último suceda”⁸⁶. Lo expuesto anteriormente es de suma importancia, debido a que es precisamente lo que se pretende estudiar en la presente investigación, las vulneraciones y abusos que se presentan en el ejercicio del derecho de reunión y manifestación por la falta de una regulación específica y el establecimiento de ciertas restricciones, para que estas, no deriven en la vulneración de los derechos fundamentales del resto de la población que no está involucrada en la reunión o manifestación que se lleva a cabo.

⁸⁵ *Ibid.*, Pág. 441.

⁸⁶ *Loc. Cit.*

Por otro lado “Las reuniones pacíficas, sin armas y bajo techo, en opinión de Peña Hernández, no están sujetas a ninguna limitación, ya que esa libertad las garantiza plenamente. Las que se realizan al aire libre, en cambio, están reguladas por normas de Policía, que es la autoridad que vela por la preservación del orden, la paz o la tranquilidad pública”⁸⁷. Es importante mencionar este aspecto, pues son precisamente las reuniones que se celebran en la vía pública las que son de interés de la investigación, ya que son éstas, las que en algún momento entran en conflicto con los intereses y derechos de las demás personas y provocan abusos que generan implicaciones jurídicas de diversa naturaleza.

Recordando que la base Constitucional del derecho de reunión establece que estas deben realizarse de forma pacífica y sin armas es que se puede decir que “Las limitaciones obligadas e ineludibles para ejercer este derecho son principalmente dos: la reunión debe ser pacífica, sin armas y los fines de la misma deben ser lícitos. En efecto, en un Estado civilizado, el uso de la violencia está exclusivamente reservado a los órganos de la coerción jurídica, por tal motivo, las reuniones deben ser “pacíficas”, es decir, éstas no deben alterar el orden público; las reuniones no pueden ser “armadas”, es decir, que no pueden utilizarse armas de ningún tipo (de fuego, punzantes, contundentes, etc.).

Por otro lado, el derecho de reunión y manifestación está condicionado a la licitud de los fines, esto es algo obvio. No es admisible reunirse para la comisión de un delito, ni para promover alteraciones del orden público”⁸⁸. Esto en cuanto a las limitaciones que la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece en materia del derecho de reunión, pese a que es esta misma la que reza que el derecho de reunión y manifestación no puede ser restringido, disminuido o coartado. “Hay además, otras limitaciones justificadas a la libertad de reunión. En este caso la fuente de estas restricciones está en los otros derechos de las demás personas, que podrían verse injustamente menoscabados por reuniones al aire libre o por

⁸⁷ *Loc. Cit.*

⁸⁸ Mendoza G. Lissette Beatriz y Orantes Mendoza Ricardo. Constitución Explicada. Guatemala, 2010. Tercera Edición. Editorial Jurídica Salvadoreña. Página 67.

manifestaciones en las calles. Algunas veces las personas quieren manifestar su opinión y sucede que salen a las calles, generando desorden. A este respecto comenta Angel Ossorio y Gallardo: “Esto es legítimo, pero molesto y peligroso: primero, porque obstaculizar la circulación por determinadas calles es un vejamen impuesto a los transeúntes adversarios o simplemente indiferentes y pacíficos; y, después, porque las grandes aglomeraciones son siempre propensas a alteraciones del orden público”. A las autoridades les compete mantener el orden, sin obstaculizar los derechos de unos o de otros”⁸⁹.

De lo anterior deviene la importancia de la aplicación de la Ley de Orden Público, ya que el ejercicio del derecho de reunión puede sonar algo insignificante e inofensivo, sin embargo, cuando se realiza de una forma inadecuada altera y vulnera los derechos de ciudadanos pacíficos y sin intereses en común con las personas que se reúnen o aglomeran por alguna razón.

En referencias históricas jurídicas respecto a las limitaciones que se pueden imponer al derecho de reunión “El constitucionalista Colomer Viadel cita la sentencia de la Audiencia Territorial de Madrid de 8 de abril de 1988, en la que ésta considera que el derecho de reunión tiene “sus genuinas delimitaciones y sus límites propios (...) siendo un derecho de ejercicio colectivo, incide, al ser realizado, en el derecho y en los intereses de otros y en la utilización exclusiva y excluyente de bienes públicos, posibilitando, a veces, el desequilibrio de la seguridad ciudadana y del orden general, que corresponde salvaguardar al orden público”⁹⁰.

“Además, refiriéndose a la sentencia 36/82 del 16 de junio del Tribunal Constitucional Mexicano, el mismo autor asegura que dicha resolución “pone de manifiesto que ningún derecho constitucional tiene carácter absoluto e ilimitado y más aún en el caso (...) que estamos frente a un derecho subjetivo de ejercicio colectivo que tiene la virtualidad de incidir directamente al derecho e intereses de otros ciudadanos: en

⁸⁹ *Loc. Cit.*

⁹⁰ Instituto de Justicia Constitucional. *Op. Cit.*, Pág. 442.

la utilización exclusiva de bienes públicos y en el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana.”. Aún así, dicho tratadista estima que “las restricciones únicamente encontrarán el apoyo en aquellos casos en los que existan datos objetivos que permitan considerar de forma indubitada que la manifestación no se ajusta a los parámetros constitucionales, en relación especialmente a los derechos de terceros y al orden público en general”⁹¹.

Es en éste punto donde se reitera la importancia de denominadores comunes respecto a la imposición de restricciones y limitaciones al derecho de reunión, los derechos del resto de la población y el orden público en general, es por ello que pese a que en Guatemala la Constitución misma establece que dicho derecho no puede ser restringido, limitado o coartado y no establece una regulación específica al respecto, la Ley de Orden Público toma un papel fundamental refiriéndose a las excepciones en las cuales el derecho de reunión no puede ser ejercido con plena libertad.

En el plano internacional “El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al reconocer el derecho de reunión pacífica, también establece ciertas limitaciones al señalar: “El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público o para proteger la salud, o la moral pública o los derechos y libertades de los demás.” (art. 21). La convención para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales sujeta, en parecidos términos, el derecho de reunión a tales limitaciones (art. 11). Y de igual forma lo hace la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (art. 15)”⁹².

Profundizando un poco más en el tema de las limitaciones a las cuales puede hacer referencia la Convención Americana sobre los Derechos Humanos “Las limitaciones que se pueden aplicar al derecho a la libertad de reunión son, en primera instancia,

⁹¹ *Loc. Cit.*

⁹² *Loc. Cit.*

las que derivan del tenor mismo del primer párrafo del artículo 15 de la convención; esto es, que se trate de reuniones “pacíficas y sin armas”. Las reuniones deben ser efectivamente pacíficas, es decir, que no debe producirse una alteración del orden público por parte de quienes la llevan a cabo, excluyéndose el uso de armas e incluyéndose el compromiso de respetar la propiedad pública y privada, así como la tranquilidad ciudadana. Criterios que, como ha referido la Corte Constitucional de Colombia en su sentencia T-456 del 14 de julio de 1992, Deben estar dirigidos exclusivamente a evitar amenazas graves e inminentes. Por lo general, es insuficiente un peligro eventual y genérico, un simple temor o una sospecha. La naturaleza del derecho de reunión, en sí mismo conflictivo, no puede ser la causa justificativa de normas limitativas del mismo. No se puede considerar el derecho de reunión y manifestación como sinónimo de desorden público para restringirlo per se.”⁹³

Pero el hecho de que la reunión sea pacífica y sin armas no es el único precepto que constituye una limitación de acuerdo con el artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en concordancia con el artículo 33 de la Constitución Política de la República de Guatemala, “Aquellas restricciones a las que alude el segundo párrafo del artículo. Esto es, las que prevea “la ley” y “sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás””⁹⁴

“En efecto, tanto el Pacto, como el Convenio Europeo y la Convención Americana afirman que la restricción del derecho de reunión sólo se puede hacer en circunstancias particulares y conforme a la ley. Ambos tratados exigen, en primer lugar, la existencia de una ley adoptada con el objetivo de reglamentar el derecho de reunión y las restricciones asociadas; y, en segundo lugar, que estas restricciones se ejerzan en las situaciones en las que el derecho de reunión pusiera en peligro el

⁹³ Convención Americana sobre Derechos Humanos Comentada. Página 367.

⁹⁴ Convención Americana sobre Derechos Humanos Comentada. Página 368.

buen funcionamiento de una sociedad democrática. Por ejemplo, cuando la reunión de dos grupos opuestos se ha previsto en la misma fecha y en el mismo lugar de la ciudad se puede prever la posibilidad de que degeneren y amenace la seguridad colectiva, la ley puede permitir que las autoridades públicas intervengan para restringir el contacto entre los miembros de estos grupos. Esta intervención podría incluir la instalación de una barrera entre ellos, el desvío de su recorrido o exigir que las manifestaciones se desarrollen a fecha y horas diferentes. Entonces, las medidas adoptadas por la policía podrán interpretarse como medidas necesarias para el buen funcionamiento de una sociedad democrática y tomadas con el objetivo de proteger a los grupos que ejercen su derecho a la reunión pacífica”⁹⁵

De lo anterior se puede colegir, que, de alguna manera, la Ley de Orden Público es la ley adoptada por Guatemala para imponer cierta restricción o limitación al derecho constitucional de reunión, ya que esta “contiene cuatro limitaciones a los derechos de reunión y manifestación. Estas restricciones operan cuando el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, mediante la emisión del decreto correspondiente”⁹⁶. Es por ello que a continuación se individualizaran los supuestos en los cuales la Ley de Orden Público contempla la limitación o restricción al derecho de reunión.

En primer lugar, hay que recordar que para que se pueda llevar a cabo la limitación a los derechos constitucionalmente reconocidos, tal y como es el caso del derecho de reunión y manifestación se debe realizar un decreto, tal y como lo establece el artículo 138 en su párrafo segundo en donde dice lo siguiente: “Al ocurrir cualquiera de los casos que se indican en el párrafo anterior, el Presidente de la República, hará la declaratoria correspondiente, por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros y se aplicarán las disposiciones de la Ley de Orden Público”. Dicho decreto debe especificar diversos factores, tal es el caso de:

⁹⁵ Convención Americana sobre Derechos Humanos Comentada. Página 368.

⁹⁶ Instituto de Justicia Constitucional. *Op. Cit.*, Pág. 442.

- A) Los motivos que lo justifiquen;
- B) Los derechos que no puedan asegurarse en su plenitud;
- C) El territorio que afecte; y
- D) El tiempo que durará su vigencia.

Posteriormente el mismo artículo continúa diciendo que: “Además, en el propio decreto, se convocará al Congreso, para que, dentro del término de tres días, lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que el Congreso estuviere reunido, deberá conocerlo inmediatamente”. Por supuesto, no se le otorga un poder absoluto al Estado, por decirlo de alguna manera, ya que en el párrafo siguiente del artículo 138 Constitucional se establece una serie de limitaciones al mismo, ya que “Los efectos del decreto no podrán exceder de treinta días por cada vez. Si antes de que venza el plazo señalado, hubieren desaparecido las causas que motivaron el decreto, se le hará cesar en sus efectos y para este fin, todo ciudadano tiene derecho a pedir su revisión. Vencido el plazo de treinta días, automáticamente queda restablecida la vigencia plena de los derechos, salvo que se hubiere dictado nuevo decreto en igual sentido. Cuando Guatemala afronte un estado real de guerra, el decreto no estará sujeto a las limitaciones de tiempo (...)”.

Finalmente en el último párrafo del artículo 138 de la Constitución Política de la República, se le otorga ciertas prerrogativas a la población guatemalteca, ya que básicamente se dice que “al desaparecer las causas que motivaron el decreto a que se refiere este artículo, toda persona tiene derecho a deducir las responsabilidades legales procedentes, por los actos innecesarios y medidas no autorizadas por la Ley de Orden Público”.

En el comentario que realiza Gloria Patricia Porras Escobar a dicho artículo Constitucional, expone que: “El precepto incluye el imperativo concerniente a que es obligación del Estado y de las autoridades, mantener a los habitantes de la Nación, en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, la norma expresamente faculta al Estado para poder cesar la plena vigencia de los

derechos a los que se refieren los artículos 5, 6, 9, 26, 33, primer párrafo del artículo 35, segundo párrafo del artículo 38 y segundo párrafo del artículo 116. El artículo determina el procedimiento para que la decisión limitante de esos derechos constitucionales adquiera vigencia, señalando que el presidente de la República hará la declaratoria correspondiente, por medio de decreto dictado en Consejo de Ministros y se aplicarán las disposiciones de la Ley de Orden Público – en el estado de prevención indica, no será necesaria esa formalidad -. En el propio decreto -se especifica-, se convocará al Congreso, para que, dentro del término de tres días, lo conozca, lo ratifique, modifique o impruebe. En caso de que el Congreso estuviere reunido – precisa -, deberá conocerlo inmediatamente. Ese apartado del artículo examinado establece un tiempo perentorio, fijado en tres días, para que el Congreso de la República, una vez que reciba formal y oficialmente el decreto que hubiere emitido el presidente de la República en Consejo de Ministros, que declare uno de los estados de excepción previstos en la Ley de Orden Público, lo conozca y, de acuerdo con la decisión que dicte, lo ratifique, modifique o impruebe. Es de mencionar que el precepto constitucional privilegia el conocimiento de esa decisión por parte del Congreso de la República, al indicar expresamente que si ese Organismo estuviere reunido debe hacerlo en forma inmediata. De ahí que el ejercicio de una interpelación en curso no podría impedir que la Junta Directiva o el Pleno del Congreso de la República desatiendan el mandato contenido en la norma constitucional de estudio”⁹⁷.

2.3.1 ESTADO DE PREVENCIÓN.

Contenido en el artículo 8 de la Ley de Orden Público, vale la pena mencionar que uno de los distintivos de la declaración del estado de prevención es que éste no requiere la formalidad de la realización de la declaratoria correspondiente por medio de un decreto, ya que éste no requiere aprobación del Congreso y “su vigencia no excederá de quince días”. Al declarar el estado de prevención el Ejecutivo puede tomar varias medidas, sin embargo, para los intereses de éste estudio se abordarán

⁹⁷ Porras Escobar Gloria Patricia. Constitución Política de la República de Guatemala con Notas de Jurisprudencia. Guatemala. Editorial Servi Prensa. 2015. Páginas 264 y 265.

estrictamente las que hacen mención o más bien representan limitación o restricción al derecho de reunión siendo las siguientes:

- a. El numeral tres del artículo 8 de la Ley de Orden Público, establece una limitación al derecho de reunión ya que éste pretende: “Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y en su caso, impedir que se lleven a cabo, aun cuando fueren de carácter privado”. En ésta limitación se puede observar que pese a que se había mencionado que las reuniones de carácter privado no constituían un interés a las autoridades de un Estado pues estas no menoscaban ni representan una amenaza a los derechos de las demás personas, ésta limitación se establece con la finalidad de salvaguardar la vida y la integridad de la persona más allá del derecho que posee de reunirse en forma privada.
- b. Posteriormente en el numeral cuarto del mismo artículo se restringe el derecho de reunión al “Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevaren a cabo sin la debida autorización, o, si habiéndose autorizado se efectuare portando armas u otros elementos de violencia. En tales casos, se procederá a disolverlas; si los reunidos o manifestantes se negaren a hacerlo, después de haber sido conminados para ello”. Esta restricción es bastante lógica si se atiende a que el reconocimiento del derecho de reunión se hace contemplando que el mismo se ejercerá de forma pacífica y sin armas tal y como lo establece el artículo 33 Constitucional. Por otro lado, y pese a que “Para el ejercicio del derecho de reunión y manifestación no es necesario previo examen o rendir caución (garantía) por los posibles daños que la misma ocasionare, ya que esto podría operar de modo que este derecho se vea restringido, disminuido o coartado. En consecuencia, el ejercicio de este derecho no supone autorización previa, porque la negativa de la autoridad, como consecuencia lógica de la facultad que ésta posee para autorizar o desautorizar dicha reunión, degeneraría en una flagrante violación de este derecho”⁹⁸. La previa autorización a la que se refiere este inciso va más encaminada al ejercicio del derecho de manifestación,

⁹⁸ Mendoza G. Lissette Beatriz, Mendoza Orantes Ricardo. *Op.Cit.*, Pág. 67.

sin embargo, bien vale la pena tomar en consideración la idea anterior respecto al ejercicio del derecho de reunión.

- c. Por último, dentro del Estado de Prevención, el artículo 8 de la Ley de Orden Público en su numeral quinto, contempla “Disolver por la fuerza, sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere a actos de violencia”. De más está establecer los motivos por los cuales el Estado tendría potestad absoluta para disolver una reunión en donde se observen los elementos anteriores, ya que como se mencionó en el párrafo que antecede, esto constituiría una violación misma al precepto Constitucional que se refiere a que “se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas”, y que el Estado permitiera una situación de tal magnitud, afectaría en demasía los derechos fundamentales en materia Constitucional y los consagrados dentro de tratados sobre derechos humanos.

2.3.2 Estado de alarma.

De acuerdo con Guillermo Cabanellas, el estado de alarma es “Situación de grave alteración del orden público, que obliga a suspender las garantías constitucionales. A veces, la intranquilidad es ficticia, y constituye recurso de gobiernos autoritarios que abusan de su facultad de calificar tal perturbación”⁹⁹

El segundo estado que contiene un inciso que restringe o limita el derecho de reunión es el estado de alarma, el cual de acuerdo con lo que establece el artículo 13 de la Ley de Orden Público, “puede restringir algunas o todas las garantías señaladas” dentro de la Constitución Política de la República. Cabe mencionar que el mismo artículo dice que “Cuando el Ejecutivo decida decretar el estado de alarma, señalará el todo o parte del territorio afectado por él”, lo cual quiere decir que el estado de alarma puede ser parcial o total, y dentro de las medidas que puede

⁹⁹ Estado de Alarma. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva Edición Actualizada Corregida y Aumentada. Editorial Heliasta S.R.L. Undécima Edición, 1993. Página 125.

adoptar durante su vigencia el Ejecutivo, además de las que se aplican al estado de prevención se encuentra:

Dentro del artículo 13 numeral 8 de la Ley de Orden Público, la de “Prohibir y suspender las reuniones, huelgas o paros, con disposiciones y medidas adecuadas al caso y a las circunstancias de la emergencia”. La prohibición que se realiza entendiendo la emergencia como una “situación de peligro o desastre que requiere de una acción inmediata”¹⁰⁰, por lo cual se puede deducir que el Estado prevé un desastre o peligro para un sector o toda la población guatemalteca por lo cual toma las medidas necesarias para proteger a la persona, salvaguardar la vida y la integridad de las personas.

2.3.3 Estado de calamidad pública.

El artículo 14 de la Ley de Orden Público reza que “El Estado de calamidad pública podrá ser decretado por el Ejecutivo para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos”. Debe entenderse calamidad como “Desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas”¹⁰¹. El estado de calamidad pretende nuevamente salvaguardar la vida y la integridad física de los habitantes de Guatemala y por tanto entre las disposiciones o medidas que puede tomar el Presidente de la República en éste tipo de situaciones está la establecida dentro del artículo 15 de la Ley de Orden Público, específicamente en su numeral cuarto, la cual literalmente dice lo siguiente: “Impedir concentraciones de personas y prohibir o suspender espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones”.

2.3.4 Estado de sitio.

Dentro de éste estado no se menciona específicamente alguna limitación o restricción al derecho de reunión, sin embargo, es importante su observancia debido

¹⁰⁰ Real Academia Española. Real Academia Española. Libertad. España, 2017. <http://dle.rae.es/?id=EiX5X40>. 14 de septiembre de 2017.

¹⁰¹ Real Academia Española. Real Academia Española. Libertad. España, 2017. <http://dle.rae.es/?id=6h9ZY0Z>. 14 de septiembre de 2017.

a que dentro del mismo son aplicables todas las medidas establecidas para los estados de prevención y Alarma. Vale la pena mencionar que “Al respecto, el pensador argentino Germán Bidart Campos estima que, aun cuando durante el estado de sitio el derecho de reunión es uno de los que suele restringirse con mayor rigor, “sólo pueden prohibirse razonablemente las reuniones cuya realización compromete la situación de emergencia existente, pero no las que carecen de toda relación con ella””¹⁰²

Al finalizar el desarrollo y exposición de las limitaciones respecto al derecho de reunión, cabe mencionar que “Pese a que dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco no existe una ley reguladora de los derechos en estudio, se ha tipificado el delito de “Reuniones y manifestaciones ilícitas”. Al hacerlo se estableció que incurren en este tipo penal quienes organizan o promueven cualquier reunión o manifestación pública con infracción de las disposiciones que regulan ese derecho o participan en ellas. La pena a imponer, en este caso, será prisión de seis meses a dos años”¹⁰³.

¹⁰² Instituto de Justicia Constitucional. *Op. Cit.*, Pág. 443.

¹⁰³ *Loc. Cit.*

CAPITULO III.

DERECHO DE MANIFESTACIÓN.

3.1 Concepto y definición.

Ya se ha citado el artículo Constitucional en donde al igual que el derecho de reunión, se encuentra regulado el derecho de manifestación. Es importante recordar que los derechos mencionados están establecidos en la parte dogmática de la Constitución, por lo cual se encuentran contemplados dentro del grupo de derechos fundamentales, derechos humanos y garantías individuales que establece la Constitución Política de la República de Guatemala -CPRG- en favor de todos los guatemaltecos.

El término está compuesto por las palabras derecho y manifestación, por lo que es esencial mencionar que derecho “Constituye la facultad, poder o potestad individual de hacer, elegir o abstenerse en cuanto a uno mismo atañe, y de exigir, permitir o prohibir a los demás”¹⁰⁴. Por otro lado el Diccionario de la Real Academia Española brinda definiciones importantes en materia de derecho, la primera la cual se refiere a la “facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño de una cosa nos permite en ella”¹⁰⁵, la segunda que expone que derecho es “la facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida”¹⁰⁶, y finalmente la cual establece que derecho son “las facultades y obligaciones que derivan del estado de una persona, o de sus relaciones con respecto de otras”¹⁰⁷.

Posteriormente se encuentra la palabra manifestación, la cual se refiere a “Declaración. Publicación. Descubrimiento. Revelación. Confesión. Confidencia.

¹⁰⁴ Derecho. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva Edición Actualizada Corregida y Aumentada. Editorial Heliasta S.R.L. Undécima Edición, 1993. Pág. 97.

¹⁰⁵ Real Academia Española. Real Academia Española. Derecho. España 2017. <http://dle.rae.es/?id=CGv2o6x> . 23 de octubre de 2017.

¹⁰⁶ Ibíd.

¹⁰⁷ Ibíd.

Notificación. Hecho de poner a la vista. Signo, Prueba, indicio”¹⁰⁸. En otra de las definiciones, esta vez brindada por el Diccionario de la Real Academia Española y la cual, vale la pena mencionar, es más adecuada para la concepción de la palabra manifestación para los fines de la investigación, establece que es una “Reunión pública, generalmente al aire libre y en marcha, en la cual los asistentes a ella reclaman algo o expresan su protesta por algo”¹⁰⁹.

Por lo tanto, refiriéndose al derecho de manifestación como derecho humano y para los fines que persigue la investigación, se puede decir que derecho de manifestación es el conjunto de facultades que poseen todos los seres humanos de reunirse públicamente, en un movimiento al aire libre con el fin de reclamar algo, protestar, o expresar la inconformidad de un grupo de personas respecto a algo.

En definiciones más completas sobre el derecho de manifestación, se dice que “implica la agrupación o reunión de un grupo de personas que tienen la finalidad común de emitir un mensaje públicamente. El tipo de mensaje dependerá de los intereses del grupo. Así es que por medio de una manifestación, dicha agrupación podría, por ejemplo, exponer su opinión acerca de disposiciones emitidas por las autoridades públicas (o, excepcionalmente, por autoridades privadas) sea ésta a favor o en contra; en ese sentido, se organiza una manifestación para demostrar la postura que sus participantes han asumido respecto de las medidas que aquellas adoptan y que inciden de forma directa en la esfera jurídica de estos, en especial, cuando las mismas afectan sus intereses o limitan sus libertades. En ese caso, se manifiesta con el propósito de formular una protesta contra tales providencias, o bien, de oponer resistencia ante medidas administrativas o reglamentarias. Además de ello, las manifestaciones suelen tener como objetivo la exigencia de una determinada prestación o la formulación de cualquier otro requerimiento que se estima legítimo para el beneficio de los demandantes, esto es, para la satisfacción de sus

¹⁰⁸ Manifestación. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva Edición Actualizada Corregida y Aumentada. Editorial Heliasta S.R.L. Undécima Edición, 1993. Pág. 198.

¹⁰⁹ Real Academia Española. Real Academia Española. Manifestación. España 2017. <http://dle.rae.es/?id=ODa74yP> . 23 de octubre de 2017.

necesidades. El ejercicio de este derecho también puede perseguir la sola exposición pública de una posición, creencia u opinión y supone, por tanto, el ejercicio de la libertad de expresión del pensamiento; sin embargo, como advierte el tratadista mexicano Antonio Colomer Viadel, si bien una de las finalidades del derecho a manifestar es hacer público un determinado estado de opinión, "... no comprende la posibilidad de reorientar por la fuerza el criterio de los demás..."¹¹⁰

La definición y opinión anteriores, son congruentes con el hecho de que el ejercicio del derecho de manifestación, si bien es cierto este, no puede ser restringido, disminuido o coartado, tampoco puede realizarse a través de formas pacíficas y por tanto no cabe la posibilidad de reorientar por la fuerza el criterio del resto de las personas tal y como lo expresa el tratadista mexicano Antonio Colomer Viadel.

"El derecho a manifestar, al igual que el derecho a reunirse, constituye un derecho individual cuyo ejercicio se realiza de forma colectiva. Y aunque su concepción subjetiva es necesaria para el reconocimiento de la facultad particular de la que goza su titular para ejercerlo, la importancia que tiene desde el punto de vista objetivo es fundamental en la democracia indirecta. Pues uno de los mecanismos de participación con el que los ciudadanos, al expresar su desacuerdo o queja en una manifestación, podrían restar legitimidad a las decisiones adoptadas por sus representantes."¹¹¹. Esto quiere decir que el derecho de manifestar es reconocido como derecho humano por la calidad que posee el individuo, sin embargo, para poder concretar su ejercicio no sólo requiere de estar en desacuerdo con alguna postura, decisión estatal o administrativa, sino que también necesita un grupo de personas que compartan la misma inconformidad y que en tal virtud soliciten o manifiesten de forma pública su protesta.

Dicho esto, se puede concluir que por las características con que cuenta el derecho de manifestación, es que se contempló constitucionalmente en el mismo artículo que

¹¹⁰ Instituto de Justicia Constitucional. *Op. Cit.* Páginas 435 y 436.

¹¹¹ *Loc. Cit.*

el derecho de reunión, dado que su única diferencia podría ser que la reunión se realiza en un lugar determinado, tradicionalmente puerta cerrada, mientras que la manifestación se lleva a cabo al aire libre, sin embargo, ambas persiguen un fin determinado lo cual constituye la causa principal de la reunión.

Sin embargo, la importancia del derecho de manifestación y su ejercicio va más allá de expresar, de forma colectiva, la inconformidad respecto a ciertas posturas. “Esa capacidad de los ciudadanos de reunirse para manifestar sus ideas y opiniones, también es significativa debido a la influencia que estos podrían ejercer en la toma de decisiones públicas. Por ello se considera al derecho de manifestación como una plataforma de comunicación plebiscitaria, que, mediante un ejercicio cívico, político y/o social, permite la emisión de un mensaje y facilita, a su vez, la percepción que del mismo pueda tener la autoridad a la cual es dirigido.”¹¹²

La idea anterior expresa, en sí, cómo debe ser una manifestación para que surta efectos positivos dentro de la sociedad. Un ejemplo claro de una manifestación que surtió efectos positivos dentro de Guatemala, y en la cual la población ejerció a su vez civismo, preocupación por la sociedad e incidió en decisiones políticas fue la que se llevó a cabo en agosto del año 2015, en donde coincidieron personas pertenecientes a todos los sectores de la población guatemalteca, llámese a estos comerciantes, trabajadores del sector público y privado, mujeres, niños, ancianos entre muchos otros que protestaron frente a la Plaza de la Constitución, así como desde las principales cabeceras departamentales y los bloqueos que se establecieron en las diferentes carreteras del país, con un objetivo en común, la renuncia del en ese entonces presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina.

Fue en la manifestación mencionada que convergieron todos los elementos necesarios para ejercer el derecho citado con propiedad y sin afectar el resto de derechos humanos, pues “la libertad de manifestación no es sólo una modalidad de

¹¹² *Loc. Cit.*

libertad de reunión, sino, más aún, constituye su efecto principal. Asegura que cuando se tiene formada la opinión y voluntad comunitaria, la manifestación (exteriorización o demostración) de esa opinión y voluntad está protegida por la respectiva libertad o garantía.”¹¹³ En este caso en concreto, se expresó la voluntad no sólo de una comunidad, sino de un país entero.

“En opinión del constitucionalista Enrique Álvarez Conde, el derecho de reunión es uno de los clásicos derechos de participación política, calificado por la jurisprudencia constitucional española como derecho de libertad frente a los poderes públicos. Dicho autor refiere la sentencia 85/1988 de 28 de abril, en la que el Tribunal Constitucional Español expresó que el citado derecho: “... es una manifestación colectiva de la libertad de expresión ejercida a través de la asociación transitoria, siendo concebido por la doctrina científica como un derecho individual en cuanto a sus titulares y colectivo en su ejercicio, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas o reivindicaciones, constituyendo, por tanto, un cauce del principio democrático participativo...”.”¹¹⁴

Por lo tanto, la importancia del derecho de reunión y manifestación se extiende más allá de la capacidad que tienen los individuos para agruparse de forma privada o pública para la persecución de determinado fin, “el ejercicio de estos derechos, importa, entonces, en primer orden, a los ciudadanos, individualmente considerados, para garantizar su participación cívica y política en los asuntos públicos de su interés y, luego, para definir posiciones que tendrán incidencia en la formación de opinión pública. Parecido es el razonamiento que hace el jurista Carlos Santiago Nino al afirmar que la oportunidad de reunión no sólo es relevante para el desarrollo de la autonomía personal, sino también para el buen funcionamiento del proceso de discusión y decisión democráticas.”¹¹⁵

¹¹³ *Loc. Cit.*

¹¹⁴ *Loc. Cit.*

¹¹⁵ *Ibid.*, Pág. 437.

En ese orden de ideas se puede expresar que “el reconocimiento, garantía y regulación del derecho de reunión y manifestación en la Constitución Política de la República constituye un aporte de gran trascendencia al sistema democrático, pues le sirve de sustento y permite su fortalecimiento por medio de la participación colectiva que cada individuo tiene, en principio, en reuniones que, posteriormente y de acuerdo a los lineamientos legales respectivos, hace posible la constitución de asociaciones cívicas y la creación de organizaciones políticas; aunque, como lo señala el autor argentino Néstor Pedro Sagues, el de reunión es un derecho “natural de todo ser humano a relacionarse con los demás” y, por tanto, no se trata de un derecho “exclusivamente político, aunque tenga importantísimas concreciones en esta esfera.”¹¹⁶

3.2 ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES DEL DERECHO DE MANIFESTACIÓN EN GUATEMALA.

Históricamente, en Guatemala el derecho de manifestación como tal, apareció por primera vez en el año 1945, pues “Con la Constitución de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Constituyente el 11 de marzo de 1945 se introdujeron dos importantes cambios en el reconocimiento del derecho de reunión: la primera consistió en encomendar a leyes específicas la regulación de situaciones particulares para su ejercicio y en suprimir la prohibición de establecer congregaciones conventuales e instituciones monásticas; la otra es que se reconoció, por vez primera, el derecho de manifestación. El texto respectivo fue redactado así: “Artículo 31. Queda reconocido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas. La ley regula el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley respectiva.”¹¹⁷

Es interesante observar cómo fue que en constituciones anteriores solamente se había regulado el derecho de reunión, el cual había sido contemplado con

¹¹⁶ *Loc. Cit.*

¹¹⁷ Instituto de Justicia Constitucional. *Op. Cit.* Pág. 434.

anterioridad junto al derecho de asociación pues sostenían una relación importante respecto a su ejercicio. “No fue sino hasta la Constitución de 1945 que se regula el derecho de asociación de forma autónoma y, por su parte el derecho de reunión se garantiza en forma conjunta con el derecho de manifestación, reconocido por primera vez en esa oportunidad.”¹¹⁸

Más adelante en la historia Constitucional de Guatemala, “En similares términos fueron recogidos los derechos de reunión y manifestación en la Constitución de la República de Guatemala decretada por la Asamblea Constituyente el 2 de febrero de 1956, al preceptuar: “Artículo 53. Se reconoce el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas. Los derechos de reunión al aire libre y de manifestación pública no podrán ser restringidos, disminuidos o coartados y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley respectiva.””¹¹⁹

“De forma más garantista se redactó el reconocimiento de los referidos derechos en la Constitución de la República de Guatemala decretada por la Asamblea nacional Constituyente el 15 de septiembre de 1965, anterior a la Constitución vigente, ya que preceptuó: “Artículo 63. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y manifestación pública no podrán ser restringidos, disminuidos o coartados y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley.””¹²⁰

Como se puede observar, la forma de regular los referidos derechos no varía mucho entre una Constitución y otra, así mismo vale la pena resaltar la corta historia que se tiene del derecho de manifestación al punto de considerarse un derecho relativamente nuevo dentro del marco Constitucional guatemalteco. Por lo cual hoy día se regulan el derecho de reunión y manifestación en el artículo 33 de la CPRG el

¹¹⁸ *Loc. Cit.*

¹¹⁹ *Loc. Cit.*

¹²⁰ *Loc. Cit.*

cual establece que “Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley.”

3.3 Características del derecho de reunión y manifestación.

Se trata las características del derecho de reunión y manifestación de forma conjunta, por el hecho de estar reconocidos dentro de la CPRG de esta forma, por otro lado también por el hecho de no estar plenamente desarrollados por separado, lo cual es bastante lógico considerando el ejercicio de los mismos, por lo cual a continuación se puntualizará sobre los elementos y características que forman parte de estos derechos.

3.3.1 Conjunto de personas que lo llevan a cabo (elemento subjetivo).

Cuando se habla del derecho de reunión y manifestación, se trata de derechos que están reconocidos como humanos, por lo que reúnen características de los mismos tal y como lo es la individualidad, la cual se refiere a la pertenencia individual de cada uno de los derechos para la raza humana, por otro lado también es importante la característica de los derechos humanos que establece que estos son inalienables, lo cual refiere a la imposibilidad tanto jurídica como material de que los individuos no pueden transmitir sus derechos a otra persona, debido a que todas las personas en el mundo cuentan con los mismos derechos por su calidad como seres humanos, es por ello que pese a que “se ha expresado que, aunque la titularidad de los derechos de reunión y manifestación es individual, su ejercicio se realiza de forma colectiva. Una reunión puede tener lugar entre dos o más personas; una manifestación, en cambio, se organiza generalmente por un considerable grupo de personas.”¹²¹

Por lo tanto, se puede concluir de esta característica, que, aunque el derecho de reunión y manifestación es individual e inalienable, para su ejercicio se requieren dos

¹²¹ *Ibid.*, Pág. 438.

o más personas, ya que el ser humano tomado de forma individual no puede ejercerlo ni lograr los fines primordiales para los cuales fue constituido y reconocido.

3.3.2 Temporalidad (elemento temporal).

Quizás uno de los elementos y características más sencillos de comprender del derecho de reunión y manifestación sea la temporalidad, “pues la celebración de una reunión y de una manifestación no son permanentes, sino que tienen una duración determinada, en atención al cumplimiento de su finalidad, agotada la cual, aquella finaliza.”¹²² Este elemento es congruente con la finalidad que persiguen tanto el derecho de reunión como el de manifestación, ya que la celebración de una reunión como tal no se realiza de forma aleatoria y sin alguna razón que la motive, y dicha razón o motivación no puede ser permanente ya que una vez agotado el punto o los puntos que se desean tratar la reunión pierde su finalidad principal y por ende se acaba.

Por otro lado al ejercer el derecho de manifestación se agrupa o reúne un número de personas considerable, que al tener objetivos e ideales en común expresan de forma pública su inconformidad, protesta o desacuerdo en contra de alguna decisión tomada principalmente por el Estado o alguna de las instituciones de la administración pública, por lo cual una vez realizada la manifestación y lograda la presión que se pretendía ésta se acaba, haciendo de la temporalidad un elemento indispensable para el ejercicio de los referidos derechos.

3.3.3 Licitud de su causa.

Otro de los elementos esenciales para el ejercicio del derecho de reunión y manifestación es la licitud de la causa. Dentro del marco Constitucional guatemalteco, se establece claramente que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, que aplica de igual manera para el derecho de manifestación pues ya se vio que uno puede motivar al otro. Al respecto se ha manifestado que la licitud de la causa “se ha estimado como condición para su ejercicio, debido a que la

¹²² *Loc. Cit.*

garantía constitucional de estos derechos solo alcanza las reuniones y las manifestaciones que no sean contrarias a la moral y las leyes.”¹²³

Por tanto, se puede considerar a una reunión o manifestación, lícita, sí al momento de celebrar la misma se ejerce sin el uso de armas o sin que medie violencia y por supuesto sin que contraría el ordenamiento jurídico del país ya que los estados como es el caso de Guatemala, si bien es cierto no pueden restringir, disminuir o coartar estos derechos, los pueden regular con el único fin y objeto de garantizar el orden público.

3.3.4 Lugar de celebración.

“Por último, se habla del lugar de su celebración, con el entendido que, para la reunión, dicho elemento suele ser uno solo, pero una manifestación puede ser itinerante, en cuyo caso se tiene como tal el recorrido de la marcha.”¹²⁴. Este es un elemento simple para las reuniones, pues como bien menciona la cita anterior, una reunión puede celebrarse en un solo lugar y esta puede darse en lugares cerrados o abiertos. Por su parte las manifestaciones, si bien es cierto se pueden dar como concentración de personas en un solo lugar, su ejercicio es únicamente en la vía pública, y también puede darse el supuesto de que se realice una marcha hacia determinado lugar, o como bien sucedió en agosto de 2015, se realice una manifestación en diferentes lugares a la vez persiguiendo un mismo fin, ya que en ese entonces la población guatemalteca se unió para solicitar la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, lo cual implicó que los ciudadanos protestaran no sólo en la plaza de la constitución en la ciudad capital, sino también en las principales cabeceras departamentales.

De las características y elementos del derecho de reunión y manifestación enumerados e individualizados anteriormente hace igual enumeración “el Tribunal Constitucional Español – citado por Álvarez Conde -, al señalar que caracterizan al

¹²³ *Loc. Cit.*

¹²⁴ *Loc. Cit.*

derecho de reunión esos cuatro elementos, a los que denomina de la siguiente manera: el subjetivo (agrupación de personas), el temporal (duración transitoria), el finalista (licitud de la finalidad), y el real u objetivo (lugar de celebración). Con relación al segundo, el profesor Ignacio Burgoa entiende que una reunión se caracteriza por ser transitoria, ya que “su existencia y subsistencia están condicionadas a la realización del fin concreto y determinado que la motivó, por lo que logrado éste, tal acto deja de tener lugar.”¹²⁵

3.4 Clasificación del derecho de reunión y manifestación.

Si bien es cierto que el derecho de reunión y manifestación no han sido desarrollados a profundidad por las diferentes legislaciones a nivel mundial, sí se ha hecho una clasificación de las mismas, a la cual se puede referir de forma breve que pueden ser de en forma pública y privada, esto atendiendo a la idea que expresa que “la labor de categorizar la reunión y la manifestación no ha sido exhaustiva ni la doctrina ni la legislación. En la primera prevalece una sola clasificación en cuanto a las reuniones, que consiste en diferenciar las públicas de las privadas, en atención a la forma de su celebración. Germán Bidart Campos, por ejemplo, afirma que, con independencia del lugar donde se realice una reunión, ésta puede ser pública o privada. Explica que la primera se da cuando la misma “está abierta indiscriminadamente al público, o sea, cuando a ella puede asistir cualquiera”; y que es privada, en cambio, “cuando el acceso a ella carece de tal apertura.”¹²⁶

De la carencia del desarrollo pleno y profundo sobre los derechos de reunión y manifestación es ejemplo claro la CPRG, la cual se limita a establecer que las reuniones deben realizarse sin armas ni violencia, que este derecho no puede ser restringido, disminuido o coartado y que la única regulación al respecto será con el objeto de garantizar el orden público, lo cual, más adelante en la Constitución en sus artículos 138 y 139 está desarrollado de manera muy somera, estableciendo la limitación a los derechos constitucionales en casos concretos, y refiriendo

¹²⁵ *Loc. Cit.*

¹²⁶ *Loc. Cit.*

únicamente la Ley de Orden Público y Estados de Excepción como la única barrera o limitante en el caso del pleno ejercicio de los derechos de reunión y manifestación.

“Por su parte, la jurisprudencia de algunos órganos jurisdiccionales, como la Corte Suprema de Justicia de Argentina -a la que hace referencia el tratadista de ese país Pedro Sagües- también distingue las reuniones públicas de las privadas, pero basa tal diferencia en el lugar de su celebración. Con relación a las últimas, dicha Corte ha expresado que son “celebradas en lugares cerrados con escaso número de personas”, en las cuales “cada concurrente puede emitir libremente sus ideas”, mientras que, “las reuniones que importen el uso de las calles, plazas o parques públicos pueden ser sometidas al aviso y permiso previo, aún si se realizan fuera de la vía pública, porque toda aglomeración de personas es posible que provoque alteración del orden y tranquilidad públicos”.

Tal distinción no puede ser aplicada a la manifestación, pues ésta, dada su naturaleza y objetivo, siempre es pública. En todo caso, el criterio de clasificación tendría que obedecer a la finalidad de tal práctica. En ese sentido, una manifestación podría ser social, sindical, cívica, política, religiosa, artística, cultural, etcétera.”¹²⁷ Del hecho de que una manifestación pueda ser de distinta naturaleza y clasificación, surge la idea de que el abuso al derecho de reunión y manifestación pueda afectar otros derechos humanos consagrados dentro de la legislación nacional así como en convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos y al mismo tiempo derive en diversas implicaciones jurídicas, debido a que no todas las manifestaciones van a ser de interés nacional, por lo cual el sector social o grupo de personas que ejerciten su derecho pueden vulnerar el derecho ajeno.

Es por ello que “el ejercicio de los derechos en cuestión está sujeto a ciertas condiciones, cuya observancia es imprescindible para gozar de la protección que la Constitución le otorga. La doctrina es conteste al señalar, como una de las condiciones, la licitud de su finalidad, que, como se había anotado, es considerada

¹²⁷ *Ibid.*, Pág. 439.

también como un elemento característico de los derechos bajo análisis. Otra condición común en el estudio realizado por varios autores es su ejercicio pacífico, sin armas ni violencia, y sin alterar el orden público.”¹²⁸

A pesar de que las condiciones descritas anteriormente, se encuentran contempladas dentro del marco Constitucional guatemalteco, se estima pertinente que se desarrollen con mayor énfasis, no con el afán de limitar, sino de regular expresamente cómo debe ser ejercido el derecho de reunión y manifestación para que en primera instancia no se abuse de este a través de su recurrencia indiscriminada para resolver asuntos que se pueden tramitar en otra vía, y segundo, para que de dicho abuso no se deriven vulneraciones a otros derechos y que generen diferentes implicaciones jurídicas.

“Ignacio Burgoa, distingue dos condiciones para el ejercicio del derecho de reunión. La primera consiste en una realización pacífica del mismo, sin uso de violencia; y la segunda, en que la misma persiga un objeto lícito, o sea, el “constituido por aquellos actos que no pugnen contra las buenas costumbres o contra normas de orden público.” El jurista mexicano también explica que de la relación jurídica que implica garantizar el derecho en estudio se deriva, para el sujeto activo, “un derecho subjetivo público individual, consistente en la potestad o facultad que tiene el individuo de reunirse con sus semejantes con cualquier objeto lícito y de manera pacífica...” y que, de la misma relación “se desprende para el Estado y sus autoridades la obligación correlativa, que estriba en no coartar las libertades de reunión (...) garantizadas constitucionalmente bajo las condiciones indicadas”.¹²⁹

A partir del hecho de que los derechos de reunión y manifestación están reconocidos como derechos humanos, estos no requieren del reconocimiento de la legislación de determinado Estado, simplemente merecen su protección, sin embargo, al observar las condiciones que se establecen para los referidos derechos “las autoridades no

¹²⁸ *Loc. Cit.*

¹²⁹ *Loc. Cit.*

pueden limitar el ejercicio de este derecho siempre que sea ejercido bajo las condiciones previstas en la norma constitucional que lo garantiza; en cambio, cuando dichas condiciones no se dan, la relacionada obligación de las autoridades de abstenerse de restringir el ejercicio de ese derecho desaparece y nace, en su lugar, la obligación de aquéllas de intervenir para exigir su cumplimiento o restaurar el orden perdido, en atención a los derechos de terceros. Por ello, como estima el tratadista José María Lozano, “una reunión tumultuosa que inspirara justas alarmas a la sociedad”, o que “amenazara trastornar el orden público”, no estaría bajo el abrigo de la referida garantía constitucional.

En observancia a las condiciones descritas anteriormente, es que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, también contempla al respecto de los referidos derechos, que sólo pueden estar sujetos a restricciones previstas por la ley, pues esto preservará una sociedad democrática, la seguridad nacional, seguridad y orden públicos, y para proteger la salud y moral públicas o derechos o libertades de los demás. Es aquí donde expresamente se establece la barrera para evitar el abuso a tales derechos y el freno a las vulneraciones de otros derechos y las consecuentes implicaciones jurídicas.

Por su parte, “De lo previsto en el artículo 33 de la Constitución Política de la República, puede establecerse que el ejercicio del derecho de reunión y manifestación está condicionado al acaecimiento de tres circunstancias: La primera consiste en su realización de forma pacífica y sin armas, esto es, sin uso de fuerza, coacción o violencia.”¹³⁰

3.5 Medios de abuso al derecho de manifestación.

Se expresa que el desarrollo de una manifestación o de una reunión “bajo ninguna circunstancia, puede alterar el orden público ni violar derechos de personas ajenas a tales actos. Esto es particularmente importante en el ejercicio de estos derechos, pues tanto la manifestación, como una reunión pública (realizada en lugares

¹³⁰ *Ibid.*, Pág. 440.

públicos), por llevarse a cabo en espacios de uso común, pueden afectar el orden de éstos, obstaculizar la locomoción de terceros, impedir la práctica de otras actividades en los mismos espacios o, inclusive, causar confrontación entre manifestantes y otras personas o grupos.”¹³¹

“En ese sentido, el autor mexicano Enrique Sánchez Bringas asegura que las manifestaciones y los plantones en la vía pública carecen de licitud y pueden ser disueltos por la autoridad, cuando su desarrollo impida el libre tránsito de vehículos o de personas o bien, no resulten pacíficas porque generan amenazas o agresiones. Tal postura es correcta porque la garantía y protección que la Constitución confiere a estos derechos opera solo cuando su ejercicio cumple con las dos condiciones citadas.”¹³² Sin embargo, las manifestaciones que se realizan en la vía pública, constituyen a su vez una serie de amenazas y vulneraciones a diversos derechos que se pueden expresar en diferentes formas y medios.

3.5.1 Bloqueos.

El bloqueo “es un medio de hostilización propio de la guerra marítima. Se trata de una medida por la cual un beligerante prohíbe toda comunicación entre la alta mar y el litoral enemigo, bajo sanción de detener y capturar a los barcos que la contravengan.”¹³³ Sin embargo para los fines de la investigación se entenderá por bloqueo o bloquear al acto de “Interceptar, obstruir o cerrar el paso”¹³⁴

Por ende, la práctica de los bloqueos de los diferentes tramos carreteros y vías del país constituyen una manifestación con ilicitud en sus fines, y al mismo tiempo como la propia definición de bloqueo refiere es una medida que prohíbe o impide la comunicación en este caso de los habitantes de un país o de los diferentes sectores económicos y sociales para el normal y correcto desempeño de sus actividades. En

¹³¹ *Loc. Cit.*

¹³² *Loc. Cit.*

¹³³ Bloqueo. Diccionario Jurídico Espasa. Madrid, España. Editorial Espasa Calpe, S.A. Año 1998. Pág. 117.

¹³⁴ Real Academia Española. Real Academia Española. Bloquear. España 2017. <http://dle.rae.es/?id=5hVbaEt> . 24 de octubre de 2017.

tal virtud que los bloqueos se pueden considerar como las principales barreras y limitaciones establecidas con respecto a la libertad de locomoción, la cual está establecida en el artículo 26 de la CPRG y reza que “Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.”

Al respecto la Gaceta 94. Expediente 3601-2008 de fecha de sentencia nueve de diciembre del año 2012 expresa que “(...) no se puede limitar la libertad de locomoción, y, en el caso preciso, la libertad de tránsito de las personas, por disposiciones que no provengan legítimamente de una autoridad fundada en ley.”¹³⁵ Por lo tanto, los bloqueos constituyen una forma de manifestación que contrarían la libertad de locomoción y libertad de tránsito de las personas en el territorio nacional, pues estas limitaciones no provienen de una autoridad fundada en ley.

3.5.2 Intimidación Pública.

Pese a que la ley penal no establece lo relativo a la intimidación pública, esto no quiere decir que dicho acto no se presente al momento de realizar alguna manifestación. Por ejemplo, lo que sucede en el caso de la Mina San Rafael, quienes en la actualidad (octubre del año 2017) buscan retomar operaciones y pese a esto, los bloqueos, también acompañados de intimidación pública puesto que quienes realizaron los bloqueos ilegales detuvieron camiones que transportaban diferentes materiales de combustible y construcción, y con palos, bates y diferentes objetos rompieron las ventanas de los automóviles, impidieron que se retomaran las actividades.

Para definir lo que es la intimidación pública, vale la pena mencionar que dentro de la legislación argentina, sí se encuentra regulada y consiste en “infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma,

¹³⁵ Corte de Constitucionalidad. Constitución Política de la República de Guatemala con Notas de Jurisprudencia. Guatemala. Editorial Ediciones Especializadas. Año 2014. Pág. 75

amenazare con la comisión de un delito de peligro común o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.”¹³⁶

3.5.3 Sedición.

La sedición se define “por el alzamiento público y tumultuario para conseguir por la fuerza o fuera de las vías legales alguno de sus fines, por otro lado continúa expresando el diccionario que el alzamiento público es un término empleado también en el delito de rebelión, el cual supone un levantamiento colectivo, sin embargo, la diferencia reside en la prosecución de los objetivos que animan a los sujetos activos, que no pretenden la derogación de la Constitución, la Sustitución del gobierno, destitución del jefe de Estado, sin reparación de una parte del territorio nacional.”¹³⁷

En otra definición, brindada por Manuel Osorio acerca de la sedición, el autor expresa que es “el acto por medio del cual surge un alzamiento de un grupo determinado y de manera violenta en contra de la autoridad, el orden público o el régimen militar de un Estado.”¹³⁸

Si se revisan las causas para las cuales se utiliza esta figura, se puede justificar el hecho de que este surja de una manifestación, pues en la historia de Guatemala han existido gobiernos de facto y gobiernos autoritarios a los cuales sólo se ha podido derrocar a través del empleo de ésta herramienta, sin embargo, esto no significa que sea la vía idónea para resolver cualquier tipo de conflictos que surjan con motivo del desacuerdo que se tenga con la autoridad en turno.

Es por ello que el acto antijurídico ha sido contemplado dentro del Código Penal Guatemalteco, que en su artículo 387 establece lo relativo al delito de sedición “Cometen el delito de sedición quienes, sin desconocer la autoridad del Gobierno

¹³⁶ Intimidación Pública. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Argentina. Editorial Heliasta S.R.L. 12ª edición. Pág. 793.

¹³⁷ Sedición. Diccionario Jurídico Espasa. Madrid, España. Editorial Espasa Calpe, S.A. Año 1998. Páginas. 904 y 905.

¹³⁸ Sedición. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires. Editorial Heliasta. Año 2004. Pág. 870.

constituido, se alzaren pública y tumultuariamente para conseguir por fuerza o violencia cualquiera de los objetos siguientes:

- 1º. Disponer a alguno o algunos de los funcionarios o empleados públicos o impedir que tomen posesión de su cargo quinees hayan sido legítimamente nombrados o electos.
- 2º. Impedir, por actos directos, la promulgación o ejecución de las leyes o de resoluciones judiciales o administrativas.
- 3º. Ejercer los actos de odio o venganza a la persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes.
- 4º. Ejercer, con fines políticos o sociales, algún acto de coacción contra los particulares, contra una clase social o contra las pertenencias del Estado o de alguna entidad pública.”

Para ello se refiere a la Ley de Orden Público “la cual en su artículo 28 establece que los detenidos como autores, cómplices o encubridores de los delitos de rebelión, sedición u otros actos contra la seguridad del Estado o el orden público, serán juzgados por los jueces competentes que la ley determine.”¹³⁹

3.5.4 Usurpación.

Otro de los medios que constituyen un abuso al derecho de manifestación es la figura de usurpación, la cual es un “delito consistente en una agresión a la propiedad inmueble por vía de una desposesión.”¹⁴⁰ Por otro lado Guillermo Cabanellas lo define como la “apropiación indebida de lo ajeno; especialmente de lo inmaterial, y más con violencia. La cosa usurpada. Apoderamiento, con violencia o intimidación, de un inmueble ajeno o de un derecho real de otro. El inmueble usurpado. Cualquier

¹³⁹ Figueroa Sarti, Raúl. Código Penal Concordado y Anotado con Exposición de motivos y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Octava Edición. Guatemala. F&G Editores. 2013. Pág. 341.

¹⁴⁰ Usurpación. Diccionario Jurídico Espasa. Madrid, España. Editorial Espasa Calpe, S.A. Año 1998. Pág. 992.

ejercicio ilegal o injusto de un derecho, con desdén para su titular o con despojo del mismo.”¹⁴¹

Este acto delictivo constituye una amenaza no sólo para los bienes del Estado sino también para los bienes de las personas en general, ya que se realiza cuando dentro de las manifestaciones se usurpa o se apodera con violencia o intimidación de los mismos, por lo tanto además de abusar del derecho de manifestación se está incumpliendo con una de las condiciones impuestas para el ejercicio de este y es el hecho de que no debe mediar violencia, es decir la manifestación debe realizarse de forma pacífica y al mismo tiempo no debe violar los derechos de personas ajenas.

3.5.5 Linchamiento.

Al respecto del acto de linchar, el diccionario de la Real Academia Española lo define como “ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospecho o un reo.”¹⁴² Al respecto se puede expresar que las manifestaciones, por su naturaleza de protestar respecto a la decisión de una institución de la administración pública, puede incurrir en este medio como abuso al referido derecho. En Guatemala esta práctica se ve reflejada cada vez más en diferentes sectores de la sociedad, debido a que no se está conforme con las decisiones tomadas por las autoridades encargadas de administrar justicia por lo cual tratan de tomar la justicia por su propia mano y recurren al linchamiento como una manifestación de inconformidad.

3.6 Limitaciones al derecho de manifestación.

Al respecto se puede argumentar que, por tratarse de un derecho humano, este no puede ser limitado en su ejercicio por parte de los Estados debido a que el titular del derecho lo posee por su sola calidad humana. Sin embargo, esto no significa que los estados no lo puedan regular en virtud de tratar de resguardar los demás derechos

¹⁴¹ Usurpación. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva Edición Actualizada Corregida y Aumentada. Editorial Heliasta S.R.L. Undécima Edición, 1993. Pág. 322.

¹⁴² Real Academia Española. Real Academia Española. Linchar. España 2017.
<http://dle.rae.es/?id=NMHYTCC> . 24 de octubre de 2017.

humanos consagrados Constitucionalmente, así como en convenios y tratados internacionales sobre derechos humanos.

Para el efecto de regular el derecho de manifestación, se ha expuesto a lo largo de la investigación, que este derecho no puede ser coartado, disminuido o coartado, siempre y cuando cumpla con las condiciones esenciales para ejercitarlo como lo son: la agrupación de las personas de forma pacífica, su duración transitoria, la licitud de su finalidad y el lugar en donde se celebrara, aunque este último sea controversial en cuanto a que las manifestaciones que se realicen en la vía pública carecen de licitud y por tanto las autoridades pueden intervenir para disolverla. Por otro lado, otro de los motivos por los cuales podría limitarse o más bien regularse el ejercicio del derecho manifestación es el caso que refiere la CPRG en su artículo 33 cuando dice que el único objeto por el cual se regula es para garantizar el orden público.

Lo anterior nos remite a los supuestos que enumera la Ley de Orden Público respecto a las “cuatro limitaciones a los derechos de reunión y manifestación. Las cuales operan cuando el presidente de la República, en Consejo de Ministros, mediante la emisión del decreto correspondiente, declara una de las situaciones como el Estado de Prevención, Estado de Alarma, Estado de Calamidad Pública y el Estado de sitio como una medida para su manejo y control.”¹⁴³

Vale la pena mencionar que pese a que en Guatemala no existe una ley reguladora en materia de reuniones y manifestaciones, la legislación se ha tomado el tiempo para tipificar la reuniones y manifestaciones ilícitas, las cuales aparecen en el artículo 397 del Código Penal de Guatemala en donde se establece que “quienes organizaren o promovieren cualquier reunión o manifestación pública con infracción de las disposiciones que regulan ese derecho o participaren en ellas, serán sancionados con prisión de seis meses a dos años”.

¹⁴³ Instituto de Justicia Constitucional. *Op. Cit.* Páginas. 442 y 443.

De lo anterior se puede concluir que existen ciertos parámetros, limitaciones o prohibiciones a observar por parte de las autoridades cuando la población ejerza su derecho de reunión y manifestación. Es por ello que el decreto del Congreso de la República 41-95, es puntual al establecer en su artículo 1 que “En toda manifestación pública que se realice dentro del perímetro de las ciudades, cabeceras departamentales o municipales, no podrán participar personas con el rostro cubierto o que de cualquier otra manera, en forma manifiesta o intencionada, oculte su identidad, que permita la comisión de actos o hechos tipificados como delito o falta. Queda prohibido el uso de “capuchas”, máscaras o elementos que de cualquier forma manifiesta o intencionada tiendan a ocultar la identidad de las personas en lugares públicos, como participantes en manifestaciones públicas o cualquier otra actividad en forma individual o colectiva.”¹⁴⁴

¹⁴⁴ Figueroa Sarti, Raul. *Op. Cit.*, Pág. 349.

CAPÍTULO IV.

ANÁLISIS DE LOS ABUSOS AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN Y SUS IMPLICACIONES JURÍDICAS.

En la actualidad se puede mencionar que el derecho de reunión y manifestación, reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en el artículo treinta y tres constituye una serie de abusos que no sólo afectan o colisionan con derechos reconocidos dentro del mismo texto Constitucional y tratados y convenios en materia de derechos humanos, sino también, representan amenazas para diferentes sectores de la sociedad lo cual a su vez genera implicaciones jurídicas de diversa naturaleza, por lo cual se puede expresar que se ha perdido el verdadero sentido para el cual fueron reconocidos estos derechos en primer lugar.

Previo a discutir propiamente las implicaciones jurídicas que se derivan del abuso al derecho Constitucional de reunión y manifestación, es bueno realizar una retrospectiva en lo que la Asamblea Nacional Constituyente ambicionó al darle continuidad al reconocimiento del derecho de reunión colocándolo en el mismo artículo que el derecho de manifestación. Resulta abundante pero no innecesario mencionar que se puede decir que el derecho de reunión es una prerrogativa o una facultad que no altera el orden público por su naturaleza de realización o desarrollo privado, mientras que, por otro lado, la manifestación y su uso excesivo sí puede generar colisión de derechos debido a su naturaleza, desarrollo y ejercicio no sólo colectivo, sino que también en las vías públicas.

En tal virtud, en la entrevista realizada en exclusiva para esta investigación al miembro de la asamblea nacional constituyente de 1985, Camilo Rodas Ayala, se brindan algunos datos importantes y que pesan mucho al momento de analizar el deber ser y las aspiraciones que tenían los constituyentes con el reconocimiento del derecho de reunión y manifestación, pues él expresa que años antes de la creación

de la Constitución que se tiene vigente, al encontrarse aún en una época tensa y sobre todo de mucha represión por el conflicto armado interno que persistía, existían grupos denominados comisionados militares, así como un grupo llamado confidentiales del ejército creados por estos últimos y colocados en las diferentes aldeas o comunidades a las cuales pertenecían. La actividad que estos realizaban era escuchar a las personas y si en algún momento estos externaban una opinión contraria a los intereses del ejército o el Estado, inmediatamente daban aviso a las autoridades correspondientes del ejército el cual procedía a investigar a la persona que había emitido su opinión, y podían llegar a tomar medidas más inhumanas como capturarlo, someterlo a torturas y hasta desaparecerlo.

“Así se hizo con muchos amigos míos, que eran maestros, abogados, estudiantes que fueron capturados sencillamente por lo que se llamaba en esa época un lenguazo”¹⁴⁵. Esto se daba pues uno de los confidentiales del ejército, acudía a estos para prevenirles de personas que estaban generando opiniones respecto al Estado o el ejército. “Entonces yo tengo amigos que nunca estuvieron involucrados en la guerrilla, nunca fueron combatientes, sino solamente habladores, respecto a la revolución, el marxismo, leninismo y principalmente cuando estaban bajo el efecto de alcohol, o en alguna reunión de estudiantes universitarios se soltaban a hablar, vociferar sin tomar en consideración que dentro de los mismos compañeros había informantes del ejército o como coloquialmente se les denominaba, orejas”¹⁴⁶.

“Cuando finalizó el conflicto armado, dentro del gremio al cual pertenezco el cual es el magisterio, nos dimos cuenta de que muchos de nuestros amigos eran confidentiales del ejército, pero que nunca lo supimos hasta ese momento, excepto en algunos casos en los cuales sí averiguamos, por lo cual a veces nos comunicábamos o nos hacíamos una señal tocándonos la oreja para que quien lo viera supiera que quien estaba a su par o platicando era un informante u oreja. Aparte de esos grupos, existía la policía nacional, y la policía judicial que ahora ya no

¹⁴⁵ Rodas Ayala Camilo. Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985. En entrevista exclusiva para esta investigación.

¹⁴⁶ *Loc. Cit.*

existe, la cual tenía ciertos grupos que eran verdaderamente sanguinarios. Fueron famosos los de una panel blanca, a quienes se les conocía pues sí a usted lo estaban buscando casi podía darse por muerto, y las torturas a las que sometían a las personas a quienes capturaban eran verdaderamente duras, por ejemplo la capucha de plástico con gamexane¹⁴⁷, introducirlos de cabeza en las pilas, darles descargas eléctricas, y fueron refinando una serie de torturas para obtener información¹⁴⁸.

“Además de estos grupos también existía lo que se llamaba la guardia de hacienda, la cual se vestía de color verde y sus integrantes se dedicaban principalmente a identificar en dónde elaboraban bebidas clandestinas o dónde había contrabando, pero además de esas funciones, una de las principales era detectar dónde había focos subversivos, es decir grupos o personas que opinaran a favor de ciertas ideas que no le convenían al gobierno. Estos confidentiales del ejercito podían llegar a ser hasta las empleadas domésticas, pues algunos integrantes del ejercito las enamoraban para que fuese a ellos a quienes les informaran, podía ser también el lustrador que al lustrar sus zapatos en el parque le preguntaba ¿cómo ve la situación?, con el único fin de obtener información. Así mismo el peluquero, no todos, pero sí varios, que al cortarle el cabello se metían al tema político para ver cuál era su opinión. En ese entonces se cometieron varias tropelías y situaciones injustas, pues se capturaron y desaparecieron a personas que nada tenían que ver con cuestiones en contra del gobierno o del ejército”¹⁴⁹.

“También se crearon, en la época del general Ríos Montt, las patrullas de autodefensa civil, las cuales estaban integradas por habitantes de cada comunidad, de cada pueblo, y su permanencia a ellas no era voluntaria sino obligatoria, pues si a usted le decían que tenía que patrullar y no lo hacía lo consideraban como

¹⁴⁷ Gamexane: su nombre químico es lindano, el cual es de actividad insecticida prohibido en todas sus formulaciones por ser dañino para la salud humana y el ambiente, produciendo en las personas: erupción cutánea, síntomas de toxicidad CNS, convulsiones, mareos, torpeza, o pérdida del equilibrio, taquicardia, calambres musculares, nerviosismos, inquietud o irritabilidad.

¹⁴⁸ *Loc. Cit.*

¹⁴⁹ *Loc. Cit.*

subversivo. Ante esa situación, a quienes se les notificaba que pertenecían a las patrullas de autodefensa civil, por propia seguridad salían a patrullar para que no se les considerara parte de los cuerpos subversivos, y la patrulla consistía en que se reunían los que pertenecían a sectores cercanos, no iban armados, sino que algunos llevaban linternas, palos y unos pocos machetes y cuchillos y lo que brindaban era una especie de seguridad al sector donde habitaban, esto se hizo a nivel nacional. Esto se lo cuento pues ese era el ambiente que se respiraba y percibía en el momento en que la Constitución se estaba elaborando, es decir, participar políticamente era un riesgo para los miembros de cualquier ideología política, llámese derecha, centro o izquierda. Era un ambiente en el cual usted no podía alzar su voz en protesta, las garantías constantemente eran restringidas por los famosos golpes de Estado, pues durante una buena cantidad de años estaba un presidente, lo quitaban, le daban golpe de Estado, aparecía un nuevo presidente y hubo un momento en el cual el ejército comenzó a decidir quiénes iban a ser los gobernantes de Guatemala”¹⁵⁰.

Estos datos son muy valiosos para analizar por qué los derechos de reunión y manifestación fueron contemplados dentro del mismo artículo, y es congruente que se haya especificado que los mismos deben ejercitarse de forma pacífica y sin armas, esto debido a que previo y durante la creación de la Constitución vigente se vivieron momentos de mucha represión en los cuales la población bajo ninguna garantía o herramienta legal podían expresar su descontento o inconformidad contra las decisiones o el rumbo que estaba tomando el país a través de la dirección del Estado y sus autoridades. “Una de las ideas que casi todos llevábamos, era que había que devolverle a la población sus derechos y crear mecanismos que le permitieran pelear por esos derechos. Que, si antes se les había vedado por temor, por presión, porque no existía Constitución, se le había negado a la población esos derechos, como por ejemplo el derecho de manifestación, que prácticamente durante toda esa época no hubo una manifestación, porque esas manifestaciones eran inmediatamente reprimidas, buscados los líderes, y ya sabía el líder lo que le iba a

¹⁵⁰ *Loc. Cit.*

pasar. Por su parte las reuniones que se podían llevar a cabo en alguna casa también estaban demasiado controladas”¹⁵¹.

Fue por en ese contexto económico, político y social, que los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1985 reconocieron que el Estado de Guatemala “se organiza para proteger a la persona y a la familia; y su fin supremo es la realización del bien común”, así mismo que “es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”, tal y como rezan los artículos 1 y 2 de la Constitución. “Muchos han catalogado a la Constitución vigente como una constitución antropocéntrica, qué quiere esto decir, es una Constitución que gira alrededor del ser humano, es al ser humano al que más se le cuida, al que más se le protege y a quien más garantías se le da. Al ser humano en lo individual y también en lo colectivo”¹⁵².

Además de lo anteriormente descrito, el miembro de la asamblea nacional constituyente se refirió o más bien definió la parte dogmática de la Constitución como “las aspiraciones, los deseos, aquello que uno quisiera que se diera para que la población o el país esté bien. Dentro de esa parte dogmática, aparte de otras protecciones que se dieron, se habló de la necesidad de que la población pudiera manifestar su conformidad o su inconformidad, porque la manifestación pública sirve para las dos cosas, para vitorear o para señalar y criticar, entonces se creó ese artículo específicamente para decirle a la población que a partir de la entrada en vigencia de la Constitución ustedes van a poner reunirse pacíficamente sin armas y van a poder manifestarse, pero la Constitución de nosotros no es una Constitución desarrollada, pues las constituciones desarrolladas tienen el artículo e inmediatamente después desarrollan dentro del mismo la ley, mientras que la Constitución nuestra, señala el artículo constitucional pero deja que por ejemplo el

¹⁵¹ *Loc. Cit.*

¹⁵² *Loc. Cit.*

Organismo Legislativo desarrolle una ley específica para regular lo que en la Constitución se dice”.

4.1 Abusos al Derecho Constitucional de reunión y manifestación.

Para comprender los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación, además de conocer el contexto económico, político y social en el cual fueron reconocidos estos derechos para la población guatemalteca, es necesaria la observancia de que su ejercicio en determinado momento constituye violaciones a otros derechos consagrados dentro del mismo texto Constitucional, así como otros derechos reconocidos por tratados y convenios en materia de derechos humanos, por lo tanto a través del uso de los instrumentos de investigación, en este caso entrevistas, se trató de responder a esta interrogante de forma objetiva, recabando datos y opiniones de sectores considerados de forma colectiva y no de forma individual ya que no se tendría una visión global de la problemática planteada, ni de cómo estos abusos afectan a los diversos sectores sociales.

“Nuestra población se fue acostumbrando poco a poco a usar el derecho de manifestación, utilizando cada vez más recursos y procedimientos que entorpecieran la labor del gobierno, sin darse cuenta que a quienes les causan daño no es al gobierno en sí, sino a la misma población, y así tenemos que lo que antes se daba de que se reunía un grupo en el parque y manifestaba, poco a poco fue descubriendo que se podía usar las calles, después las carreteras, y después tomar las carreteras, bloquear ciertos puntos de la red vial para detener el transporte y esto ha hecho que el derecho de manifestación se salga prácticamente de control. En este momento diez personas que quieran taponar un tramo carretero lo pueden hacer, y nadie les dice nada y nadie los toca, a pesar de que están cometiendo delitos, porque ese derecho de manifestación como se está ejercitando actualmente en Guatemala, entra en colisión con otros derechos humanos que también están contemplados en la Constitución. Por ejemplo, la libertad de locomoción siendo el más afectado, yo tengo el derecho de movilizarme dentro de mi país, sin más limitaciones que las que la ley me imponga, en este caso las manifestaciones, los

bloqueos y la toma de las carreteras que se está dando, están infringiendo la ley y lo que tendría que hacer la autoridad es intervenir inmediatamente y que manifiesten, pero sin causarle daño a otras personas.

Esto ha venido a convertirse en un pan nuestro de cada día, porque hay tantos bloqueos y tantas manifestaciones públicas que se hacen colisionando con otros derechos humanos de los guatemaltecos, que prácticamente son incontables, ahora por cualquier cosa se manifiesta, que por una carretera en mal estado, que porque no hay agua potable, que porque se pide un aumento salarial, incluso se ha llegado al extremo de hacerlo para que no llegue la autoridad a investigar actividades ilícitas como el contrabando, como por ejemplo en San Marcos y Huehuetenango, no han dejado ingresar a la autoridad, han quemado patrullas porque han querido llegar a inspeccionar cómo está la situación de que están ingresando productos de primera necesidad, cigarros, licor que ingresan por diferentes puntos ciegos que existen en nuestras fronteras o a veces por la frontera misma recurriendo al pago ilegal lo cual constituye corrupción. Entonces el derecho de manifestación se puso de tal manera que no se restringiera y que no hubiera muchos requisitos que llenar para que fuera una acción que la población utilizará en reclamo de sus derechos, pero el problema es que la población se comenzó a extralimitar y la autoridad que es la encargada de poner y aplicar las normas no actúa, por temor al desgaste político, por temor a que en un momento dado al ingresar la fuerza pública y desalojar a los manifestantes se produzca un enfrentamiento, de ese enfrentamiento aparezcan lesionados o muertos y se transforma a esas personas en mártires y a esos mártires los convierten en banderas para fortalecer la lucha”¹⁵³

En ese orden de ideas, se podría decir que la características que reúnen los derechos humanos de que son universales, interdependientes, individuales, imprescriptibles inalienables, irrenunciables, no discriminatorios y que además de esto no pueden ser coartados, restringidos ni disminuidos de ninguna forma legal ni están sujetos al reconocimiento de ningún Estado sino por el contrario deben ser

¹⁵³ *Loc. Cit.*

protegidos por los mismos, a veces esto juega en contra de la prevalencia del orden público e institucional de un Estado, no porque el derecho en sí mismo constituya un mal, sino que la no regulación del mismo ni la institución de líneas directrices para el ejercicio del derecho hace que se pueda interpretar de forma errónea, tergiversar y consecuentemente abusar del derecho.

Desde el sector productivo o industrial se tiene la siguiente opinión, y es que: “el abuso es que las personas se amparan bajo lo que es la Constitución, para poder manifestarse, pero consideramos que este derecho es para otro tipo de intereses, como por ejemplo para el bien común y no sólo para un sector, pues nos hemos dado cuenta que un mismo sector es el que hace las convocatorias, es el que tapa las carreteras para que se pueda desarrollar el bloqueo y que no permita el tránsito de los transportes que traen las materias primas de los productos que es el sector al cual pertenecemos. El abuso es considerable pues ahora ya no es sólo un momento, sino son días y eso lógicamente va afectando lo que es la productividad de un país”¹⁵⁴.

La productividad de un país es probablemente uno de los puntos más importantes, pues un país sin una economía sólida y medios que la generen no puede subsistir ni es competitivo a todos los niveles, por lo cual otra de las opiniones que se tiene, esta vez proveniente del sector económico respecto a cuáles son los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación es: “Uno de los primeros y creo es el más importante, es que aprovechándose de esa libertad que nos da la constitución de manifestarnos, se aprovechan los grupos para bloquear la libre locomoción del individuo en nuestro país. Es un derecho que también le asiste a cada ciudadano, pues está contemplado en la Constitución de la República, pero lamentablemente por intereses, no sólo personales sino de grupo, y viéndolo desde el punto de vista contextual, político, la gente se está aprovechando del derecho con la intención de hacerle daño definitivamente al país. Porque con los bloqueos no sólo nos vemos

¹⁵⁴ Rojas Otto René. Presidente de la Cámara de la Industria sector Occidente. En entrevista exclusiva para esta investigación.

afectados el sector comercial e industrial sino la ciudadanía en general, pues hay objetivos muy definidos de por medio y esta gente lamentablemente se ampara en el derecho de manifestación, que no tiene nada que ver con el agresivo y abusivo supuesto derecho de ellos de bloquear las carreteras. De tal manera que es un derecho expresar y manifestar lo que consideremos que no está correcto de parte del sector político, del liderazgo del país, pero no parando la libre locomoción de cada uno de los guatemaltecos”¹⁵⁵.

Una de las caras de la moneda que se tiene al momento de realizar la manifestación es la que proviene de la sociedad, ya que es la población de un país la que se reúne para realizar una manifestación pública expresando su inconformidad con ciertas decisiones de la administración pública. Por lo que es importante tener noción de lo que miembros de este sector que poseen representatividad gracias a que se encuentran sindicalizados, tal y como lo es el magisterio, quienes opinan al respecto de cuáles son los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación. Por una parte, se expresa que: “En primer lugar, considero que, en el ámbito de los maestros, los dirigentes del sindicato de la educación muchas veces tienden a utilizar a los maestros para beneficiarse ellos y sus intereses, simplemente crean o generan problemáticas que en realidad no existen, con el interés de que uno apoye las diferentes situaciones que ellos quieren alcanzar, y no están velando en verdad por los derechos de todos sino sólo por los propios. Por ejemplo, plantean diez cuestiones que van en beneficio de la educación, pero implícitas van cinco que todos desconocen y es allí donde se aprovechan de este tipo de medios”¹⁵⁶.

De la opinión anterior se puede colegir que uno de los abusos en los cuales se incurre al momento de convocar a una manifestación, es la manipulación hasta cierto punto de quienes la van a realizar por parte de sus dirigentes, pues no se les informa en su totalidad del tema o petición sobre el cual va a versar la misma y quienes

¹⁵⁵ García Herrera Jorge. Miembro de la Cámara de Comercio filial de Quetzaltenango. En entrevista exclusiva para esta investigación.

¹⁵⁶ Morales López Andrea María. Miembro del magisterio. En entrevista exclusiva para esta investigación.

asisten a la manifestación tampoco se toman el tiempo de investigar o indagar los puntos a discutir. Esta práctica en determinado momento no sólo afecta a la población en general por constituir una violación a otros derechos reconocidos dentro de la Constitución y tratados y convenios en materia de derechos humanos, sino que a su vez favorece el alcance de intereses particulares que se encuentran implícitos dentro de las peticiones o reclamaciones que se realizan dentro de una manifestación si es que la autoridad sede ante las mismas.

Es menester reconocer que el ejercicio del derecho que más repercute a la productividad y al desarrollo de otros derechos dentro del territorio nacional, es el de manifestación. Al respecto, otro de los miembros del magisterio expresa que: “Son cosas distintas la reunión y la manifestación. La reunión no es más que la agrupación de personas que puede ser en un determinado lugar o en movimiento como se ha podido observar en las calles en algún momento. Este derecho es Constitucional, establecido como tal, en el cual se reúnen otros derechos como el de la libertad de expresión. En este tipo de derechos en los cuales lo que se pretende es manifestar inconformidades hacia con las autoridades, pero que a veces no logran alcanzar los objetivos de forma pacífica por lo cual se requiere que la gente se aboque a las calles para poder manifestar. En ese sentido se podría argumentar que nos encontramos ante un choque de derechos puesto que el Estado al no escuchar a la sociedad y a la población, viola el derecho a atender las necesidades del pueblo por lo que hay que recurrir a otro derecho garantizado en la Constitución para poder hacerse escuchar. Todo ello conlleva a que se pueda contravenir a otro derecho como lo es la libertad de locomoción, entonces hasta donde tengo conocimiento el magisterio no ha realizado una manifestación por motivos que no sean necesarios, pues hay que entender el abuso como el uso excesivo de un determinado derecho, ya que mientras que el Gobierno no escucha las necesidades de la población o en caso específico del magisterio, estos se manifiestan en las calles para poder hacerse escuchar”¹⁵⁷.

¹⁵⁷ Paz Taracena Selvin. Miembro del magisterio. En entrevista exclusiva para esta investigación.

La opinión citada con anterioridad es muy congruente con el hecho de que, dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, se tiene contemplado en el artículo 28, el derecho de petición, el cual representa que “los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas conforme a la ley”. Dicho esto, se puede considerar la manifestación como un medio extremo ante la inobservancia por parte de la autoridad competente de las necesidades o peticiones que ha dirigido la ciudadanía y que en determinado momento han sido tramitadas por la vía idónea sin obtener respuesta alguna, lo cual genera inconformidad que a su vez incita a las manifestaciones en la vía pública para poder pronunciarse respecto a puntos específicos.

La otra cara de la moneda que posee el abuso en el ejercicio del derecho de reunión y manifestación, es la proveniente de la administración pública, la cual tiene una concepción clara de cuáles son los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación, por lo cual se expresa que : “Los principales abusos que se han dado a lo largo de la historia con el abuso al derecho Constitucional de reunión y manifestación es que su regulación es demasiado general dentro del ámbito Constitucional, iniciando con que dice que toda persona tiene este derecho, pero hemos de considerar que a raíz del análisis de los derechos constitucionales que el límite de aplicación de un derecho siempre es el inicio de otro derecho. Si esto se da en todo ámbito a nivel legal, no escapa de este mismo lineamiento el ámbito constitucional, toda vez de que yo tengo tanto derecho a manifestarme y a reunirme para decretar mis inconformidades como derecho tienen las demás personas a la libre circulación y locomoción dentro del territorio del país sin más requerimiento que lo que dicta la ley. Además, no se ha explicado ni se ha contextualizado, que para el ejercicio de un derecho Constitucional no se puede dejar de lado el ejercicio del respeto de otro derecho Constitucional. Cómo sería esta circunstancia entonces, que conlleva a largo plazo, que las personas no podamos o no tengamos un conocimiento real de nuestra Constitución o una ciudadanía real en cuanto a ello,

sino que simplemente es la aplicación de un derecho o de un artículo cuando este me conviene, pero no ver la Constitución como un todo armónico”¹⁵⁸.

En virtud de las opiniones expresadas con anterioridad respecto a la pregunta de ¿cuáles se considera que son los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación?, se puede argumentar que en primera instancia es el desconocimiento o la tergiversación del artículo Constitucional que faculta a todos los ciudadanos guatemaltecos a participar de una manifestación, sin embargo, al hacerlo muchas veces se desconoce los motivos que incitaron a la misma, o las intenciones ocultas que tienen los dirigentes de ciertos grupos que se encuentran sindicalizados y que por tanto gozan de una representatividad y liderazgo, que al mismo tiempo no están velando por los intereses comunes sino más bien por intereses particulares ocultos dentro de los movimientos. En segunda instancia los abusos que se generan en cuanto a la práctica del derecho de reunión y manifestación, es que se le da más importancia a un derecho que a otro, sin recordar que en materia de derechos humanos, ningún derecho es mayor que otro, ni existen jerarquías entre estos, pues debe haber una armonía y reconocimiento que de ejercer de forma abusiva y excesiva alguno de ellos, se estará violentando el resto de derechos de los cuales goza una persona por el simple hecho de su calidad como seres humanos.

4.2 Causas que originan los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación.

Son diversos los puntos de vista sobre las causas que originan los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación, sin embargo, se observará que al final de la exposición de las diferentes opiniones versadas acerca del tema, existe un denominador común que afecta esta situación. Se ha expresado que: “Existe una serie de grupos en Guatemala, que al terminar el conflicto armado interno se comenzaron a crear algunas como organizaciones no gubernamentales, otras como fundaciones y comenzaron a recibir apoyo económico de otros países, pero esos

¹⁵⁸ Reyna López Gustavo Alberto. Asesor jurídico del gobernador departamental de Quetzaltenango. En entrevista exclusiva para esta investigación.

países nunca han venido a investigar cuál es la situación real de lo que estos grupos hacen, piden o por lo que estos grupos luchan. Pero estos grupos tienen por decirlo de alguna manera, la obligación de ir demostrando a los países donantes que sí están haciendo algo, y para ello hacen caminatas, tomas de carretera, manifestaciones no en plazas públicas sino que normalmente lo hacen obstaculizando el tráfico y se escudan en algunos argumentos sencillos como por ejemplo que tienen el derecho de transitar libremente, y lo hacen por las calles de Guatemala, lo único es que van cientos o miles y van ocupando no solo las aceras sino también las vías en donde transitan los demás vehículos, pero van caminando por lo que supuestamente están haciendo uso legítimo de su derecho de locomoción”¹⁵⁹.

Por otro lado, para los sectores económicos como lo son la industria y el comercio: “Muchas veces hay personas que buscan intereses personales, porque como es lógico han visto que las manifestaciones son una forma de poder agenciarse de muchos fondos y los países que supuestamente son amigos, están apoyando a estos grupos económicamente por lo cual estos grupos de manifestantes consideran que pueden aprovechar todo ese caudal económico para hacer el mal a un país. Creo que esas personas tienen que ser conscientes de que el derecho a manifestarse debe aplicarse únicamente cuando sea verdaderamente necesario pues esto afecta a todo un país”¹⁶⁰.

“En este momento, abiertamente las causas son políticas. La coyuntura político social que vive el país ha generado la reacción de esos grupos, que son reaccionarios y que en algún momento tienen razón de manifestarse por ejemplo en corrupción que es un modus vivendi de la clase política de nuestro país. Pero una de las razones, es que hay detrás de estos grupos intereses políticos extranjeros, que

¹⁵⁹ Rodas Ayala Camilo. Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985. En entrevista exclusiva para esta investigación.

¹⁶⁰ Rojas Otto René. Presidente de la Cámara de la Industria área de Occidente. En entrevista exclusiva para esta investigación.

quieren invadir nuestro país e imponer su ideología y doctrina la cual no ha podido lograr situarse en nuestro país a través de las urnas”¹⁶¹.

Por su parte, el sector social con representatividad, el magisterio, opina: “Afortunadamente manifestar no es algo que sea obligatorio, ya que los que participen están allí por su propia voluntad, sin embargo, sí es una forma de coaccionar de alguna forma la participación, o se condiciona el hecho de asistir o no a una manifestación, y muchas veces se asiste sin conocer en realidad lo que se está apoyando”¹⁶². A su vez otro de los representantes del magisterio expresa que: “Se abusa del derecho de reunión y manifestación cuando se tiene contemplado un interés diferente al cual se está pretendiendo establecer. Por ejemplo, si se está exigiendo más recursos económicos para dar refacciones o útiles escolares en las escuelas, si se mantiene ese objetivo primario pero existe un trasfondo, un objetivo como por ejemplo político, allí es donde podría establecerse que existe un tipo de extralimitación”¹⁶³.

Finalmente se llega al punto de vista de la administración pública respecto de cuáles pueden ser las causas que originan que se abuse del derecho Constitucional de reunión y manifestación: “Las causas pueden ir enfocadas a intereses particulares, es decir, tenemos el ejemplo histórico de que normalmente los cambios se gestan a raíz del movimiento de las clases medias y el alboroto de las clases bajas, entonces lo mismo sucede siempre lo cual es un mecanismo de aprovechamiento. Ejemplo: esta semana tuvimos manifestaciones del Comité de Desarrollo Campesino – CODECA -, pero en realidad qué estaba buscando la gente que estaba allí, las implicaciones reales es que quienes ostentan realmente el poder tienen otras intenciones que lo que realmente la gente está manifestando. Por lo tanto, dentro del abuso que se da a este derecho, es que no se limita a que realmente se tenga una identidad, un norte claro de lo que se pide. Simplemente pedimos por pedir, y a

¹⁶¹ García Herrera Jorge. Miembro de la Cámara de Comercio filial de Quetzaltenango. En entrevista exclusiva para esta investigación.

¹⁶² Morales López Andrea María. Miembro del magisterio. En entrevista exclusiva para esta investigación.

¹⁶³ Paz Taracena Selvin. Miembro del magisterio. En entrevista exclusiva para esta investigación.

veces son cuestiones que son irrelevantes. Este año ha sido sumamente interesante para este tema, pues tenemos el ejemplo también de los diputados, cuando querían que renunciaran cierto número de diputados, y está bien, supongamos que se acepta esa petición y entonces qué cambia, el sistema es el mismo, suben los que están en una segunda casilla, el curul es el mismo, la forma de aplicación es la misma, las potestades son las mismas, es más, están violentando más los que están pidiendo que los diputados sean destituidos porque ellos gozan de la garantía de la representatividad, de poder ellos legislar libremente, contrario sensu, ellos van a legislar apegados a los requisitos de un sector, pierde el ejercicio de la representatividad y se violentan artículos como el 140 y 141 de la Constitución, entonces es allí donde veo que el ejercicio al derecho Constitucional a manifestación y libre reunión se ve afectado por intereses particulares de terceros ajenos a lo que realmente quiere una manifestación popular”¹⁶⁴.

En primera instancia, se puede observar que las respuestas de las personas entrevistadas, están orientadas a que las causas que originan los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación son personas pertenecientes a grupos con ideologías muy bien marcadas que reciben apoyo económico internacional para propiciar de cierta manera su desarrollo, sin embargo, los líderes de estos grupos al ver que se agencian de recursos económicos fácilmente, y al no estar sometidos a una supervisión constante de las actividades que realizan, para tratar de eludir o engañar la supervisión de los países colaboradores, realizan marchas, manifestaciones las cuales llevan aunados los bloqueos en sectores específicos del país, todo ello, con el único fin de demostrar que están realizando este tipo de actividades para luchar por sus derechos y de esa manera lograr su inclusión aparente dentro de la sociedad guatemalteca.

Por otro lado, cabe analizar el hecho de que las manifestaciones se realizan en muchos momentos con motivo de una petición, más que con el afán de expresar

¹⁶⁴ Reyna López Gustavo Alberto. Asesor jurídico del gobernador departamental de Quetzaltenango. En entrevista exclusiva para esta investigación.

inconformidad o conformidad respecto a una decisión política de parte del Estado de Guatemala, lo cual constituye muchas veces que se vulnere o se abuse de este derecho pues no es la vía legal, ni mucho menos administrativa para realizar este tipo de situaciones, lo cual a su vez genera inestabilidad dentro del país, lo cual repercute no solo política y socialmente en el país, si no también económicamente, pues se genera incertidumbre respecto a la situación real social que se vive.

4.3 Implicaciones jurídicas que se derivan del abuso al derecho Constitucional de reunión y manifestación.

Está claro que uno de los abusos que representan mayor amenaza al momento de ejercer el derecho y la libertad de manifestar, son los bloqueos, el cual significa interceptar, obstruir u obstaculizar el paso, esto a su vez constituye una serie de implicaciones jurídicas que afectan a los diferentes sectores sociales de Guatemala. En primer lugar, constituye una colisión directa con relación al derecho de libertad de locomoción, establecido dentro del artículo 26 de la Constitución Política de la República de Guatemala -CPRG-, el cual reza que “Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las establecidas por la ley”, y los bloqueos no son limitaciones legales para dicho artículo Constitucional, además, es bueno hacer énfasis en que la característica o la actividad que más se ve afectada con los bloqueos respecto al artículo citado anteriormente, es la de transitar dentro del territorio nacional, lo cual es verdaderamente una violación a un derecho que además es reconocido como humano dentro de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual en su artículo 22 inciso uno establece que: “toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales”.

Basándose en el artículo primero de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual reza en su inciso primero que: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su

jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”, se podría argumentar es el Estado, por la inobservancia, ingobernabilidad y falta de respuesta a las necesidades de la población en general, el principal responsable de que se gesten las violaciones al resto de derechos a través del abuso de las manifestaciones que pese a considerarse legales por la carencia de armas y violencia, no lo son por constituir una amenaza latente al orden público. Sin embargo, el Estado, tal y como lo establece el artículo segundo de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, el cual menciona el deber de los Estados de adoptar disposiciones de derecho interno para garantizar los derechos y libertades vertidos Convencional y Constitucionalmente, pone a disposición de la población las herramientas legales necesarias para hacerse escuchar sin tener que recurrir necesariamente a las manifestaciones, vistas para estos extremos como una medida a emplearse en última instancia.

Para tal efecto, se puede mencionar dentro del ámbito Constitucional, el artículo 26 que se refiere al Derecho de Petición, estableciendo en el mismo que: “Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley”. Lo referido, se encuentra desarrollado de forma más completa en el artículo primero del decreto número 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo, el cual reza al respecto del derecho de petición que: “Las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública, deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento administrativo”, por lo tanto, se presume que el Estado de Guatemala, pone a disposición de la población las medidas, o herramientas legales necesarias para realizar ciertas acciones y expresar hasta cierto punto necesidades, que no necesariamente deben ventilarse a través de una manifestación por el simple hecho de ser concebidas como desatendidas y por ese

hecho alzar la voz de inconformidad, sin antes haber agotado las vías que propician el dialogo y el orden público.

Pero las implicaciones jurídicas que se derivan del abuso al derecho de reunión y manifestación no se limitan a la falta del conocimiento de la ley y de las disposiciones que la misma contempla para escuchar a la población y sus necesidades. Estas implicaciones, en algún momento, se extienden de forma directa o indirecta, a la libertad de industria, comercio y trabajo, reconocidos en el artículo 43 Constitucional, sectores que en algún momento están sometidos simplemente a las limitaciones que la ley establece, pero que de cierta forma se ven afectados por los abusos al derecho de reunión y manifestación. Si se habla del derecho de trabajo, reconocido en el artículo 101 Constitucional, y desarrollado específicamente por el decreto número 1441, Código de Trabajo, este derecho, al haber bloqueos, puede verse afectado en los términos de jornada de trabajo, por imposibilitar al trabajador a llegar puntual a sus actividades laborales lo cual constituiría una falta a una de las obligaciones de los trabajadores establecidas en el artículo 63 del Código de Trabajo, el cual en su literal b) refiere que el trabajador tiene la obligación de: “Ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos”, por lo cual se vería vulnerado el hecho de realizar o ejecutar el trabajo en el tiempo y lugar convenidos por la imposibilidad de hacer los mismos debido a los bloqueos realizados.

Refiriéndose también al derecho de trabajo, pero esta vez en la vía procesal, es bueno recordar que ambas partes procesales durante el desarrollo de el proceso ordinario laboral, pueden excusarse una vez cada una, y esto solamente puede ser por enfermedad, por lo que al ausentarse de alguna manera por la imposibilidad de presentarse al órgano jurisdiccional en la fecha y hora señalados para la audiencia debido a un posible bloqueo por el abuso al derecho de manifestación, se estarían vulnerando también los derechos de las personas lo cual produce diversidad de implicaciones jurídicas, entre ellas y nuevamente recordando que se daría en un ámbito jurídico procesal, la incapacidad de defender sus posturas y exponer sus

pretensiones. Esto por mencionar una de las varias implicaciones que el uso abusivo del derecho de manifestación representa. A continuación, las opiniones al respecto de este extremo por parte de los entrevistados.

“El daño que causan en ese tipo de manifestaciones es severo a la economía, es severo a la salud de los propios habitantes, porque cualquiera de nosotros que ha estado tres o cuatro horas dentro de un vehículo, esperando que den paso los que están bloqueando las carreteras, se llega a la desesperación, es propenso a cometer un delito pues uno se llena de impaciencia, y de ira, por lo que este sentimiento se traslada a otras personas o alguien puede cometer, como lo cometió el hijo de un pastor que actualmente está enjuiciado, que cuando él iba pasando, los estudiantes que manifestaban empezaron a pegarle en los vidrios del carro, comenzaron a pegar en el capot y guardafangos del carro y él aceleró y atropelló a varios estudiantes causándole la muerte incluso a una de ellas. Es decir, no es un instinto asesino, sino que la situación en la que uno se encuentra cuando una multitud lo encierra y uno comienza a sentir temor, frustración, enojo. Incluso el derecho de manifestación ha ido atentando contra los derechos humanos, porque ha habido muchas muertes que se han ocasionado por no permitirle el paso a ambulancias o personas que van urgentemente a un centro hospitalario público o privado, esos casos quedan registrados pero la prensa no les da la cobertura que le da a otros aspectos, por lo cual la población desconoce todo lo que se está dando”¹⁶⁵.

Partiendo de lo que refiere el constituyente entrevistado, se puede mencionar que ningún derecho humano debe estar por encima de otro, por lo cual el uso excesivo en el derecho de reunión y manifestación colisiona también con otro derecho que es indispensable para la preservación de la vida, la salud, y es que tal y como se mencionó, ha habido casos en los cuales debido a las manifestaciones y bloqueos, se ha imposibilitado el paso a ambulancias para transportar a personas que se dirigían urgentemente a centros hospitalarios públicos o privados, así mismo

¹⁶⁵ Rodas Ayala Camilo. Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985. En entrevista exclusiva para esta investigación.

personas particulares que transportaban a familiares con alguna urgencia de salud. Al presentarse estos casos, se vulnera el derecho a la salud consagrado en el artículo 93 de la CPRG, el cual reza que “el goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna”, pero sobre todo se estaría vulnerando lo que establece el artículo 95 del mismo texto Constitucional, la salud, bien público, que dice literalmente que: “la salud de los habitantes de la Nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento”.

Se podría deducir entonces responsabilidad de la población respecto a la violación de un derecho humano como lo es la salud, dentro de las diferentes implicaciones jurídicas que se derivan del abuso al derecho de reunión y manifestación, pues quienes orquestan las manifestaciones al realizar bloqueos, no estarían velando por la conservación y mucho menos el restablecimiento de quienes se ven afectados por la imposibilidad de circular libremente dentro del territorio nacional.

Por otro lado, el caso que se refiere al conductor que atropelló a una alumna provocándole la muerte, pues estudiantes que manifestaban y realizaban a su vez obstrucción en la vía pública, que se aglomeraron alrededor de un vehículo golpeándolo y provocando una reacción en quien conducía, podría mencionarse como una implicación jurídica de tipo penal, puesto que la reacción del conductor podría encuadrar fácilmente en homicidio cometido en estado de emoción violenta, el cual está contemplado en el artículo 124 del decreto número 17-73, Código Penal, el cual dice que: “quien matare en estado de emoción violenta, se le impondrá prisión de dos a ocho años”. Sin embargo el Ministerio Público sindicó al responsable de esta situación “de los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones gravísimas y maltrato contra personas menores de edad”¹⁶⁶, lo anterior por referir un ejemplo.

¹⁶⁶ El Periodico. Montepeque. F. Santos. J. Jabes Meda declarará la próxima semana por la muerte de Brenda Domínguez. Guatemala, año 2017. <https://elperiodico.com.gt/nacion/2017/04/29/se-entrego-a-la-policia-emanuel-meda/> . 27 de noviembre de 2017.

Para entender la extensión y la magnitud en las implicaciones jurídicas que se derivan del abuso al derecho Constitucional de reunión y manifestación, es necesario mencionar el artículo 26 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la cual menciona lo relativo al desarrollo progresivo diciendo que: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por la vía legislativa u otros medios apropiados”. Por su parte la CPRG, contempla estos principios dentro de sus artículos 118 y 119, los cuales mencionan que “es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional”, a su vez en el literal a) menciona que dentro de las obligaciones del Estado, está la de “Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuniarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza”.

Dentro de la promoción de otra naturaleza para el desarrollo económico de la Nación, a lo cual está obligado el Estado, se podría mencionar la inversión proveniente del exterior, es decir cuando otros países o industrias pertenecientes a países extranjeros, se ven atraídos o interesados por las diversas condiciones que presenta el país para así invertir en él, lo cual genera además de la productividad, empleo y riqueza para Guatemala. En realidad lo que sucede es que, aunque el Estado propicie, de forma deficiente o no, esta situación, los abusos al derecho de reunión y manifestación constituyen una especie de inestabilidad en el régimen económico y social del país, lo cual crea una serie de interrogantes a los países o industrias que desean invertir en el mismo, sobre si es conveniente o no para ellos arriesgar su capital en una nación con conflictos de esta naturaleza, lo cual de un modo u otro, frena la productividad y únicamente constituiría pérdidas económicas, lo cual no es

atribuible directamente al Estado de Guatemala, si no a la población que a largo plazo ve afectados también sus intereses económicos.

Para entender estas implicaciones, es bueno observar las opiniones vertidas al respecto, de los sectores públicos, económicos y sociales. “Si se utilizara como debe ser, lógicamente no afectaría, pero si se utiliza como en la actualidad por las organizaciones que se han ido formando por ejemplo, imaginemos que viene un producto de materia prima para cualquier tipo de empresa, y a veces las empresas no cuentan con el recurso económico necesario para tener una materia prima para mucho tiempo, como dos o tres meses, sino que es para dos o tres días, por lo cual están constantemente movilizándose hacia los puntos de venta y en uno de esos viajes se encuentran con carreteras bloqueadas lo cual va afectando a la productividad, pues en ocasiones se quedan varados en esos puntos y si son productos perecederos pues dichos productos se terminan arruinando lo cual produce un aumento en los costos, y esos costos muchas veces van a ser trasladados al usuario o consumidor final. Finalmente afecta pues como se sabe, la parte económica es la que se mantiene activa todo el tiempo para brindar sustento a la población”¹⁶⁷.

Por otro lado, otro de los representantes del sector económico opina: “Se tienen cifras que oscilan en los cincuenta millones y cien millones de dólares cada vez que el país se para, eso no afecta precisa o solamente a las grandes empresas o industrias, sino a toda aquella persona que vive del comercio aun cuando sea informal. Esto se da pues en algún momento bloquean la totalidad de las carreteras en nuestro país, entonces eso nos da un resultado de cien millones de dólares diarios de pérdida”¹⁶⁸.

¹⁶⁷ Rojas Otto René. Presidente de la Cámara de la Industria área de Occidente. En entrevista exclusiva para esta investigación.

¹⁶⁸ García Herrera Jorge. Miembro de la Cámara de Comercio filial de Quetzaltenango. En entrevista exclusiva para esta investigación.

Por su parte del sector público se tiene el siguiente punto de vista: “El área a la que yo pertenezco es del sector público proveniente del ejecutivo, porque soy asesor jurídico del gobernador departamental de Quetzaltenango, y hemos visto claramente afectados los intereses y las instrucciones propias de la gobernación departamental que es velar por la búsqueda del desarrollo, el crecimiento integral del departamento.

Lo que sucede muchas veces es que, la carente regulación de la forma de generar manifestaciones hace que las personas creen que con dar aviso a gobernación tienen autorizado generar una manifestación, eso es completamente falso, porque cuando avisan a gobernación nosotros lo que hacemos es darnos por enterados, prevenir a la Policía Nacional Civil de conformidad con las funciones que le otorga el Organismo Ejecutivo al gobernador, prevenir a las instituciones de conciliación como lo son la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, inclusive la Comisión Nacional y Presidencial del Dialogo, pero nos limitamos a eso, pues no podemos tener intervención o injerencia pues no es competencia nuestra la regulación directa de esto.

Tenemos entonces una primera falencia, que, si bien recordamos, la Constitución regula entre sus artículos 153 al 155 la sujeción a la ley que tienen los funcionarios y empleados públicos que sólo pueden hacer lo que esta les faculta, si no tenemos una norma jurídica que faculte al gobernador para tener una intervención directa, el problema es que la colectividad piensa que sí la tiene. Hemos tenido problemas porque nos han interpuesto amparos, nos hemos tenido que pronunciar y evacuar audiencias, hemos tenido que explicar que realmente la gobernación busca ser un ente neutral y de conciliación, somos además participes solamente en un ánimo de interpretación, ya que si el gobernador es el representante directo del presidente por delegación expresa de la ley en el departamento, la principal o primera función que la ley le establece al presidente es respetar, cumplir y hacer cumplir las normas, en ese orden de ideas es que los gobernadores pueden intervenir como terceros de buena fe, más no existe una ley que diga que puede ser conciliador o que pueda participar en mesas de diálogo ni nada de eso. Entonces desde la perspectiva de gobernación

es una tarea muy difícil y complicada pues nos vemos por un lado con los requerimientos de la población, de apoyo, la gente exigiendo participación y por el otro lado tenemos el límite de la norma jurídica, pues ese es un impase.

Por lo tanto como institución pública, nos encontramos con que a falta de regulación adecuada, imposibilidad de poder actuar, por lo que me parece muy prudente que en su entrevista o en su trabajo de campo usted se acerque al sector público, pues cuando estamos afuera nos es fácil decir por qué no actúan, por qué no hacen, si tan fácil que lo vemos, sin embargo, si la Constitución dice el funcionario puede hacer lo que la ley le faculta, y no hay ley que le faculte actuar, inmediatamente alguien te mala fe pudiera actuar contra el funcionario en un abuso de autoridad, o en una extralimitación del ejercicio de la función y puede iniciar procesos de deducción de responsabilidades, es por ello que muchos funcionarios no actúan, porque temen más que inicien procesos contra ellos, a que alguien se los agradezca en alguna oportunidad, por lo que vemos que existe mala fe de parte de entes que me reservo el nombre por ética pero que están acostumbrados a manifestar, que ya ni hacen solicitud pues saben que no hay competencia pues ellos están bien enterados de lo jurídico, simplemente avisan, y creen que eso les faculta para hacer todo, pues la gente tiene una rara concepción de lo que es el ejercicio del derecho Constitucional de la manifestación y reunión, pues esta faculta para que se ejerza libremente ese derecho, pero en ningún momento faculta para que tapen carreteras, que en la experiencia ha causado más perjuicio que beneficio.

El error está en la no regulación del alcance que tiene este derecho, pues yo me puedo reunir si estoy en contra de alguien, en un café, en una biblioteca, en la universidad, en el colegio, en un parque, pero el problema es que entiendo desde el punto de vista de la colectividad de que, si no generan un impacto social por llamarlo de alguna manera, ellos consideran no ser escuchados. Pues hay gente que ha

luchado por años, que hasta que no genera un impacto social, no son escuchados”¹⁶⁹.

Lo expresado, al analizarlo con detenimiento, es bastante lógico, pues los artículos 152 al 156 de la CPRG, establecen lo relativo al poder público y su ejercicio, y por mencionarlos de forma somera y literal, en ellos se contempla que el ejercicio del poder público está sujeto a las limitaciones señaladas por la constitución y la ley. Por otro lado, establece que “ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política, puede arrogarse su ejercicio”, es decir, nadie puede atribuirse en lo absoluto facultades que no le han sido otorgadas relativas al poder público. Finalmente, los funcionarios únicamente pueden hacer todo aquello que la ley les dicta que pueden hacer, y no pueden estar por encima de la ley tal y como lo establece el artículo 154 del texto Constitucional. Por lo tanto, la población, por desconocimiento del correcto y real ejercicio de sus prerrogativas y derechos, en determinado momento y a través de la presión que se ejerce con el uso excesivo y abusivo de las manifestaciones en contra de funcionarios, sin conocimiento de las atribuciones de los mismos, se les puede hacer caer o incurrir en responsabilidad por infracción de la ley, sin mencionar que los mismos no están obligados a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito. Esta es otra de las representaciones de las diversas implicaciones jurídicas que se derivan del abuso al derecho Constitucional de reunión y manifestación.

Finalmente se tiene la opinión del sector de la sociedad, el cual cuenta con un sindicato en su representación, el magisterio, cuyos miembros o más bien los entrevistados respecto a las implicaciones jurídicas que se derivan del abuso al derecho Constitucional de reunión y manifestación opinan que: “Considero que existen otros medios por los cuales se pueden solucionar las diferentes problemáticas y necesidades que existen en nuestra sociedad, sin embargo, casi

¹⁶⁹ Reyna López Gustavo Alberto. Asesor jurídico del gobernador departamental de Quetzaltenango. En entrevista exclusiva para esta investigación.

siempre se recurre a las manifestaciones en las que los más afectados son los pequeños empresarios y el pueblo mismo se perjudica”¹⁷⁰ .

“En forma jurídica se viola a la libre locomoción a personas que no tienen nada que ver con lo que se pretende en la manifestación, por ejemplo, si el magisterio se pronuncia respecto a mejorar la calidad educativa o mejorar los recursos económicos para útiles escolares o refacción, inclusive cuando existen leyes que pudieran violentar los derechos de la sociedad guatemalteca el magisterio se ha pronunciado, cuestión que no han hecho otros sectores. Entonces cuando se focaliza en determinada necesidad, alguien de otro sector puede argumentar que no tiene nada que ver con lo que se está manifestando por lo que viéndolo de una manera aislada se podría decir que se le está afectando pues no se puede trasladar de un lugar a otro con mercadería, en el sector de salud con un paciente que está siendo trasladado, o no llegar a su lugar de trabajo. Pero viéndolo en un contexto social, todas las manifestaciones que se han hecho, de una u otra manera tienen efectos en la ciudadanía en general, por ejemplo, en el caso del magisterio cuando manifiesta para mejorar la calidad educativa, la pregunta sería ¿Quiénes están en la cola por la obstaculización, no tendrán hijos en escuelas? Por lo que de una forma u otra también se benefician de la petición que se está realizando”¹⁷¹ .

Dichas opiniones son congruentes con lo expuesto respecto a que previo a realizar una manifestación, deben agotarse todos los recursos y herramientas legales puestas a disposición por el Estado a los habitantes de Guatemala para la solución de conflictos y percepción de las necesidades de la población en general, esto con la finalidad de conservar el orden público y no vulnerar derechos ajenos o de personas que no estén involucradas en las peticiones que se deseen realizar. Así mismo, se percibe que el atropello más recurrente es la violación al derecho que poseen todos los guatemaltecos de circular con libertad y sin más limitaciones que las que

¹⁷⁰ Morales López Andrea María. Miembro del magisterio. En entrevista exclusiva para esta investigación.

¹⁷¹ Paz Taracena Selvin. Miembro del magisterio. En entrevista exclusiva para esta investigación.

establece la ley, y no las que se impongan con los bloqueos en forma de manifestación pacífica.

4.4 Alternativas se viables para erradicar los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación.

Limitar el derecho de reunión y manifestación sería contrariar los principios mismos de un derecho humano, el cual constituye la libertad en su ejercicio por cualquier persona que posea la calidad de ser humano y el cual debe estar sujeto a la protección del Estado sin la necesidad de ser contemplado dentro de su ordenamiento legal interno. Sin embargo, por el escenario en que se ejercita el derecho de reunión y manifestación, vulnerando otros derechos humanos contemplados y reconocidos dentro de la CPRG y tratados y convenios en materia de Derechos Humanos, se hace necesaria la elaboración de líneas directrices en las cuales se pueda operar al momento de llevar a cabo una manifestación, y no solamente las de que una reunión y manifestación se deben realizar de forma pacífica y sin armas, lo cual deja abiertas las posibilidades para un sin número de abusos ajenos a los mencionados con anterioridad. En este sentido también han opinado los diferentes sectores de la sociedad entrevistados en exclusiva para esta investigación.

“Considero que se debería emitir una ley que regulara el derecho de reunión y manifestación, pero que los órganos correspondientes como el Ministerio de Gobernación o autoridades que les compete la hagan cumplir, pues en todos los países existen manifestaciones, pero los latinoamericanos ya nos acostumbramos a hacer manifestaciones que le causan daño a la propia población. No le causan daño al gobierno que es normalmente a quienes van dirigidas las manifestaciones, sino a la misma población. Existen países que proveen a la población de un sector específico donde pueden manifestar. Pues la manifestación no es para provocar caos, la manifestación es para decir qué es lo que se quiere, se piensa o se siente. En Guatemala no es así, por lo cual sí ha existido un abuso en el derecho de

manifestación, la población no lo ha mal entendido, más bien a propósito lo interpreta a su manera, según sus intereses de grupo”¹⁷².

“Para erradicar estos abusos, en primer lugar las reuniones y manifestaciones que se tienen deben estar desarrolladas en base a puntos específicos, ya que me he dado cuenta que muchas veces se convoca a una reunión o manifestación por un tema en específico, sin embargo, al encontrarse en dicha reunión o manifestación ya no se trata el tema principal sino que se empiezan a sacar a colación otros temas que nada tienen que ver y que entorpecen la negociación, y es cuando se dan los diferentes abusos”¹⁷³.

Además de la concepción de que se debe regular la materia de las reuniones y manifestaciones, también se ha expresado que cuando se realicen con el motivo de tratar puntos de interés social, se toquen específicamente los puntos planteados y no que de ellos surjan otros que nada tienen que ver con los objetivos primarios de la manifestación, esto con el afán de no entorpecer negociaciones y de la concientización por parte de la población guatemalteca.

“Punto número uno, que el país que esté dirigiendo en su momento, esgrima todo el derecho de gobernabilidad que la Constitución de la república le otorga, pues en este momento existe ingobernabilidad y todo el mundo hace lo que se le da la gana, lo cual conocemos como anarquía y estos grupos de los que se hablan, pues se aprovechan de la ingobernabilidad ejerciendo anarquía. Así mismo debería erradicarse la corrupción, pues ha habido muchas más protestas por este tema que por tratar de imponer una ideología o doctrina política por grupos interesados en que se ejerza así gobierno. El gobierno de turno debe utilizar coerción, no represión sino coerción, para que cada quien asuma su propia responsabilidad, los grupos que están queriendo evidenciar de alguna manera sus posturas ideológicas, doctrinarias

¹⁷² Rodas Ayala Camilo. Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985. En entrevista exclusiva para esta investigación.

¹⁷³ Rojas Otto René. Presidente de la Cámara de la Industria área de Occidente. En entrevista exclusiva para esta investigación.

y políticas, que se alineen y que acepten que, o se someten a la gobernabilidad del país a las buenas, o a las malas pues el gobierno tiene todo el derecho de ejercer coerción”¹⁷⁴.

El punto de vista anterior, sugiere ir más allá de la regulación del derecho Constitucional de reunión y manifestación, y refiere más bien el ejercicio en la atribución del Estado establecido en el artículo segundo de la CPRG, el cual reza que “es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la república, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”, y en tal virtud es que el Estado debe ejercer su gobernabilidad para preservar el orden público y la realización del bien común, esto pues en determinado momento las manifestaciones son realizadas por grupos específicos que no representan los intereses de la colectividad sino más bien intereses particulares que nada tienen que ver con el progreso y beneficio de la sociedad.

Por su parte los representantes del sector público y social opinan que: “Determinar que los sectores públicos tienen la obligación de conocer y resolver las peticiones que los interesados tienen, sin embargo, ahí caemos a que existe una necesidad que si bien es cierto no es visible por simple inspección, sí es existente, y es la falta de conocimiento que tiene la ciudadanía con relación a sus derechos. La ciudadanía conoce fragmentos de la Constitución y no tiene establecidos realmente los lineamientos de cómo, cuándo y dónde debo aplicar mis derechos y la clara conciencia de que un derecho va a tener su límite donde otro inicia, por lo que considero que esto es vital pues es un tema relevante y actual que si no se logra esclarecer ni solventar va a provocar un colapso social”¹⁷⁵.

“No tengo mucho conocimiento con relación al ámbito jurídico, pero sí considero que debería haber un tipo de sanción o ley que regule las manifestaciones para que no

¹⁷⁴ García Herrera Jorge. Miembro de la Cámara de Comercio filial de Quetzaltenango. En entrevista exclusiva para esta investigación.

¹⁷⁵ Reyna López Gustavo Alberto. Asesor jurídico del gobernador departamental de Quetzaltenango. En entrevista exclusiva para esta investigación.

se recurra a estas instancias en primer lugar, y así evitar que cualquier sindicato salga y pueda obstaculizar el paso o realizar las asambleas que se les da la gana, sino que más bien tengan una base, algo lógico y una situación que en realidad lo amerite”¹⁷⁶.

“Se debería regular o reglamentar la disposición Constitucional del derecho de reunión y manifestación, aunque el derecho de reunión casi siempre se practica de forma cerrada o privada por lo cual no afecta tanto como las manifestaciones”¹⁷⁷. Con base en las opiniones expresadas en las entrevistas correspondientes, se tiene un consenso respecto a que el derecho de reunión y manifestación debería estar regulado pero además de ello debería existir una ciudadanía real, es decir que todos los ciudadanos guatemaltecos deben conocer sus derechos pero también sus obligaciones contenidas no sólo en la Constitución sino también en leyes especiales, para que no sólo conozcan fragmentos de derechos para interpretarlos a conveniencia, sino ejercerlos de la forma en que fueron gestados.

4.5 Necesidad de la regulación específica del derecho Constitucional de reunión y manifestación.

Como extensión de la pregunta anterior, acerca de las alternativas viables para erradicar los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación, surge la interrogante de si sería oportuno regular el derecho Constitucional de reunión y manifestación, puesto que la única línea directriz que se posee respecto al ejercicio de este derecho es que debe realizarse de forma pacífica y sin armas, no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, pero no se han regulado explícitamente con el objeto de garantizar el orden público, puesto que la limitación de los derechos constitucionales, y en este caso del derecho de reunión y manifestación únicamente contempla los estados de excepción, establecidos dentro de la Ley de Orden Público y Estados de Excepción y dentro del texto Constitucional en su artículo 139.

¹⁷⁶ Morales López Andrea María. Miembro del magisterio. En entrevista exclusiva para esta investigación.

¹⁷⁷ Paz Taracena Selvin. Miembro del magisterio. En entrevista exclusiva para esta investigación.

Al respecto los entrevistados han referido que: “Lo que se debe procurar al momento de regular el derecho de manifestación, es no obstaculizar o no entorpecer otros derechos, pues lo que se acostumbra en Guatemala es que al momento de hacer valer determinado derecho casi siempre se obstaculiza o se choca con otro derecho. Sin embargo, considero que nada de esto (las manifestaciones) sucedería si cada sector de la sociedad cumpliera con sus obligaciones, por ejemplo, si el gobierno cumpliera con sus atribuciones sin que nadie se los pida”¹⁷⁸.

Así mismo que: Considero que los mecanismos de aplicación o de solución a corto, mediano y largo plazo podrían ir ligados estrechamente a la generación de una regulación adecuada. Recordemos que si bien es cierto la Constitución es la norma suprema, también hay autores que determinan a la Constitución como el punto de partida de las leyes, por lo tanto, ya tenemos un derecho de reunión y manifestación, por qué no crear una ley que genere la amplitud necesaria de este derecho. Hay que explicar que reunirse y manifestar no son obstruir, pues eso es limitar”¹⁷⁹.

Desde el sector económico, como lo es la cámara de la industria y de comercio respectivamente, se obtuvieron las respuestas siguientes: “Como no hay coerción, todo el mundo tergiversa a su sabor y antojo y le da el enfoque que le conviene a la ley que ampara la libre manifestación y la libre emisión del pensamiento también, por lo que si el gobierno ejerciera coerción, cada persona que quisiera manifestarse tendría todo su derecho y de hacerlo de la mejor manera, de tal forma que no se afecte la libre locomoción que es lo que peleamos pues cuando se paraliza la libre locomoción de todos los ciudadanos en general, comerciantes e industria, entonces se afectan los intereses de todos en este país. Creería que una de las formas de parar esa anarquía y ese uso abusivo del derecho de manifestación es que se tipificara el tapar carreteras.”¹⁸⁰.

¹⁷⁸ *Loc. Cit.*

¹⁷⁹ Reyna López Gustavo Alberto. Asesor jurídico del gobernador departamental de Quetzaltenango. En entrevista exclusiva para esta investigación.

¹⁸⁰ García Herrera Jorge. Miembro de la Cámara de Comercio filial de Quetzaltenango. En entrevista exclusiva para esta investigación.

“Regular es algo difícil, pues desde la casa le dicen a uno que no haga determinadas cosas, sin embargo, uno lo sigue haciendo. Lo mismo pasa con el derecho a manifestarse, puede que se hagan leyes para regular la materia, pero en determinado momento no van a aplicarse, pues hay leyes para todo, pero no se aplican. Por lo tanto, en mi opinión, es mejor hacer conciencia en las personas, de que cada uno de nosotros como ciudadanos tomemos con responsabilidad el derecho a manifestarnos y que lo utilicemos en pro del desarrollo del lugar donde vivimos, nos desenvolvemos, y también en beneficio de nuestras familias, y que quienes manejan a los grupos que manifiestan sean conscientes de que esa situación no puede seguir así, pues existe gente que está organizada que ha recibido apoyo de Venezuela y de otros países para poder implementar sistemas políticos que tienen en otros países lo cual es muy difícil”¹⁸¹

Al emplear los datos obtenidos a través de los instrumentos de investigación, como lo son las entrevistas, y toda la información recabada dentro del marco teórico, se logró responder a la pregunta de la investigación la cual es ¿cuáles son los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación y sus implicaciones jurídicas?, al mismo tiempo también se logró alcanzar el objetivo general de la investigación, el cual era analizar los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación, lo cual deriva en que los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación están íntimamente ligados con el uso excesivo y hasta impertinente de dicho derecho, debido a que en Guatemala, los grupos han perdido la noción de lo que en realidad se pretendía con el reconocimiento del derecho de reunión y manifestación, dado que en primera instancia el deber ser del referido derecho, fue para brindarle la potestad a la población de expresar su descontento o inconformidad respecto a las decisiones políticas, administrativas, económicas y sociales que puede llegar a realizar el Estado y todas sus instituciones.

¹⁸¹ Rojas Otto René. Presidente de la Cámara de la Industria área de Occidente. En entrevista exclusiva para esta investigación.

Se puede catalogar de impertinente el ejercicio del derecho Constitucional de reunión y manifestación, toda vez que el Estado de Guatemala, constitucionalmente y a través de leyes y normativas internas, las cuales ha puesto a disposición de la población para que funjan como herramientas útiles para el planteamiento y presentación de necesidades por parte de la ciudadanía, no se utilizan, por el desconocimiento de la ley o con intención de salvaguardar intereses personales y no de la colectividad, por lo cual se recurre a ejercitar el derecho de manifestación el cual en sí mismo no constituye un mal, pero en determinado momento se ha atentado contra las características de pacífico y sin armas ni uso de violencia que posee este derecho, hasta llegar al extremo de delinquir, ya que se puede encuadrar la actitud dentro de los delitos contra el orden público que contempla el decreto 17-73, Código Penal, el cual en su artículo 397 contempla las reuniones y manifestaciones ilícitas estableciendo que “quienes organizaren o promovieren cualquier reunión o manifestación pública con infracción de las disposiciones que regulan ese derecho o participaren en ellas, serán sancionados con prisión de seis meses a dos años”, esto es presumible dado a que en Guatemala se han realizado manifestaciones, las cuales se pueden catalogar como ilegales pues atentan o infringen las únicas dos disposiciones que regulan este derecho, la paz y la no utilización de armas para el efecto.

Se logró también alcanzar el objetivo específico de definir ampliamente el derecho Constitucional de reunión y manifestación, y se puede decir que en el caso derecho de reunión, este no atenta en contra de otros derechos y en su mayoría no ocasiona desorden público, dado que cuando este se ejercita se realiza en lugares cerrados por lo cual cuenta con una característica más exclusiva y privada, o sí se llegara a realizar en lugares abiertos, se toman lugares específicos en los que no se atenta contra la libertad de las demás personas, y solamente participan quienes están interesados en los objetivos de la reunión. Por otro lado con la manifestación se presentan otros fenómenos los cuales ya han sido expuestos dentro de la investigación, que aunque en esta también participan únicamente las personas interesadas con los objetivos que se pretenden alcanzar al realizar la manifestación,

esta si constituye una violación constante a los derechos humanos consagrados dentro del texto Constitucional así como en tratados y convenios en materia de derechos humanos, pues al realizarla con uso de violencia, alteración del orden público, y además de ello vedando el ejercicio de derechos de las demás personas, sin mencionar que esta se realiza en la vía pública entendida esta última como el área donde pueden transitar libremente vehículos y personas, provoca una colisión de derechos, lo cual es de suma importancia pues dentro de las características de los derechos humanos no existe una jerarquía por lo cual al ejercitar uno de ellos no se puede menoscabar o alterar el ejercicio del resto de derechos humanos.

Otro de los objetivos de la investigación era identificar los límites del derecho Constitucional de reunión y manifestación, y se puede decir que dicho objetivo se alcanzó y que lamentablemente en el caso de Guatemala las únicas limitaciones y regulación al respecto, las establece la misma Constitución Política de la República de Guatemala, pues dentro del artículo 33, el cual contempla lo relativo al derecho de reunión y manifestación, se menciona que sus únicas limitaciones son que la reunión o manifestación cumpla con las características de pacífica y sin armas, así mismo deja abierto su ejercicio sin establecer líneas directrices para ello pues reza que “los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados; y la ley los regulará con el único objetivo de garantizar el orden público”. Sin embargo, no existe ley que los regule específicamente con el objetivo de garantizar el orden público, salvo la excepción de lo que establece el capítulo cuarto de la Constitución, respecto a la limitación a los derechos Constitucionales, que directamente en el artículo 138 de la CPRG establece que “en el caso de invasión del territorio, de perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5º, 6º, 9º, 26º, 33º, primer párrafo del artículo 35º, segundo párrafo del artículo 38º y segundo párrafo del artículo 116º”, así mismo lo relativo a lo anteriormente expuesto lo regula la Ley de Orden Público y Estados de Excepción.

El tercero de los objetivos que se contemplaron en la investigación era establecer los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación y la contravención que este tiene hacia los derechos humanos. Se logra alcanzar el objetivo al exponer que una manifestación, bajo ninguna circunstancia posible, puede alterar el orden público ni alterar o contravenir otros derechos Constitucionalmente reconocidos así como en materia de Derechos Humanos, pues al instaurar bloqueos, el cual es un medio hostil para impedir el libre tránsito de vehículos y personas de un lugar a otro, la realización de intimidación pública el cual es un acto accesorio al momento de ejercitar el derecho de manifestación dado que se infunde temor público, la sedición lo cual se refiere a alzar la voz por parte de un grupo de personas considerable para lograr objetivos que fácilmente se pueden alcanzar a través de vías legales preestablecidas, usurpación, que se puede llegar a presentar por agredir la propiedad inmueble por vía de una desposesión o apropiación indebida, y llegando finalmente el linchamiento, el cual constituye una especie de manifestación al cual se recurre en determinado momento para tomar justicia en propias manos por no estar de acuerdo con la administración de justicia de parte de los órganos correspondientes.

Todos los abusos y supuestos indicados en el párrafo anterior atentan contra derechos Constitucionales y derechos humanos como: el derecho a la vida, la libertad e igualdad, la libertad de acción, presunción de inocencia, libertad de locomoción, derecho de petición, libertad de emisión del pensamiento, derecho a la educación, derecho a la salud, y el derecho al trabajo, lo cual lleva al alcance del objetivo consistente en exponer las diferentes implicaciones jurídicas que se derivan del abuso al derecho Constitucional de reunión y manifestación, lo cual se logró a través del análisis en cuanto a que el derecho de reunión y manifestación, atenta principalmente o a simple vista contra el derecho de libertad de locomoción, el cual faculta a los guatemaltecos a transitar y trasladarse de un lugar a otro dentro del territorio de la república de Guatemala, sin más limitaciones que las establecidas por la ley, dejando claro que la instauración de bloqueos en puntos estratégicos del país no es una vía legal para vedar el derecho de libre locomoción.

Esto trae consigo una serie de repercusiones en otras materias que a su vez constituyen implicaciones jurídicas de diferente naturaleza, por ejemplo la libertad de industria, comercio y trabajo, puesto que al bloquear las diferentes vías de acceso en el país, se está impidiendo el avance y generación efectivas en el tema económico, lo cual en última instancia repercute directamente en el progreso del país, lo cual afecta a todos los ciudadanos guatemaltecos, sin alcanzar así, los principios por los cuales se realiza una manifestación, los cuales son, al haber agotado la vía legal preestablecida para hacerse escuchar respecto a las necesidades de la población, expresar públicamente la inconformidad respecto a las decisiones del Estado y sus instituciones, promoviendo así el alcance del bien común y no la defensa o la persecución fines o intereses particulares provenientes de sectores específicos de la población.

Finalmente se pretendía reconocer la confusión que existe en la población respecto de hacer valer el derecho Constitucional de reunión y manifestación y la realización de bloqueos. Los bloqueos deben ser entendidos como una vía ilegal de atentar en contra de otro derecho reconocido dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala como lo es la libertad de locomoción, el cual es reconocido también por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos como el derecho de circulación y de residencia, que en esencia expresan que toda persona que se encuentre dentro del margen de la ley en un territorio específico, en este caso dentro del territorio de Guatemala, posee la libertad absoluta de movilizarse, trasladarse y establecerse donde mejor le convenga apegándose únicamente a las disposiciones legales preestablecidas para el efecto.

Sin embargo, en Guatemala, la gente ha confundido, y atenta constantemente contra estos derechos al recurrir a manifestaciones ilegales, puesto que no sólo alteran el orden público, sino que también vedan otros derechos humanos y Constitucionales tales como lo son el derecho a la salud por citar un ejemplo, sin tomar en consideración que este es un bien público, y que “todas las personas e instituciones están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento” tal y como reza el

artículo 95 de la CPRG, ya que si bien es cierto es obligación del Estado velar y proporcionar asistencia a las personas, el resto de la población también están obligados a la observancia en el cumplimiento de dicha atribución, pero en el país se han presentado circunstancias en las cuales personas particulares y hasta ambulancias que trasladan enfermos o personas que requieren asistencia médica urgente, se han visto entorpecidas y hasta imposibilitadas de transitar rápida y efectivamente a los centros hospitalarios o asistenciales porque se encuentran con que un grupo de manifestantes han establecido bloqueos en diferentes puntos importantes del país.

CONCLUSIONES

1. Los derechos Constitucionales de reunión y manifestación, aunque han sido establecidos en un mismo artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala, no necesariamente se ejercen de forma conjunta, ya que la reunión se presume de carácter privado, mientras que la manifestación se ejercita en forma pública, y es el uso excesivo y abusivo de ambos derechos, sin la observancia de otros medios de resolución de conflictos, requerimientos y necesidades son los que constituyen una amenaza para el resto de la población guatemalteca en sus diferentes sectores: jurídico, económico, político e institucional.
2. El derecho constitucional de reunión y manifestación se ha definido ampliamente y se puede decir que la reunión es la agrupación de personas que persiguen un fin determinado pero que el ejercicio de esta es de carácter privado y generalmente en lugares cerrados. Mientras que la manifestación, siendo también la agrupación de un número considerable de personas, fue concebida en primer lugar para otorgarle voz al pueblo, de expresar inconformidad públicamente respecto de las decisiones políticas, administrativas, económicas y sociales del Estado y sus diferentes instituciones.
3. Los abusos al derecho Constitucional de reunión y manifestación están íntimamente ligados al ejercicio de estos de forma ilegal y tergiversando su finalidad, puesto que en sí mismos no representan un mal, dado que es un derecho que poseen todos por su calidad de seres humanos además de estar relacionados con el derecho de libertad de emisión del pensamiento, pero en forma colectiva, también contemplado dentro de la Constitución, sin embargo, a través de sus distintas modalidades como lo son: bloqueos, intimidación pública, sedición, usurpación, y linchamiento constituyen una serie de amenazas en contra de los derechos Constitucionales así como derechos humanos del resto de la población.

4. Además de la contravención a derechos Constitucionales y derechos humanos, el derecho de reunión y manifestación, y principalmente el ejercicio ilegal en el derecho de manifestación deriva en consecuencias jurídicas de carácter penal, cuando se realizan reuniones y manifestaciones ilícitas, que a su vez repercuten en la sociedad a través de su economía, comercio, industria, administración pública, y trabajo pues entorpecen el desarrollo de un país lo cual termina por afectar a la ciudadanía en general y no a los gobernantes o representantes de las instituciones estatales que es a quienes va enfocada una manifestación principalmente.
5. Los sectores de la población guatemalteca y los grupos que propician las manifestaciones, en su mayoría, confunden el ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica y sin armas con la instauración de bloqueos como medio de presión a las autoridades del Estado para que estos últimos cumplan con las peticiones y objetivos que persiguen las manifestaciones. Por lo tanto, el bloqueo, es el medio de manifestación ilícita más utilizado por la población guatemalteca, acompañado de la intimidación pública para lograr sus fines.
6. La regulación guatemalteca en cuanto al derecho de reunión y manifestación es muy ambigua, siendo que únicamente se cuenta con el texto Constitucional y la Ley de Orden Público y Estados de Excepción para contemplar las situaciones en las cuales puede ser limitado este derecho Constitucional, por lo cual una regulación específica en la materia así como un refuerzo a los deberes y derechos cívicos de los ciudadanos guatemaltecos se considera idóneo para que se vea alcanzado lo preceptuado por el artículo 135 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que en sus incisos b) y e) respectivamente, establecen que los guatemaltecos debemos “cumplir y velar, porque se cumpla la Constitución de la República” y “obedecer las leyes”.

REFERENCIAS CONSULTADAS.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Código Penal Concordado y Anotado con Exposición de motivos y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Octava Edición. F&G Editores. Guatemala, año 2013.
2. Convención Americana sobre Derechos Humanos Comentada.
3. Corte de Constitucionalidad. Constitución Política de la república de Guatemala con Notas de Jurisprudencia. Editorial Ediciones Especializadas. Guatemala, año 2014.
4. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Argentina, año 2004.
5. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Editorial Heliasta S.R.L. 12ª edición. Argentina.
6. Diccionario Jurídico Elemental. Nueva Edición actualizada Corregida y Aumentada. Editorial Heliasta S.R.L. Undécima Edición, año 1993.
7. Diccionario Jurídico Espasa. Editorial Espasa Calpe. España, año 1998.
8. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Monografías de derechos humanos, tomo I. Editorial Cara Parens de la Universidad Rafael Lanivar. Guatemala, año 2013.
9. García Bauer José. Digesto Constitucional. Asamblea Nacional constituyente. Guatemala año 1984.
10. García Laguardia Jorge Mario. Política y Constitución de Guatemala. La Constitución de 1985. Segunda Edición. Institución del Procurador de los Derechos Humanos. Guatemala, año 1994.
11. Guacamaya Betancourt Andrea de los Angeles. El Cumplimiento de las Sentencias Emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la responsabilidad Adquirida del Estado de Guatemala. Tesis de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad de San Carlos de Guatemala.
12. Mendoza G. Lissette Beatriz y Orantes Mendoza Ricardo. Constitución Explicada. Tercera Edición. Editorial Jurídica Salvadoreña. Guatemala, año 2010.

13. Pereira Orozco Alberto y E Richter Marcelo Pablo. Derecho Constitucional. Séptima Edición. Ediciones de Pereira. Guatemala, año 2012.
14. Porras Escobar Gloria Patricia. Constitución Política de la república de Guatemala con Notas de Jurisprudencia. Editorial Servi Prensa. Guatemala. Año 2015.

Referencias normativas:

1. Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala.
2. Asamblea Nacional Constituyente, decreto número 7. Ley de Orden Público.
3. Congreso de la República de Guatemala, decreto número 14-41 Código de Trabajo.
4. Congreso de la República de Guatemala, decreto número 17-73 Código Penal.
5. Congreso de la República de Guatemala, decreto número 2-70 Código de Comercio.
6. Congreso de la República de Guatemala decreto número 2-89 Ley del Organismo Judicial.

Referencias electrónicas:

1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. <http://www.corteidh.or.cr/>
2. Procurador de los Derechos Humanos. <http://www.pdh.org.gt/articulo/derechos-humanos/que-son.html>.
3. Real Academia Española. <http://www.rae.es/>

ANEXOS.

Modelo de entrevista.

Universidad Rafael Landívar
Campus de Quetzaltenango
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales



Tesis: Abusos al Derecho Constitucional de reunión
y manifestación y sus implicaciones jurídicas.
Nombre: Camilo Rodas Azurdia.

Entrevista

Instrucciones: A continuación se le formularán una serie de interrogantes, mismas que se le solicita amable y respetuosamente pueda responder: _____

, representante de _____.

Sus respuestas serán de suma importancia para el desarrollo de la tesis “ANÁLISIS DE LOS ABUSOS AL DERECHO CONSTITUCIONAL DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN Y SUS IMPLICACIONES JURÍDICAS”, y las mismas serán utilizadas de forma confidencial y con fines estrictamente académicos. Desde ya, se agradece su colaboración al respecto.

1. ¿Cuáles cree usted que son los abusos al Derecho Constitucional de reunión y manifestación?

2. ¿Cuáles son las causas que originan los abusos al Derecho Constitucional de reunión y manifestación?

3. ¿Cómo afectan los abusos al Derecho Constitucional de reunión y manifestación al _____ en Guatemala?

4. ¿Qué alternativas cree que sean viables para erradicar los abusos al Derecho Constitucional de reunión y manifestación?

5. ¿Considera usted necesaria la regulación específica del Derecho de Reunión y Manifestación?